



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10^a REUNIÓN – 8^a SESIÓN ORDINARIA

31 DE AGOSTO DE 2011

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
don **JULIO CÉSAR CLETO COBOS**, del señor vicepresidente 2° del Honorable
Senado, senador **ROBERTO GUSTAVO BASUALDO**, y de la señora presidenta
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado,
senadora **SONIA MARGARITA ESCUDERO**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **ANTONIO BENIGNO RINS**

Prosecretarios:

Señor don **LUIS GUSTAVO BORSANI**, señor don **MARIO DANIELE**
y señor **GUSTAVO CARLOS VÉLEZ**



PRESENTES:

ARTAZA, Eugenio J.
 BANICEVICH, Jorge E.
 BASUALDO, Roberto G.
 BERMEJO, Rolando A.
 BIANCALANI, Fabio D.
 BONGIORNO, María José
 BORTOLOZZI DE BOGADO, Adriana R.
 CABANCHIK, Samuel M.
 CALCAGNO Y MAILLMANN, Eric
 CANO, José M.
 CASTILLO, Oscar A.
 CIMADEVILLA, Mario J.
 COLAZO, Mario J.
 CORPACCI, Lucía B.
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
 CORREGIDO, Elena M.
 DI PERNA, Graciela A.
 DÍAZ, María Rosa
 ESCUDERO, Sonia M.
 ESTENSSORO, María Eugenia
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FILMUS, Daniel F.
 FUENTES, Marcelo J.
 GIOJA, César A.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GUASTAVINO, Pedro G.
 GUINLE, Marcelo A.
 HIGONET, María de los Ángeles
 ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
 JENEFES, Guillermo R.
 JUEZ, Luis A.
 LATORRE, Roxana I.
 LÓPEZ, Osvaldo R.
 LORES, Horacio
 MANSILLA, Sergio F.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.

MAYANS, José M.
 MAZA, Ada M.
 MEABE, Josefina A.
 MENEM, Carlos S.
 MONLLAU, Blanca M.
 MONTERO, Laura G.
 MORALES, Gerardo R.
 MORANDINI, Norma E.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 OSUNA, Blanca I.
 PARRILLI, Nanci M.
 PÉREZ ALSINA, Juan A.
 PÉRSICO, Daniel R.
 PICHETTO, Miguel Á.
 QUINTELA, Teresita N.
 RACHED, Emilio A.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRIO, Marina R.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROJKÉS DE ALPEROVICH, Beatriz L.
 ROLDÁN, José M.
 SANZ, Ernesto R.
 TORRES, Eduardo E.
 VERA, Arturo
 VERNA, Carlos A.
 VIANA, Luis A.
 VIGO, Érida M.

AUSENTES, CON AVISO:

GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda B.
 MARINO, Juan C.
 MESTRE, Ramón J.
 NIKISCH, Roy A.
 PAMPURO, José J.
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 ROMERO, Juan C.
 VERANI, Pablo

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 8.)
2. **Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág. 8.)
3. **Plan de labor.** (Pág. 8.)
4. **Boleta única. Moción de tratamiento sobre tablas.** (Pág. 8.)
5. **Traslado de la obra *El pensador*, de Rodin, a la escalinata exterior del Congreso de la Nación.** (Pág. 16.)
6. **Plan de labor. Continuación.** (Pág. 18.)
7. **Licencia del senador Mestre.** (Pág. 19.)
8. **Manifestaciones.** (Pág. 19.)
9. **Moción de preferencia. Anticipo de aguinaldo, licencia ordinaria de trabajadores.** (S.-1.447/11 y S.-998/10.) (Pág. 19.)
10. **Central única de coordinación de alerta temprana para la localización de menores extraviados. Moción de preferencia.** (S.-2.059/11.) (Pág. 19.)
11. **Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, Tucumán. Moción de preferencia.** (S.-584/11.) (Pág. 20.)

Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital Federal, Claudia Beatriz Moscato (P.E.-234/11.)

Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal, Javier Anzoategui. (P.E.-235/11.)

Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital Federal, Darío Martín Medina. (P.E.-236/11.)

Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal, Luis María Rizzi. (P.E.-237/11.)

21. Consideración en conjunto de órdenes del día. (Pág. 26.)

Ley de Integración Argentina de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”. (O.D. N° 428/11.)

Repudio de las amenazas a un abogado representante de la Agrupación HIJOS. (O.D. N° 431/11.)

Pedido de informes sobre la actual floración de la caña colihue en los parques nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo. (O.D. N° 449/11.)

Pedido de informes sobre el Proyecto Federal de Innovación Productiva para la Patagonia. (O.D. N° 451/11.)

Pedido de informes sobre la creación de programas para la recuperación de la producción ganadera nacional. (O.D. N° 453/11.)

Pedido de informes sobre el programa Financiación para la Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales del Banco de la Nación Argentina. (O.D. N° 508/11.)

Pedido de señales televisivas Telesur Noticias y CN 23 en los despachos del Senado. (O.D. N° 510/11.)

Campaña de difusión del código IMEI –Identidad Internacional de Equipo Móvil–. (O.D. N° 511/11.)

Pesar por el fallecimiento de Jorge Timossi Corbani. (O.D. N° 512/11.)

Prestación del servicio de telefonía interurbana a la comunidad aborígen Ciénaga Grande, Jujuy. (O.D. N° 513/11.)

Prestación del servicio de comunicaciones móviles en la Comisión Municipal de Catua, Jujuy. (O.D. N° 514/11.)

Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. (O.D. N° 515/11.)

Rechazo de expresiones de reivindicación del accionar del último gobierno militar por parte del presidente de la Sociedad Rural de General Pico, La Pampa (O.D. N° 519/11.)

Repudio de los hechos de violencia ocurridos en la localidad de La Leonesa, Chaco. (O.D. N° 520/11.)

Repudio de alegato expresado por Jorge Rafael Videla en un juicio que se le sigue en Córdoba. (O.D. N° 521/11.)

22. Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata y tráfico de personas. (S.-706/10 y otros.) (Pág. 26.)

23. Manifestaciones. (Pág. 51.)

24. Modificación del artículo 125 del Código Penal. Moción de preferencia. (S.-3.267/10.) (Pág. 51.)

25. Registro de datos genéticos vinculados con la integridad sexual. (S.-3.370/10 y otros.) (Pág. 51.)

26. Programa de ejercitaciones combinadas. (P.E.- 293/11) (Pág. 56.)

27. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley. (Pág. 58.)

Denominación de un tramo de la ruta nacional 34 (O.D. N° 419.)

Transferencia de un inmueble a comunidades indígenas de la provincia de Salta (O.D. N° 516.)

Participación de los veteranos de guerra de Malvinas en los desfiles y festejos de las fechas patrias. (O.D. N° 275.)

Declaración del 9 de junio como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. (O.D. N° 447.)

Cuenta Básica de Ahorro Gratuita. (O.D. N° 364.)

Exhibición en los cajeros automáticos del costo de su uso. (O.D. N° 366.)

Acuñación de moneda conmemorativa año 2012, Centésimo Décimo Aniversario del Plebiscito de 1902 de los galeses. (O.D. N° 509.)

Adhesión a los festejos por la conmemoración del 190º aniversario de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.890/11.)

29. Apéndice:

- I. **Plan de labor.** (Pág. 61.)
- II. **Asuntos entrados.** (Pág. 64.)
- III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 605.)
- IV. **Actas de votación.** (Pág. 803.)
- V. **Inserciones.** (Pág. 811.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 2 del miércoles 31 de agosto de 2011:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al senador José Cano a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Cano procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. — Conforme lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores, eventualmente, se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.¹

Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos con el objeto de cumplir lo dispuesto por el artículo 22 del reglamento de este cuerpo.²

Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1.207/11, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, al doctor Juan Carlos Gemignani. Mensaje

1.209/11, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2, de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alicia Vence. Y mensaje 1.208/11, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Mariano Roberto Lozano.

3

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan aprobado en la reunión de labor parlamentaria.³

En consideración.

Sr. Pichetto. — Solicito el tratamiento de los pliegos sin observaciones que trató la Comisión de Acuerdos.

Sr. Presidente. — Quedan ingresados, senador.

4

BOLETA ÚNICA. MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos presentados, referidos a la boleta única. Hay cuatro proyectos, alguno de los cuales es de vieja data en el Parlamento.

Ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde sin quórum se ordenó el tema para iniciar su estudio. Pero me parece que eso no será suficiente. En ese sentido, creo que tendríamos que pensar si es necesaria la boleta única y, en tal caso, qué modelo instrumentar, es decir, el santafesino, el cordobés u otro. Además, habría que pensar cuándo entraría en vigencia: si inmediatamente, para las elecciones de octubre, o si para los próximos comicios generales.

Considero necesario abordar el tema, porque hay una enorme sospecha o duda respecto de cuestiones que tuvieron amplia difusión periodística y a las que anoche hizo alusión el

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.¹

21

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día 428; 431; 449; 451; 453; 508; 510 a 515 y 519 a 521.

–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Ley de Integración Argentina de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”. (O.D. N° 428/11).

Repudio de las amenazas a un abogado representante de la Agrupación HIJOS (O.D. N° 431/11).

Pedido de informes sobre la actual floración de la Caña Colihue en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo (O.D. N° 449/11).

Pedido de informes sobre el Proyecto Federal de Innovación Productiva para la Patagonia (O.D. N° 451/11).

Pedido de informes sobre la creación de programas para la recuperación de la producción ganadera nacional (O.D. N° 453/11).

Pedido de informes sobre el Programa Financiación para la Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales del Banco de la Nación Argentina (O.D. N° 508/11).

Pedido de señales televisivas Telesur Noticias y CN 23 en los despachos del Senado (O.D. N° 510/11).

Campaña de difusión del Código IMEI –Identidad Internacional de Equipo Móvil– (O.D. N° 511/11).

Pesar por el fallecimiento de Jorge Timossi Corbani (O.D. N° 512/11).

Prestación del servicio de telefonía interurbana a la comunidad aborigen Ciénaga Grande, Jujuy (O.D. N° 513/11).

Prestación del servicio de comunicaciones móviles en la Comisión Municipal de Catua, Jujuy (O.D. N° 514/11).

Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (O.D. N° 515/11).

Rechazo de expresiones de reivindicación del accionar del último gobierno militar por parte del Presidente de la Sociedad Rural de General Pico, La Pampa (O.D. N° 519/11).

Repudio de los hechos de violencia ocurridos en la localidad de La Leonesa, Chaco (O.D. N° 520/11).

Repudio de alegato expresado por Jorge Rafael Videla en un juicio que se le sigue en Córdoba (O.D. N° 521/11).

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.²

Se procederá en consecuencia.

22

S.-706/10 y otros

MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.364, SOBRE DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley de los señores senadores Rojés de Alperovich y Mansilla por el que se crea la unidad de enlace para el seguimiento y el tratamiento de temas vinculados a la trata y tráfico de personas; en el proyecto de ley del señor senador Nikisch por el que se modifica la ley 26.364, de trata de personas, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; proyecto de ley de la señora senadora Borlotozzi por el que se modifica la ley 26.364, de trata de personas, por el cual se excluye el consentimiento de la víctima como causa eximente de responsabilidad penal, civil o administrativa; en

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

el proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso por el que se modifica la ley 26.364, de trata de personas, respecto de capacitar a las azafatas, pilotos y personal afín para reconocer a víctimas del delito; y en el proyecto de ley del señor senador Romero por el que se modifica la ley 26.364, de trata de personas, creando programas nacionales de capacitación, de prevención y asistencia a las víctimas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por las razones que da el miembro informante, se aconseja la aprobación del dictamen que obra en Secretaría con las firmas reglamentarias correspondientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación del tema sobre tablas.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: para ordenar el debate, por mi bloque van a hablar las senadoras Riofrio y Alperovich. Me gustaría si pudiéramos hacer una lista de oradores después de la miembro informante.

Sr. Presidente. — Uno de los secretarios va a ir anotando a los oradores.

Sr. Pichetto. — Bien, así ordenamos el debate para poder votarlo luego.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: el tema que vamos a analizar, trata y explotación de personas, es el nombre moderno de la esclavitud. Ésa es la importancia que tiene este tema que ha sido tratado en base a los proyectos de las senadoras y senadores que el señor secretario enunció.

Brindaron una amplia colaboración —quiero mencionar— una cantidad de instituciones y personas importantes: el doctor Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas; del Poder Ejecutivo Nacional, la ministra de Seguridad, a través de la doctora Paula Honisch, quien cumple funciones en la Dirección Nacional de Política Criminal; recibimos un aporte por escrito desde el Ministerio de Justicia del secretario de Dere-

chos Humanos, doctor Eduardo Luis Duhalde; la señora Mercedes Assoratti, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero, de la Fundación El Otro; la señora Andrea Romero, directora de proyectos de la Fundación María de los Ángeles; la señora Monique Thiteux Altshul, directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad; la señora Sara Torres, representante regional del Mercosur de la Coalición contra la Trata de Mujeres en América Latina y moderadora de la Red No a la Trata; señor Mario Ganora, vicepresidente de la Fundación “La Alameda” y jefe del área Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; el doctor Mario Juliano, presidente del Tribunal Oral Criminal CN° 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; de la Organización AMMAR Nacional, señora Jorgelina Sosa Pisani, señora Soledad Díaz y el doctor Gastón Fingerma; la señora Argentina Esconda, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; la señora Graciela Collantes, representante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; la doctora Marta Fontela, coordinadora de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer; la doctora Sidoni Porterie, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y especialmente agradecemos la cooperación de las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y María Luisa Storani.

Quiero empezar compartiendo con ustedes algunas estadísticas que nos dan las Naciones Unidas. Naciones Unidas estima que hay 2.500.000 de personas que están siendo esclavizadas, incluyendo la explotación sexual, y que son objetos de trata. El 10 por ciento está en América Latina. Tenemos 250.000 personas en América Latina víctimas de este delito.

Las ganancias estimadas por el tráfico de personas, el moderno tráfico de esclavos, alcanzan los 31.600 millones de dólares por año. Aquí estamos enfrentando verdaderamente al crimen organizado, al crimen transnacional.

Nuestro país ha recibido un informe un tanto crítico de parte de la relatora especial para el Tráfico de Personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos advierte que no

existen datos comprensivos respecto de las tendencias; tenemos que mejorar nuestras estadísticas y la información y tiene que haber una mejor coordinación en las políticas destinadas a combatir el tráfico.

Nosotros reconocemos que el derecho penal es la última ratio, que debe ser una intervención mínima. Pero cuando estamos frente a delitos de esta magnitud que implican realmente el sometimiento a esclavitud de personas, creemos que el derecho penal debe aplicarse con toda rigurosidad y severidad.

En este tema la Argentina está obligada por la Constitución Nacional pero también por todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las que somos partes: la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños.

De todas estas convenciones quiero hacer referencia a una que es muy antigua: la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1949, ratificada por nuestro país en los años 1957, 1958 y su Protocolo Facultativo en 1960.

Este convenio dice en su preámbulo: La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de explotación, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, y ponen en peligro el bienestar del individuo. Es decir, ya desde esa época se relaciona como inseparables la prostitución y la trata.

En sus artículos 1º y 2º dispone que las partes se comprometen a castigar a toda persona que para satisfacer deseos propios o ajenos a) concertare la prostitución de otra persona; b) explotare la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de tal persona; y c) sostuviere una casa de prostitución. Además, por supuesto,

es punible la participación criminal y prevé y obliga a los Estados a asistir a las víctimas y a cooperar con otros Estados.

Voy a dividir al proyecto en tres partes para su mejor comprensión. En primer lugar, lo que es modificación a la actual ley de trata. En segundo lugar, las instituciones nuevas que se crean justamente para ayudar a combatir la trata y para la asistencia a las víctimas. Y en tercer lugar, las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.

¿Qué es lo que modificamos en la actual ley de trata? En primer lugar, eliminamos la distinción según que la víctima sea mayor de edad o menor de edad. No importa la edad de la víctima, el delito básico es delito; y la denegación, en consecuencia, de los efectos jurídicos del consentimiento.

En la ley actual se establece que si la persona ha consentido no hay delito. Si la persona es mayor de edad y es víctima de trata y ha dado su consentimiento no hay delito, como si fuera razonable pensar que una persona va a dar su libre consentimiento para ser sometida a explotación.

Además, ampliamos el concepto de explotación e incorporamos dos situaciones que no estaban previstas en la legislación actual: la promoción, facilitación o comercialización de pornografía infantil y los matrimonios forzados y/o serviles. Más adelante, veremos qué se entiende por matrimonio servil.

Finalmente, se establece claramente la distinción entre lo que es delito de trata y lo que es explotación. Son delitos diferentes. Puede ser que una persona sea autora del delito de trata y no de explotación, puede ser que explote y no trafique o puede ser que coincida en ambos delitos. En el caso de que la misma persona sea autora de los dos delitos puede haber concurso material.

En los artículos 3º a 5º se amplían los derechos de las víctimas y se aseguran garantías mínimas. Y en esa enumeración de derechos de las víctimas se establece que el goce de esos derechos no depende de la previa condición de denunciante o querellante. No se obliga a la víctima a denunciar si no está en condiciones de hacerlo.

En segundo lugar, las garantías de protección a las víctimas y las garantías para el ejercicio de esos derechos tienen que perdurar hasta la satisfacción de las reparaciones pertinentes.

En tercer lugar, se asegura a las víctimas –se trata de una obligación del Estado nacional– el pleno acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Se aclara que el derecho a la asistencia y al patrocinio jurídico es un derecho integral, gratuito y en todas las instancias y fueros y no solamente en la instancia penal. Se aclara también que cuando las víctimas sean extranjeras se les debe hacer conocer entre sus derechos el de pedir la calidad de refugiado si así lo desea, conforme a los términos de la ley 26.165. Destaco que este aporte corresponde al doctor Eduardo Luis Duhalde.

En el caso de que la víctima sea un ciudadano argentino que se encuentra en el exterior se obliga a los representantes diplomáticos a hacer todas las presentaciones necesarias para asegurar la seguridad de esa víctima; es decir, acompañarla en todas las gestiones necesarias y a asistirle en la repatriación si ésta fuera la opción de la víctima ciudadana argentina en el exterior.

En los artículos 6° a 12 se crean dos instituciones nuevas con un criterio federal y participativo.

Mediante los artículos 6° a 9° se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Tiene una composición muy amplia ya que está representado el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Congreso de la Nación, las provincias y las organizaciones sociales. Además, se fija una auditoría externa: la Defensoría del Pueblo de la Nación es la que deberá actuar como auditor externo del mencionado Consejo Federal.

Mediante los artículos 10 a 12 se crea un Comité Ejecutivo que tendrá a su cargo el cumplimiento del Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas.

En su composición hay un representante que responde a cada uno de cuatro ministerios. En efecto, se trata de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social. En este último caso, nos ha parecido muy importante incorporarlo al Comité Ejec-

tivo porque, si bien la mayoría de las víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, en segundo lugar se encuentra la explotación laboral, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene un gran despliegue territorial en la Argentina.

A través de los artículos 13 a 17 se incorpora el sistema sincronizado de denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Se establece un número de teléfono uniforme en todo el país que atiende las 24 horas y recibe denuncias y archiva los registros durante diez años, a fin de que queden accesibles para el caso de investigaciones.

Se asegura que exista una norma presupuestaria. El presupuesto general de la Nación deberá contener suficientes partidas por año a fin de atender el funcionamiento de los organismos creados. Además, se fija que esos órganos puedan incorporar fondos provenientes de la cooperación internacional y de donaciones y subsidios. Asimismo, se establece una modificación al Código Penal con el objeto de que todos los bienes que se decomisen como consecuencia de los delitos de trata y de explotación sean girados a un fondo que atenderá la asistencia a las víctimas.

Pasemos ahora a lo que son las modificaciones al Código Penal, porque aquí no solamente estamos endureciendo penas sino también alcanzando conductas que hasta ahora no estaban alcanzadas en este ordenamiento.

Hay tres artículos que se refieren a distintas formas de explotación.

En el artículo 125 bis penalizamos con 4 a 6 años de prisión o reclusión al que promueva o facilite la prostitución de una persona. Ésa es la figura básica. Y en el artículo 126 del Código Penal establecemos la figura agravada, en la cual la pena es de 5 a 10 años.

¿Cuáles son las situaciones de agravamiento? Cuando para facilitar o promover la prostitución ajena media engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso de autoridad, pago de beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando el autor fuere ascendiente o descendiente colateral por consanguinidad o afinidad, cuando sea minis-

tro de algún culto –reconocido o no–, cuando sea educador o cuando sea el responsable de la guarda, cuando fuere funcionario público o agente de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias y si la víctima fuere menor de 18 años, en estos casos la pena será de 10 a 15 años de prisión.

Facilitar o promover la prostitución de una persona menor de 18 años tendrá una pena de 10 a 15 años de prisión.

En el artículo 127 establecemos la figura penal del que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona.

El ejercicio de la prostitución no es un delito, sino que lo es explotar económicamente la prostitución de otra persona, y la figura básica tiene una pena de 4 a 6 años.

Con relación a esto se deslizó un error en el dictamen impreso, ya que en el mismo dice que la pena mínima son 3 años y debe decir 4 años; la pena mínima es de 4 años y la máxima de 6 años. Ésta es la figura básica del proxenetismo o rufianismo. Y en el mismo artículo 126 establecemos la figura agravada en los casos de engaño, fraude y violencia, en el caso de parentesco, en el caso de ser ministro de culto, en el caso de funcionarios públicos o agentes de las fuerzas y en el caso de que la víctima sea menor de 18 años. En estos casos la pena será de 10 a 15 años de prisión.

El tercer caso de explotación de personas está en el artículo 140 del Código Penal. En este nuevo artículo establecemos que será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. Establecemos también que en la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.

Y en este punto del matrimonio servil quiero citar cuál es la definición de matrimonio servil, definición que hemos tomado del proyecto de ley modelo antitrata de Naciones Unidas. Dicho proyecto entiende por matrimonio forzoso o servil la práctica en virtud de la cual una mujer, una persona, una niña, sin derecho a negarse a ello, es prometida o dada en matrimonio con arreglo al pago de una suma de dinero o en

especie a sus padres, tutores, familia o a otra persona o grupo. También podemos hablar de esto cuando el esposo de una mujer, su familia o su clan la transfieren a otra persona a cambio de un valor u otra consideración o cuando una mujer es heredada por otra persona a la muerte de su esposo. A partir de la sanción de esta norma estos supuestos serán un delito en la Argentina.

Finalmente, realizamos modificaciones al artículo 145 bis en cuanto a la tipificación del delito de trata, que contendrá la figura básica. Entonces, reprimimos con prisión de 4 a 8 años al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere, o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediere consentimiento de la víctima. Aquí estamos dando congruencia a la modificación que hacemos de la ley de trata.

En el artículo 145 ter incorporamos el tipo agravado, con una pena de 5 a 10 años, en los supuestos de agravamiento, engaño, fraude, violencia, amenaza, cuando la víctima estuviere embarazada o fuere mayor de 70 años; si fuere una persona discapacitada; si las víctimas fueren 3 o más; si en la comisión del delito participaran tres o más personas; si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afin en línea recta, colateral o conviviente o si fuere funcionario público, y cuando la víctima fuere menor de 18 años, nuevamente de 10 a 15 años de prisión.

Finalmente, establecemos una modificación en el Código Procesal Penal. Le incorporamos un artículo 250 quáter que viene a preservar la integridad emocional de las víctimas de trata. Cuando tengan que declarar, la declaración la tomará un psicólogo designado por el tribunal y no podrán estar presentes las partes. Cuando sea posible se utilizará la cámara Gesell y en los actos de reconocimiento de lugares u objetos estarán acompañadas también por un profesional, pero en ningún caso podrá estar presente el imputado.

Éste es, en síntesis, el trabajo de meses en la comisión, pero sobre lo cual vienen trabajando distintas organizaciones desde hace muchos años.

Para concluir quiero leer el artículo 15 de la Constitución Nacional, porque lo único que estamos haciendo con esta modificación es cumplir con el mandato constitucional que

desde 1853 nos dice que en la Nación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebren y el funcionario o escribano que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República Argentina.

Señoras y señores senadores: el proxenetismo es una forma de compra y venta de personas humanas que está prohibido en la Constitución Nacional desde 1853.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.

Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la trata de personas es básicamente la anulación de todos los derechos de las mismas. Y sólo uniendo todos los esfuerzos de gobiernos y de la sociedad civil podremos enfrentar con éxito esta tarea.

Desde hace muchísimos años las organizaciones internacionales vienen advirtiendo sobre la necesidad de coordinación entre todos los países para poder combatir estas redes internacionales que tienen ramificaciones en el mundo entero. Ellas nos advierten sobre la peligrosidad y el poder que deviene de los millones que mueven estas redes delictivas, que se equiparan al tráfico de armas o de drogas.

Con la aprobación de la ley 26.364, sin lugar a dudas, marcamos un antes y un después, fundamentalmente por el avance que significó la tipificación de este delito. La trata de personas es considerada un delito en etapas puesto que comienza con la captación de una persona, la que luego es transportada para ser recibida con finalidad de su explotación.

Antes, lo único que estaba criminalizado penalmente era la situación de explotación consumada. Es decir, el último tramo de esta cadena. En ese sentido, la ley 26.364 consagró una figura penal nueva, criminalizando también las etapas previas. Además, la federalización del delito facilitó la investigación, permitiendo a los jueces actuar en cualquier jurisdicción.

Hoy, nos encontramos corrigiendo aquel texto de ley que, a pesar de constituir un avance

significativo, recibió numerosas críticas por parte de diferentes organizaciones de la sociedad, las que hemos venido recogiendo con la finalidad de hacer las actualizaciones necesarias. Este nuevo texto modifica algunos artículos intentando achicar el margen de interpretación para darle a la Justicia un mejor instrumento. Y está visto que algunos jueces, si no ven a las víctimas con grilletes o esposas, dicen que ahí no hay trata.

Escuchar a las víctimas es fundamental, porque aun cuando aseguren que están haciendo esta actividad por propia voluntad es necesario investigar la situación que las llevó a esto, cuál es su historia personal y, si se comprueba una situación de vulnerabilidad, hay que sospechar que se está frente al delito de trata, independientemente de lo que la víctima sostenga.

Mi compromiso con el tema que hoy estamos debatiendo se remonta al año 1996, cuando en mi provincia desaparece un niño en circunstancias extrañas. Y el hecho de sumarme a la búsqueda del niño hizo que tomara contacto con una realidad que, como la mayoría de la sociedad, no conocía en su real magnitud. Descubrimos así que en todo el país había menores desaparecidos en situaciones trágicas. En ese entonces éramos la única organización. Y comenzando a armar este mapa, en todo el país, nos dimos cuenta de que las circunstancias eran muy similares: desaparecían en días feriados, con muchísima gente, cerca del río. Encontramos casos en Santa Fe, en Río Cuarto; en Comodoro Rivadavia dos casos similares, y otro en Tucumán. Todos con la misma metodología: desaparición en medio de mucha gente, cerca de un río; la policía buscaba el cadáver dentro de los márgenes de agua, sin comenzar con otras vías de investigación. A veces eran secuestrados y, otras, eran entregados por sus progenitores, generalmente procedían de medios rurales o de los suburbios de las grandes ciudades. Encontramos que, a veces, los padres, en situación desesperada, creyendo en la promesa de empleo, acceden a entregarlos, convencidos de estar dándoles una oportunidad. Es a partir de ese momento que los menores quedan sin protección y comienzan a ser tratados como esclavos, y muchas veces son sacados fuera del país.

A partir de mi designación como diputada de la Nación y como senadora he presentado

numerosas iniciativas referidas a este tema. El tráfico y la trata de personas, con la modalidad que se use y para los fines que sea, necesitan ser enfrentados actuando como una sola red en la que se articulen las acciones de protección, rescate, atención y sanción.

Luego de escuchar a familiares y a diversas organizaciones, y desde hace mucho tiempo, el papá que se encuentra ante la desaparición de un menor no sabe a dónde recurrir. Son tantos lugares y están tan dispersos que, en realidad, ahí comienza otro problema. O, a lo mejor, ahí comienza el problema. Ante la desaparición de un menor no hay nadie que se haga cargo de esto.

Actualmente, la realidad es que los medios de comunicación se hacen cargo del tema. Además, existen organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta cuestión. Pero es necesario que el Estado tome la iniciativa y asuma la responsabilidad, a efectos de que los padres sepan adónde recurrir en cada una de las provincias ante éste, que, seguramente, debe ser el dolor más grande de una persona.

Desde 1996 he estado acompañando a los padres en la búsqueda de sus niños. En una oportunidad, en 1998, contraté un vagón para traer a los padres en tren hasta la Cámara de Diputados de la Nación, donde me recibió la diputada, mandato cumplido, Marta Ortega, quien fue la única que en ese momento nos escuchó. Con ella comenzamos a trabajar en este tema desde las legislaciones. Considero que la situación no mejoró mucho desde aquel momento. Por ello es tan importante el proyecto que hoy estamos considerando.

La acción coordinada, la información compartida y la rapidez en la acción constituyen los componentes claves para combatir la trata de personas. El tráfico y la trata son delitos transnacionales que debemos combatir en unidad de acción, aceptando que para hacerlo de manera exitosa se requiere de la ayuda decidida de todas las áreas gubernamentales hacia el interior de cada una de las naciones; más la coordinación con los demás países, en especial, con los limítrofes. En ese sentido, como parlamentaria del Mercosur presenté, y fue aprobado, un proyecto para la creación de una comisión especial para el seguimiento del tráfico y trata de personas en el bloque regional, especialmente referido a la

necesidad de trabajar de manera conjunta en la armonización legislativa, a los fines de facilitar el proceso de búsqueda, rescate y atención de las víctimas, además del combate decidido a este delito, en la difícil tarea de rescatar a las víctimas, darles a ellas y a sus familiares la contención que necesitan, perseguir y encarcelar a los delincuentes y realizar todas las formas posibles de prevención para evitar nuevos casos.

Necesitamos tener información y estadísticas actualizadas; saber cuáles son los lugares más frecuentes de la desaparición de personas; cuál es el lugar de destino de ellas; cuáles son las fronteras más vulnerables, entre otros importantes aspectos. Por ejemplo, cuando se sale del país, es mucho más frecuente que se controlen los papeles del automóvil que las personas que van dentro de él. Hay veces que se dice “llevo tres niños”, y nadie se acerca a ver quiénes son o la documentación que acredite su filiación.

Es indispensable unir y coordinar los esfuerzos entre las diferentes áreas de los gobiernos nacionales, provinciales y de los países limítrofes. Ese es el objetivo de este espacio institucional que ha sido incluido dentro del texto de la reforma de la ley 26.364, en virtud de una iniciativa del senador Mansilla y de quien les habla, cuyos objetivos están enumerados en ella. El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, tal como finalmente se denominó, funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados con esa ley, y contará con autonomía funcional. La intención es generar un espacio de seguimiento, coordinación y cooperación entre todos los organismos que estén tras el mismo cometido, porque entiendo que esto potenciaría la tarea realizada.

A modo de síntesis, detallaré algunos de los objetivos propuestos para este consejo: el diseño de una estrategia destinada a combatir la trata de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes; recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; promover la adopción, por parte de las diversas jurisdicciones, de los estándares de actuación y protocolos de intervención que

aseguren la protección eficaz y respeto de los derechos de las víctimas; analizar y difundir datos estadísticos e informes; promover la realización de estudios e investigaciones; diseñar y publicar guías de servicio, en coordinación y actualización permanente con las diversas jurisdicciones que brinden programas y servicios de asistencia directa a las víctimas del delito de trata de personas. Es imprescindible que frente al accionar de redes delictivas su combate se realice también desde una red en la que se articulen las acciones de protección, de rescate y de atención de la víctima junto con la sanción y castigo a los delincuentes.

Sin lugar a dudas, lo más importante es que como sociedad estamos tomando conciencia de la magnitud y del alcance de este delito; que se trata de un crimen organizado de carácter internacional y que es fundamental que se tiendan lazos de comunicación y de cooperación entre todos los actores sociales involucrados.

Ahora bien, también resulta imprescindible que se tome la denuncia antes de las primeras 24 horas porque sabemos que, sobre todo cuando se trata de niñas o niños adolescentes, se habla de fuga del hogar y esto significa que no se quiere tomar la denuncia inmediatamente. Tenemos que concientizar a la gente de enviar un alerta a todo el país ante la menor duda de que nuestros niños o niñas puedan haber sido captados por este tipo de redes internacionales. Debemos hacer un cierre virtual de la provincia y si es necesario del país, en todas las fronteras, para evitar que estos niños, estas jovencitas o jóvenes sean sacados del país.

Por supuesto, quedan otros temas pendientes, como el secuestro entre padres y la compraventa de los recién nacidos. Evidentemente, son asuntos sobre los que deberíamos seguir trabajando en este recinto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: no quiero ser reiterativo, pues las dos intervenciones previas han completado el tema. Sólo quiero adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque, que ha participado en los debates previos y en la elaboración del dictamen. No obstante, quiero hacer hincapié en dos o tres cosas que considero importantes.

La primera de ellas es la de identificar los bienes jurídicos protegidos. Digo esto porque cuando uno está frente a una norma que no sólo modifica una ley específica, como es la 26.364, sino también artículos del Código Penal, ante cualquier posibilidad de duda de qué es lo que nosotros queremos legislar es bueno que queden en claro los bienes jurídicos que están comprometidos aquí: la dignidad; la libertad; la identidad; la integridad física y psíquica y la seguridad de las personas; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de circulación; el derecho a fundar un hogar y una familia; el derecho al mayor nivel posible de salud y el derecho a la educación. En efecto, se trata de un plexo normativo lo suficientemente amplio como para que nadie tenga dudas hacia dónde queremos dirigir este esfuerzo legislativo.

La segunda cuestión que se ha mencionado –por lo menos la escuché en las dos alocuciones previas– es la condición de delito organizado y transnacional. Esto es algo que no podemos perder de vista y, por lo tanto, sólo voy a mencionar algunas características de lo que significa estar frente a un delito organizado y transnacional.

En primer lugar, son organizaciones que diversifican su accionar en múltiples direcciones. En segundo término, no se limitan a un sólo Estado, continente o frontera; desechan el espacio, porque para ellos todo es un único espacio. Interactúan en redes globales y, al mismo tiempo, descentralizadas. Y aquí quiero mencionar algo muy importante: requieren de la corrupción, de la cooptación y manipulación en esferas de los gobiernos. Y cuando hablo de los gobiernos, no hablo de los gobernantes en sí, sino de los gobiernos, e involucro a la esfera de todo el gobierno, es decir, a los tres poderes, fundamentalmente a las fuerzas de seguridad federales y provinciales y a operadores del Poder Judicial. Por lo tanto, la palabra “gobierno” es utilizada en el sentido amplio del término.

Por último, cabe destacar que controlan redes de información, y cada día lo hacen con más sofisticación y con mayor profesionalidad. En consecuencia, es bueno tener en cuenta esto a fin de identificar el carácter de delito organizado y transnacional.

Finalmente, hoy estamos –y se ha dicho muy bien– eliminando obstáculos. La sanción de la

ley 23.664 fue un avance en su momento. Recuerdo —estaba sentado en una banca— que fue un avance legislativo y hubo una importante actividad parlamentaria en ese momento. Pero, obviamente, quedaron muchos puntos oscuros que generaron obstáculos para que la Justicia, finalmente, o los poderes del Estado pudieran aplicar la ley y utilizarla como una herramienta de persecución y de sanción.

Hoy hay un obstáculo central que estamos eliminando —lo dijo bien la senadora Escudero— y es el tema del consentimiento. Esto era un verdadero obstáculo porque permitía la impunidad de aquellos que, amparándose en el consentimiento de las víctimas mayores, como se decía vulgarmente, zafaban de la imputación delictiva. Nosotros estamos eliminando hoy el obstáculo del consentimiento. Pero el consentimiento puede hacerse confuso si la ley no es claramente entendida y la cuestión del consentimiento no es solamente el único obstáculo. Las barreras verdaderas a procesamiento acertados en muchos países son, lo reitero, la corrupción, la falta de voluntad oficial para tomar medidas fuertes en el procesamiento de los responsables con protección a las víctimas de la trata y la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad sin entrenamiento e inexpertos. Nosotros, en definitiva, acá estamos desplazando los obstáculos legales, pero los otros obstáculos son responsabilidad de todos y fundamentalmente de los otros poderes del Estado. A eso tenemos que apelar en esta tarde en que estamos discutiendo el tema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: no me voy a referir a la parte legal porque ya lo ha hecho la señora presidenta de la comisión con mucha exactitud y con mucha excelencia. Pero no puedo dejar de referirme a un proyecto del cual soy autora. Esta iniciativa tiene su base en lo que se llama la *blue lightning* en los Estados Unidos, que es un programa de entrenamiento de azafatas y de asistentes en los medios de transporte, a los efectos de entrenarlos para detectar si se está viajando con personas víctimas de este tipo de delitos. Sí quería referirme a la gravedad del tema. El delito de la trata de personas es el segundo delito transnacional, como decía el senador Sanz. Es el delito que

mueve más dinero en el mundo después del narcotráfico.

Entonces, esto nos tiene que alertar y debemos ocuparnos en algo que la senadora por Tucumán decía: el compromiso en la responsabilidad de educar y de advertir a la población el peligro de este delito y el peligro para nuestros niños y niñas, porque éste no es un delito únicamente de objeto sexual, aunque es el mayor porcentaje, sino que también es un delito donde hoy el tráfico de niños, de bebés y el tráfico de órganos es alarmante, sumamente grave.

Tengo en mis manos la estadística que ha publicado el Ministerio Público Fiscal de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, donde nos mencionan que el 77 por ciento de los casos de explotación es de sexo femenino, el 19 por ciento de las víctimas es de sexo masculino y un 4 por ciento son travestis. Y de ellos, la mayor parte, el 70 por ciento, se los secuestra a los efectos de esclavitud de sometimiento sexual. El resto tiene otros componentes como puede ser este caso de tráfico de órganos, tráfico de niños o servidumbre de características laborales, que es lo menor. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza, generalmente, en un alto porcentaje? El engaño y el abuso ante una situación de vulnerabilidad.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha hecho algunas observaciones respecto a esta cuestión, que son importantes.

En primer lugar, llama la atención que, ante los casos de denuncias y procesos, son muy pocos los procesos judiciales que llegan a sentencia. Este hecho constituye un llamado de atención.

En segundo lugar, en cuanto a las formas detectadas de la trata de personas, el 79 por ciento se produce para la explotación sexual, un 18 por ciento es para trabajo forzado, y el resto es para servidumbre doméstica, matrimonio forzado, extracción de órganos, explotación de niños en la mendicidad y la industria del sexo.

La explotación de niños en la mendicidad representa un problema gravísimo, que está dentro de esta forma jurídica. Creo que todos tenemos que prestar más atención sobre este tema, porque a veces la vulnerabilidad del niño

lleva a ayudarlos y a no prestar atención en qué red hay detrás de esas criaturas.

Una cuestión también muy llamativa de este informe es que la mayor parte de las víctimas son mujeres.

Pero, además, la mayor parte de las organizaciones que trafican está formada por mujeres, muchas de ellas antiguas víctimas transformadas en parte de esas organizaciones.

Estuve charlando hace un tiempo con la procuradora de la provincia de Buenos Aires, la doctora Falbo. Mientras ella fue diputada, estuvo siempre muy preocupada por estos temas, y ha emprendido ahora una verdadera lucha desde la Procuración de la provincia con relación a esta cuestión. Cuando estuve con ella, me brindó una estadística del año 2011. Según consta allí, hubo 122 causas iniciadas por este tema, se han realizado 113 allanamientos y se han detectado 503 víctimas de explotación sexual en esta investigación que se está realizando desde la Procuración.

Ahora bien, tenemos que ser muy claros en este aspecto. Tal como se mencionó aquí, la pantalla real de estas organizaciones de tráfico sexual son los *night clubs* y los prostíbulos, los cuales, una vez que son habilitados legalmente, constituyen verdaderas pantallas que utilizan estas organizaciones para instrumentar el abuso sexual de la trata de personas secuestradas para esos fines.

Hay un manual que seguramente han visto todos, que es muy fuerte. Si uno resume los pasos, quizá no los puede transmitir bien. Es un manual realizado por la Unión Parlamentaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en forma conjunta, referido a la lucha contra la trata de personas. Constituye un manual para parlamentarios, y en él se sintetizan innumerables casos de personas recuperadas, que son escalofriantes. Son casos que se han logrado investigar y detectar, acerca de niñas que, por ejemplo, eran utilizadas para robar y lograban escapar, pero preferían ir a la cárcel y que no les otorgaran la libertad. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de una chica llamada Jeanette, en Europa, una niña a la cual mandaban a robar y la utilizaban como esclava en el tráfico sexual. Entonces, ella se hacía agarrar por la policía, y cuando salía porque le daban la excarcelación —que se la daba la

propia organización—, la estaban esperando en la puerta para llevarla de nuevo a realizar la misma tarea. De manera que ella se hacía agarrar de nuevo, hasta que logró transmitir lo que le estaba pasando. Era una criatura de dieciséis o diecisiete años. Terrible. Este manual para la lucha contra la trata de personas —manual del parlamentario— con los casos que en el mundo se cuentan, es realmente escalofriante.

La verdad es que en esta lucha estamos más allá de la convención internacional. El último informe de Naciones Unidas dice que nosotros estamos haciendo ingentes esfuerzos para esta lucha.

Desde mi punto de vista personal, el punto clave de esta reforma, el más importante, el núcleo duro, es eliminar el consentimiento como eximente de la imputabilidad. Porque cuando una persona está sometida —con todo lo que significa el término— a esa situación y en esas condiciones, es muy fácil conseguirle el consentimiento.

Felicitó a todos los que han trabajado; felicitó a la comisión por todo el esfuerzo que ha hecho, y a todas las personas que, desde cada provincia y desde cada lugar estamos trabajando, como en este caso la procuradora Falbo, que lo ha tomado como una bandera fundamental de su función.

— Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado, senadora Sonia Margarita Escudero.

Sra. Negre de Alonso. — Creo que también es importante lo que decía la senadora por Tucumán, es decir, concientizar a través de todos los medios de comunicación, en los colegios, a las madres y a las jóvenes sobre el flagelo, para que podamos prevenir este tipo de situaciones. De modo que, cuando las vemos o las advertimos, podamos detectar que hay una organización; desde subir una chica a un auto o desde un niño en una esquina que está pidiendo, con toda una organización detrás para sacarle el dinero.

Sra. Presidente (Escudero). — Tiene la palabra la senadora Morandini.

Sra. Morandini. — Señora presidente: como diputada voté la ley que hoy venimos a modificar. Tal vez la primera reflexión tendría que ser ésta; que en dos años no ha habido una modificación de la representación. En una ley de las

características de ésta, en la que todos estamos de acuerdo con que hay que dar un tratamiento penal a algo que se nos advierte como el gran tráfico del siglo veintiuno —que va a ser mucho más rentable que el tráfico de drogas—, debemos aceptar que no importa el lugar en el que uno esté sentado en el recinto, sino que se pueden tomar los aportes para que, cada dos años, no tengamos que sacar lo que se señaló acá también, de manera penal, un obstáculo.

Como no soy abogada sólo puedo argumentar una cuestión de sentido común. La libertad es inherente a la condición humana, y si hay tanto escrito sobre la libertad, lo más fácil es advertir sobre la libertad, que es la capacidad de decir que no. Entonces, ¿quién puede creer que alguien pueda consentir ser esclavizado?

Quisiera referirme a otro aspecto que me parece fundamental. Es cierto que se tiene que tomar conciencia y enseñar a los niños y advertirles sobre el peligro, pero me parece que, previo a eso, nos tenemos que dar otro tipo de debate, porque no podemos eludir que vivimos en una sociedad que ha hecho del precio un valor. Entonces tenemos una cosificación de lo humano, tenemos el cuerpo de las mujeres, la degradación del modelo femenino, que está totalmente mercantilizado. Después tenemos que padecer que esa mujer, que ha sido degradada en su dignidad, luego pasa a ser comercializada como si fuera una mercancía.

Muchas veces escuchamos decir, con respecto a esta mala relación que se está teniendo de la democracia con los medios de comunicación y como a los medios no se los puede censurar, se impone que pidamos que se responsabilicen con el ejercicio de esa libertad.

Veo que hay un debate que no hemos incorporado, que es el debate que se da en todas las sociedades del mundo desarrollado. De alguna manera, heredamos la legislación de aquellos que padecen el problema y como firmamos los tratados podemos decir los números y conocemos el negocio, pero siento que nos apropiamos culturalmente de estos temas para evitar que nuestras niñas sean sometidas a ese modelo televisivo cultural que legitima todos los días la prostitución de una manera indirecta.

Porque conozco bien el caso de María Soleidad, desde entonces siempre me he preguntado por qué una niña pobre de provincia, que pasa

más horas frente a la televisión de lo que va a la escuela, no va a querer ser como los modelos que le llegan desde Buenos Aires, donde hoy la mujer famosa es la que más se desnuda. Tenemos legitimada todos los días esta prostitución legalizada. Me parece que ahí tenemos que poner también el acento, porque si no modificamos este modelo, donde es más importante el cuerpo de la mujer, que comercia con su cuerpo y que se le roba su dignidad, es muy difícil luchar contra el primer canalla o rufián que le ofrece fama o dinero.

Ayer, cuando venía a Buenos Aires, en el aeropuerto, como lo deben haber visto todos, tenemos cada vez más rostros de niños pegados en las paredes. Hasta hace muy poco teníamos en nuestras bancas la carita de Sofía. Ya difícilmente reconozcamos quién es Sofía. Ahora, Candela la ha sustituido y está ocupando toda la atención. Pero cada vez tenemos más caritas que nos están advirtiendo sobre lo que ya se cosifica; son 200 los niños que faltan en nuestro país.

Observen ustedes la paradoja, la palabra libertad etimológicamente quiere decir “volver a la madre”. Si es fácil reconocer el clamor de las madres que piden por las hijas para que vuelvan a sus hogares, la pregunta, el desafío y el compromiso tienen que ser que el Estado se convierta en madre y cuide de aquellos que son los más vulnerables.

Está muy bien que podamos hacer que esta ley sea mucho más dura en el espíritu, que sea más fácil condenar a los canallas que ofrecen fama, dinero o comercian con nuestras mujeres más desprotegidas, pero no eludamos trabajar en la necesidad de pedir responsabilidad para que no sean cosificadas, no reduzcamos lo humano nada más que al dinero, porque de lo contrario es muy fácil la relación que hay entre este ser humano que ha perdido su dignidad y que después pasa a ser comercializado.

De modo que para honrar que la palabra libertad sea efectivamente “volver a la madre”, celebro que estemos corrigiendo esta ley, pero también que sirva como ejemplo de que a veces no está mal que trabajemos un poco más las leyes para llegar a un consenso, para que no tengamos que hacer un nuevo esfuerzo para modificar las leyes que hemos sancionado nada más que dos años atrás.

Sra. Presidente (Escudero). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señora presidenta: voy a ser muy breve porque creo que se ha dicho todo. Muy breve porque en realidad el dictamen de comisión analiza una cuestión que es absolutamente central y a la que apuntó el senador Sanz, relativa al crimen organizado y la transnacionalización, y que exige un abordaje interdisciplinario. El dictamen lo hace mediante la creación de ese consejo federal, más allá de cómo se denomine, más allá de las funciones específicas que se le den. En realidad es una coordinación que hoy no existe, que no se da del modo deseado. Es un abordaje que tampoco se está dando hoy en forma plena en la temática. Incluso se están atomizando las respuestas. Por eso es absolutamente necesario este abordaje interdisciplinario, que es fundamentalmente la herramienta de trabajo operativa para que dé respuesta a este tipo de flagelo.

Este comité ejecutivo seguramente va a señalar tareas. Más allá de las misiones que se le asignen, uno supone que la tarea operativa es elaborar rápidamente bases de datos, señalar rutas, dónde se capta a las personas, cuál es el transporte, cuáles son los destinos, y trabajar en forma minuciosa y sistemática en una problemática que no admite más dilaciones.

Obviamente, en esa base de datos es central lo relativo al financiamiento. Es esencial que se apunte a los registros que el Estado —es necesario que estén digitalizados— para golpear en la operatividad de estas redes. Se debe apuntar al financiamiento para desactivar la operatividad de las bandas, para hacerlas más vulnerables al accionar de la justicia.

Es cierto que invariablemente —también lo decía el senador Sanz— en los gobiernos se captan voluntades. Ahí es donde hay que trabajar duramente en este abordaje interdisciplinario estableciendo una coordinación muy férrea que exhiba la voluntad del Estado por definirlo como una política de Estado y avanzar fuertemente en cualquier tipo de tutelaje en cuanto al sometimiento de las voluntades.

Considero que el proyecto y el dictamen abordan bien el sistema de garantías y derechos en toda la problemática, en especial las necesidades de reinserción. Posiblemente haya algunas cuestiones de técnica legislativa para tener en cuenta. Advierto que no se ha seguido de manera suficiente la definición del Protocolo

de Palermo, suscrito por la Argentina y aprobado por ley interna.

Entiendo que es importante avanzar en la legislación respecto al consentimiento y modificarlo, como se está haciendo. Evidentemente, una vez que se aplican las leyes se perciben las dificultades que van surgiendo, por lo que a veces es necesario introducir algunas reformas, que no necesariamente tienen que ver con la cantidad de años de vigencia del instrumento. Si uno advierte que se presentan dificultades en su aplicación, se impone la necesidad de introducir rápidamente correcciones que permitan abordar de manera plena la problemática de que se trata.

Posiblemente en estos aspectos de técnica legislativa uno podría referirse a un detalle circunstanciado de la tipificación. Quizá se podría haber avanzado, respecto al consentimiento, en los topes existentes, haciendo más gravoso el incremento punitivo y manteniendo cierta armonía en la normativa penal, tratando de que los operadores del sistema, las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial en definitiva, puedan avanzar en este tema sin que encuentren dificultades. Es decir, tener la conducta básica del tipo, y posiblemente las circunstancias agravantes definidas como incisos de esa misma conducta básica, reduciendo la discusión jurídica sobre determinadas figuras que puedan redundar en un perjuicio en la aplicación de normas.

Más allá de estas consideraciones, considero que el proyecto es un notable avance. Es fundamental el cuerpo interdisciplinario, y el abordaje que lo defina como una política de Estado, para que pueda exhibirse la voluntad del Estado en contrarrestar un flagelo que golpea duramente y del que, sin dudas, debe hacerse cargo como tutela propia de su tarea.

Con estas palabras finalizo mi exposición.

Sra. Presidenta (Escudero). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Señora presidenta: hay una cuestión que me preocupa en particular.

En la naturaleza del crimen, pocos delitos tienen tal grado de extensión y de exposición en convivencia con el resto de la sociedad como éste. Un homicidio puede ser un hecho brutal en instantes donde puede haber alguien que, en

el *iter criminis*, tuvo la posibilidad de intuirlo. Sin embargo, la trata de blancas y la utilización en esclavitud es un delito continuo donde hay sectores concretos de la sociedad que son testigos, partícipes o cómplices.

Es un tema que no se resuelve solamente con legislación. Se trata de un asunto que requiere un profundo cambio cultural y educativo y un compromiso mucho más activo de todos, no solamente del Estado.

¿Por qué la dificultad de la coordinación? Es decir, ¿por qué no generar algo tan elemental como unidades especializadas? ¿Por qué la necesidad, ante el primer dato del menor, de esperar las 48 horas de costumbre? ¿Por qué no establecer rápidamente mecanismos de coordinación?

Es evidente que, dentro del propio aparato represivo, hay enquistadas complicidades.

Sin embargo, esto debe ser acompañado mediante una difusión intensa, sobre todo, en las instituciones educativas.

Disculpen si les parece una liviandad lo que voy a decir, pero no lo es. Cuando se habla de turismo sexual infantil, yo pensaba que sería muy bueno que se hablara de turismo sexual conyugal, donde nuestras esposas y esposos se sientan estimulados a cambiar la escenografía o paisajes de sus habitaciones para que la gente se quiera más y se encuentre más contenta y contenida y no deba recurrir a esta clase de cuestiones. Simplemente, quería hacer esta reflexión porque se trata de un tema en el que hay complicidades de vastos sectores que forman parte de nuestra comunidad.

Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.

Sra. Monllau. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero destacar el trabajo realizado por las comisiones que han intervenido en el tratamiento del proyecto de ley en consideración. En segundo lugar, adhiero a las expresiones ya vertidas por mis pares en el ámbito del recinto, por lo que tan sólo agregaré algunas breves consideraciones.

Para quienes venimos de comunidades pequeñas del interior del país como aquella a la que pertenezco, sabemos que estas realidades nos cachetean duramente a diario. Pero también es cierto que aparecen muchas veces solapadas

o negadas en el ámbito de sociedades verdaderamente fariseas.

De todas maneras, transitar por las calles de las grandes urbes como Buenos Aires o, incluso, zonas aledañas a las del Palacio del Congreso de la Nación, coloca nuestra atención en distribuidores de volantes que, sin ninguna clase de reparo, ofrecen cual mercancía a colegialas, dominicanas, paraguayitas, etcétera. Y bien sabemos que, detrás de ese anuncio de oferta sexual, muchas veces se ocultan esta clase de delitos como la trata, la explotación, la esclavitud, los trabajos forzados, la servidumbre, etcétera. El bloque del Frente Cívico y Social de la provincia de Catamarca tiene la certeza de que, con las modificaciones introducidas a la ley 26.364, se transita el complejo camino de la lucha contra el crimen organizado.

Hoy todos nos solidarizamos, como bien dijo la senadora Morandini, con la madre de Candelita, la niña desaparecida, con la presunción de que detrás de su ausencia podría estar la trata de personas. Pero hay muchas otras “Candelas” y muchas otras madres, niños y mujeres anónimos cuya voz el Senado de la Nación asume hoy. Estas voces aguardan el doloroso silencio de que se ponga fin a la trata perversa de omisiones y complicidades.

Ante el crimen organizado, quienes ponen el cuerpo son los que pertenecen a los sectores más vulnerables, aunque los operadores poderosos se encuentran detrás de bambalinas circulando impunemente y camuflados de buena gente entre las calles del país y con tentáculos en otras naciones.

Creo que estamos ante un momento que, como bien se ha dicho, requiere del compromiso militante de toda la ciudadanía. Por lo expuesto, el bloque del Frente Cívico y Social cree que es imperioso apoyar las reformas, modificaciones e instituciones nuevas que aparecen en la ley 26.364.

Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

Sra. Higonet. – Señora presidenta: seguramente, voy a repetir muchas de las cosas que han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero creo que tamaño delito hace que tenga sentido que repitamos e, inclusive, si es posible, gritemos de lo que estamos hablando,

para que todos puedan tomar conocimiento y conciencia de que esto es —como ya se ha dicho— la esclavitud del siglo XXI, la forma más aberrante de violación de los derechos humanos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador Roberto G. Basualdo.

Sra. Higonet. — Voy a compartir lo que dijo la señora senadora Negre de Alonso acerca de que el ámbito concreto en donde se desarrolla la trata de personas con fines de explotación sexual es la prostitución, una actividad que en la Argentina se legalizó en 1875. Y hoy hablábamos de que, justamente, se la denominó “trata de blancas”, para diferenciarla de la trata de negros, que era el comercio de esclavos que se traían de África.

En nuestro país, hay un primer dato de red de mujeres que se han traído de afuera —entonces se las llamaba “importadas”—, que data de 1889; eran mujeres traídas de Europa central, de Rusia, engañadas con la promesa de trabajo o de poder salir de las persecuciones que vivían en sus países; acá se casaban y luego eran sometidas a la explotación sexual.

Como ya se ha dicho, actualmente la trata es una de las actividades más rentables para el crimen organizado internacional, con lo cual sabemos lo difícil que es este problema en el cual estamos trabajando; y por supuesto, necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todos.

Según estadísticas que tenemos de las organizaciones que están trabajando desde hace tanto tiempo en este tema —como decía la senadora Escudero—, en los últimos dieciocho meses fueron secuestradas más de seiscientas mujeres; y, según nos dicen esas organizaciones, por cada mujer que se encuentra, desaparecen siete. Son datos realmente muy fuertes.

No podemos dejar de concebir a la trata de mujeres como una de las formas que adopta la violencia contra las mujeres, como también lo es cuando hablamos de femicidio, de violencia física, de explotación laboral o social; es por eso que la lucha contra esto no podemos disociarla de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Eva Giberti, que es coordinadora del programa nacional “Las víctimas contra las violencias” y quien asiste y acompaña a las mujeres golpeadas, a los niños y niñas que son explotados sexualmente, sostiene que mientras no se desactive la

presencia de los sujetos que pagan para disponer de ellas será muy difícil parar con este delito.

Y eso me lleva a compartir un mensaje. Hace unos días, hemos realizado varias jornadas en nuestra provincia con gente que está a cargo de la oficina de rescate de víctimas del Ministerio de Justicia, quienes, cuando terminan su charla, nos dejan un mensaje que dice: sin clientes no hay trata. Y esta palabra —clientes—, que toma tanta visibilidad en la actividad de los prostíbulos, porque es casi como una transacción comercial, cuando hablamos de trata, se vuelve invisible. La misma demanda también lo es. Y tiene tanto éxito que para poder satisfacerla no se mide a qué recursos se llega: esto es, justamente, la privación de la libertad y el secuestro forzoso de las personas.

Pero también es cierto que estamos hablando de explotación. Y cuando nos referimos a la trata de personas, también hablamos de servidumbre. Por eso creo que no podemos dejar de mencionar los casos de explotación de aquellas personas que, a veces, son llevadas al campo como ganado, que viven hacinadas y que tienen una sola comida al día, porque también son explotadas. Toman mucho aire, porque es lo único que no les cobran y que no les genera deuda, porque ellos siempre deben; y lo mismo sucede con la explotación sexual.

Por eso, realmente, desde el bloque del PJ La Pampa, queremos reconocer y felicitar el trabajo que ha hecho la comisión en todo este tiempo, al escuchar y buscar mejorar esta herramienta legal que nos va a permitir seguir luchando contra este delito tan grande. Y no puedo dejar de expresar que siento satisfacción por dar un paso más concreto hacia la construcción de esta sociedad cada vez más justa y equitativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Artaza.

Sr. Artaza. — Señor presidente: sin duda, creo que estamos dando un gran avance con la modificación de esta ley. Desde el Poder Legislativo, estamos dando un instrumento a los otros poderes, que hoy son fundamentales para la lucha contra este crimen. Creo que la iniciativa aborda en gran parte la explotación —no solamente la sexual— de las personas. Esto debemos destacarlo, porque el proyecto también incorpora el tema importantísimo de la edad y

el del consentimiento, como ya se ha dicho aquí en diversas exposiciones.

Toda la sociedad, y nosotros mismos, debemos tomar conciencia de que al tener este instrumento no se puede seguir siendo hipócritas, porque sabemos que es un negocio de millones de dólares en el mundo. Y al darles hoy este instrumento a los poderes públicos, creo que tenemos la posibilidad de que no ocurran hechos desgraciados como el que hoy estamos padeciendo y otros que vivimos todos los días en la Argentina y en el mundo.

Hoy, seguramente, saldremos de este Senado con noticias absolutamente trágicas que tienen relación con esta iniciativa que estamos tratando. Espero que la misma no sea solamente abordada en forma esporádica, cuando sucedan hechos de este tipo.

Quizá, cuando salgamos después de las siete de la tarde, nos encontremos con folletos de este tipo.

—El señor senador Artaza exhibe documentación.

Sr. Artaza. — Esto nos hace presumir que hay una organización criminal detrás. Entonces, sepamos utilizar hoy este instrumento.

En mi vida como profesional, como actor, he trabajado en muchos lugares de la noche. Y nunca pensé que me tocaría hoy estar con ustedes dando este paso trascendente, importante, necesario. Pero falta aún mucho más, y es que la sociedad tome conciencia. Antes se decía como parte del folclore: “Y, sí. A veces, hay autoridades públicas que manejan la prostitución, el juego”.

Seguramente como todos ustedes, quiero transitar este Congreso de la Nación modificando, para la sociedad, esta realidad terrible que nos toca vivir; y en ese sentido, creo que se está dando un paso importante. Pero hay un deseo de que la sociedad, y nosotros mismos, tomemos conciencia de que acá hay una connivencia del poder político, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Si se habilita una whiskería, por ejemplo, es porque hay connivencia del poder político o del judicial. Y estamos hablando de casos gravísimos de corrupción, criminales, que no podemos ignorar. Espero que la sociedad argentina y los poderes del Estado puedan utilizar rápidamente este instrumento. Y aspiro a

que, al igual que otros proyectos, sea canalizado a la brevedad en la Cámara de Diputados.

En este sentido, a pesar de las elecciones —estamos en campaña y en víspera de comicios—, hago un llamado para que la iniciativa se trate y para que tengamos una mayor frecuencia de sesiones y de reuniones en las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo he expresado en cartas dirigidas a los presidentes de ambos cuerpos y a los distintos bloques. Es necesario que trabajemos intensamente sobre diversas iniciativas que todavía están en tratamiento, como la que ahora estamos considerando, y que son de vital importancia para la sociedad.

Deseo que sepamos utilizar este instrumento que hoy tenemos en nuestras manos con el poder político necesario para poner en práctica la iniciativa que está sancionando el Senado. Y hago también mención a las organizaciones no gubernamentales, que vienen trabajando permanentemente y militando por esta cuestión, luchando contra cuestiones económicas graves, contra poderes económicos criminales importantes y contra cuestiones culturales.

En síntesis, en primer lugar, hago alusión al trabajo que para modificar la norma han hecho las comisiones del Senado, así como también cada uno de los senadores y asesores; y luego, también, al de las organizaciones no gubernamentales. Reitero que estamos dando un gran paso, aunque todavía falta mucho.

Sr. Presidente (Basualdo). — Tiene la palabra el senador López.

Sr. López. — Señor presidente: en realidad, quiero poner el foco en un tema conexo con esta iniciativa, no quizás el tema central que hace la materia del proyecto. Si bien queda claro en el texto de la norma, suele pasar que, en su aplicación práctica, ocurre a veces una disonancia entre el deber ser y el ser.

Tenemos claro que este proyecto no abarca lo que podríamos denominar —de hecho, se denomina así— el trabajo sexual autónomo. Sin embargo, sabemos o tenemos comprobado históricamente, en la humanidad, que suele pasar que el hilo se corta por lo más débil. Y, muchas veces, a raíz de la falta de reconocimiento del trabajo sexual, que en algunos casos es una opción libre, de trabajadores y trabajadoras, y

de la falta de regulación legal de ese trabajo, se provoca que, en algunos casos, termine vinculándose con la situación sobre la cual versa este proyecto de ley, que es la trata de personas, o temas relacionados como la prostitución, el proxenetismo y mucho de lo que aquí se ha mencionado. Por ello, estamos absolutamente de acuerdo en seguir intentando las mejores herramientas, con miras a erradicarlo.

El ejercicio libre de la opción del trabajo sexual, en algunos casos, tiene que ver con dos principios o ejes básicos de nuestro sistema constitucional, contemplados en los artículos 19 y 14 de nuestra Carta Magna, que establecen lo que se denomina el principio de reserva. En ese sentido, dos cláusulas muy sabias de nuestra Constitución disponen que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas solamente a Dios.

La falta de un reconocimiento de este trabajo por parte del Estado —que algunos consideran la profesión o el oficio más antiguo de la humanidad— permite no sólo la ausencia de protección y de un sinnúmero de garantías propias de trabajadores de otros sectores o actividades sino también que los trabajadores y trabajadoras sexuales sean la única punta visible de un ovillo que, lamentablemente, muchas veces, no se llega a desovillar para arribar al nudo o al núcleo de la problemática, que puede tener que ver con una organización o red criminal. En consecuencia, a pesar de que la norma se encarga de dejar expresamente establecido que están fuera de este régimen —o que no serán penalizados— los trabajadores o trabajadoras sexuales, en los hechos, terminan siendo las únicas víctimas de las medidas represivas que se intentan dirigir hacia quienes hacen, del trabajo de otros, un negocio ilícito.

Aquí se han mencionado otros campos en los que la prohibición —como estrategia o herramienta política, jurídica o institucional a implementar por parte del Estado—, muchas veces, sólo hizo generar un campo fértil para la proliferación de negocios clandestinos. Eso ha sucedido con el juego y el alcohol y ocurre también con la prostitución. Por ejemplo, en Suecia y en la India, lo que se esperaba de las legislaciones prohibitivas terminó, en la práctica, siendo exactamente al revés.

Quería dejar perfectamente establecido este aspecto. Más allá de acompañar el proyecto, tenemos cierto nivel de escepticismo sobre la utilidad o efectividad de la norma en cuanto a los objetivos que nos estamos proponiendo. Pienso que, en los hechos, resulta muy difícil para el Estado acceder, llegar o penetrar el núcleo del problema de las redes criminales vinculadas con las diversas ramas delictivas —y no me refiero sólo a la que estamos considerando en este momento—; siempre se termina cayendo sobre los eslabones más débiles.

Por lo tanto, corresponde que comencemos a agendar la necesidad de la reglamentación del trabajo sexual autónomo porque, de esa manera, con plenitud de derechos sociales y de garantías para esos trabajadores, se irá desactivando un negocio. De lo contrario, al no tener estas garantías, muchas veces, quien opta por ese trabajo no tiene otra forma de ejercerlo que la de valerse de los mercaderes o intermediarios, quienes facilitan desde la clandestinidad y ejerciendo la explotación, el acceso al trabajo sexual.

En consecuencia, si el trabajo sexual está reglamentado o reconocido y cuenta con condiciones relacionadas con la seguridad social y la sanidad, a más de uno esa situación lo obligaría a buscar otra opción laboral o de negocios, porque ya no tendría una clientela cautiva que necesita de su red para trabajar.

Para finalizar, quería que, de alguna manera, quedara en claro la sugerencia de agendar, como una materia pendiente, el avance en la consideración de un estatuto laboral o de un régimen de derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores sexuales que, libremente y sobre la base de las libertades elementales establecidas por nuestra Constitución, optan por ese trabajo o modo de vida en nuestra sociedad.

Sr. Presidente (Basualdo). — Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. — Señor presidente: también será muy breve, porque se han vertido muchos conceptos jurídicos y políticos vinculados con lo que implica una norma de estas características.

En primer lugar, me parece que hay un reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales que, por ejemplo con el caso de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, son las que desde hace mucho tiempo han dado a

conocer estos hechos. Sin duda, el poder político empieza a incorporar estas problemáticas que instalan las organizaciones no gubernamentales.

Evidentemente, la modificación de esta norma implica un paso adelante en lo que respecta a un flagelo que, según informa la Organización Internacional del Trabajo, después del tráfico de drogas es el que más dinero mueve. En efecto, es un gran negocio. En consecuencia, que el Congreso de la Nación genere un marco jurídico para que se profundicen las políticas públicas en materia de trata de personas es, sin duda, un paso trascendental.

En segundo lugar, cabe destacar que nuestro país está señalado –también por distintos informes internacionales– como un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son sometidos a este tipo de delito. Entonces, generar un marco jurídico es, obviamente, un hecho importante.

De alguna manera, aquí se habló de la complicidad social y, también, de la complicidad política para que ocurran este tipo de situaciones. Cuando existen delitos que movilizan recursos millonarios, por supuesto que hay connivencia por acción o por omisión del poder político. No me quedan dudas de que en mi provincia, en Tucumán, ha habido avances importantes –como también los ha habido en el país– con la oficina de rescate de víctimas. No obstante, considero necesario que, más allá de la sanción de esta norma, el Poder Judicial también dicte fallos ejemplares y comience a haber personas detenidas por este tipo de delitos, pues de esa manera, se alienta a las víctimas para que corten con ese vínculo que muchas veces es perverso. En consecuencia, esta nueva ley, también, le dará una herramienta al Poder Judicial para que comience a castigar este delito.

Por último, el senador Artaza hacía referencia a la actitud del poder político. En mi provincia, existe un sinnúmero de prostíbulos. Cuando regresamos a nuestras provincias podemos transitar capitales del interior donde hay prostíbulos que, en algunos casos, son habilitados como bares por los municipios, cuando todo el mundo realmente sabe de qué se trata, ya que allí están los proxenetas. Y esto suele suceder porque, en muchos otros casos, semanalmente, estos lugares pasan un monto de dinero a los

sectores de la policía que hacen la vista gorda y permiten que sigan funcionando.

En 2006, me presenté junto con una legisladora del oficialismo ante el fiscal de turno –si no me equivoco, en ese momento, era el doctor Alejandro Noguera– y clausuró un sinnúmero de prostíbulos de la capital. Sin embargo, al poco tiempo, volvieron a funcionar. Si eso ocurre es porque, evidentemente, hay una complicidad con quienes deberían ser garantes de que estos sitios no funcionen.

Entonces, me parece fundamental que todos tengamos plena conciencia acerca de lo que estamos hablando. Es un delito que moviliza muchos recursos, mucho dinero. Por ello, uno siempre espera que a partir de la sanción de una norma de estas características, el Estado profundice la lucha contra este flagelo y se empiecen a cortar los vínculos que existen o que permiten que este tipo de situaciones se repitan a lo largo y a lo ancho del país.

Por eso, felicito a las organizaciones no gubernamentales, pues han permitido que este tema figure en la agenda política y, también, a todos los autores de los proyectos que se están considerando, ya que plantean la preocupación de los distintos bloques con respecto a un flagelo. Asimismo, felicito al Parlamento por darle al Poder Ejecutivo nacional herramientas que generen un marco para que profundicemos las políticas públicas. Repito, este asunto debe ser un compromiso de todos, tanto de quienes formamos parte de la oposición como del oficialismo, y del trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales, a fin de fijar políticas de Estado.

Sr. Presidente (Basualdo). – Corresponde el uso de la palabra al señor senador Juez, pero no se encuentra presente en este momento.

Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo al tratamiento de este proyecto de ley con el cual considero que estamos dando un gran paso hacia adelante.

El Congreso de la Nación, este Senado, se hace cargo de un tema muy importante. Coincido con el enfoque que realizaba la senadora Higonet en cuanto a que estamos ante uno de los problemas de derechos humanos más acuciantes de esta época. Diría más, una de las problemá-

ticas de derechos humanos más acuciantes de todas las épocas; y por eso, como muy bien lo decía la senadora, la trata de personas está hoy identificada como la esclavitud de este nuevo siglo. Por eso, es muy importante abordar este problema, que junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas constituyen los tres negocios más deleznablemente rentables en la actualidad.

Evidentemente, cuando sabemos que en algún barrio se vende droga—como se mencionaba recién— o cuando sabemos de la existencia de prostíbulos, el abordaje de estos temas no se soluciona con una ley. Pero con una ley muy bien enfocada, como la que estamos planteando, se va a abordar el problema en su dimensión más profunda. Y en esto, también quiero hacer un reconocimiento, además del trabajo de la senadora Escudero y de los integrantes de toda la comisión y de los asesores, a las organizaciones no gubernamentales. Estoy convencido de que este tipo de leyes se debe a la movilización de las organizaciones no gubernamentales, a mujeres valientes como aquellas que en los días 3 de cada mes rodeaban el Parlamento para conmemorar el día en que Marita Verón desapareció y para que el Congreso se hiciera cargo de este tema. Por eso, tenemos que saludar que hoy estemos tratando esta iniciativa. Y de alguna manera, tenemos que hacernos carne de quienes han sido víctimas de la trata de personas: Florencia Penacci, Marita Verón, María Cristina Ojeda y tantas otras.

Entonces, creo que esta ley, como tantas otras, demoraron mucho tiempo en llegar al Congreso porque, si bien se trata de una cuestión que viene del fondo de la historia, recién en el siglo XX, en 1913, la primera ley que se hizo cargo de este tema fue la ley de Alfredo Palacios, quien como legislador, como diputado de la Nación, le dio forma a la preocupación por la trata de mujeres con fines de explotación sexual; fue la ley 9.143. Más de dos décadas después, en 1936, se sancionó la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas, que prohíbe el establecimiento de locales donde se ejerce la prostitución y que castiga a aquellos que regentan esos lugares. La intencionalidad de esa ley era perseguir al proxeneta y al tratante de blancas.

Acá, hay un cambio de concepto y de paradigma que, después, también vamos a abordar.

Cuando aprobamos la ley migratoria, porque es verdad que siempre el hilo se ha cortado por lo más delgado, hemos ido sobre las víctimas. Estas leyes, como las de hoy, van sobre los victimarios, y ése es el cambio de paradigma, eso es lo importante.

Cuando abordamos la sanción de la ley 26.364, que aprobó el Parlamento en abril de 2008, la figura penal que se adecuaba más rigurosamente a la trata de personas estaba en los artículos 127 bis y 127 ter, que sanciona a quienes promovieren, facilitaren la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución. Después, cuando abordamos la ley migratoria 25.871, sancionada en 2003, la enfocamos fundamentalmente teniendo en cuenta, en una gran parte su cuerpo normativo, el derecho de los migrantes.

Sin embargo, surgió el interrogante acerca de la situación de los traficantes de personas, dado que observamos que no existía en el plexo normativo jurídico argentino ninguna figura que los castigara penalmente. Es decir, el punto donde se encontraba la génesis del problema no estaba tipificado penalmente. Por ello, incorporamos esa figura penal, y hoy tenemos traficantes de personas dentro de las cárceles. Entonces, creo que hay que llamar la atención sobre la importancia de esta norma en ese aspecto, porque estamos cambiando el paradigma. No estamos cortando el hilo por la parte más delgada, sino apuntando a lo principal.

Creo que estaba claro que la ley 26.364 era incompleta, porque no contemplaba la trata de personas dentro del país, ni abarcaba la recepción ni el traslado. Además, también quedaban fuera de la tipificación todos los otros fines que no fueran la prostitución, de modo que la esclavitud, el trabajo forzado y la extracción de órganos se hallaban excluidos.

Por eso, fue necesario modificar el Código Penal a fin de incorporar taxativamente el delito de trata de personas y, además, establecer ese delito como de competencia federal. Y por eso, la ley 26.364 incorporó en dicho código el tipo penal del tratante, lo cual constituyó otro avance conceptual fundamental establecido por el Congreso de la Nación.

Ahora bien, en este recinto, en el momento en que se estableció, fue muy discutida la condición de que existiera engaño, fraude, violencia

o amenaza para las personas mayores de edad. Recuerdo que se había planteado, en esa oportunidad, que esa condición estaba relativizando la existencia del delito en la misma norma, o sea, la estaba debilitando. Por eso, hoy estamos frente a un gran avance, porque estamos avanzando no sobre el error, no sobre un problema de tiempos, sino que estamos cambiando el paradigma. Esta modificación es muy importante, porque clara y contundentemente tenemos que afirmar que el consentimiento de la víctima de trata no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal.

En ese sentido, es fundamental que el artículo 2º de la ley 26.364 taxativamente exprese que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá, en ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Y la irrelevancia para la configuración del delito se establece también para la explotación sexual con la sustitución del artículo 125 bis y el artículo 127 del Código Penal.

Por eso, el delito de la trata de personas se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad. El consentimiento no puede eximir de responsabilidad penal, ya que si bien es cierto que toda persona mayor de edad es autónoma para tomar sus decisiones, en este tipo de delitos, las decisiones suelen estar viciadas por los mismos medios coercitivos, característicos de la trata de personas. Por ello, el delito se configura con la captación, el transporte, el traslado o la acogida con fines de explotación de la víctima. Es decir, depende de las acciones del tratante y de las finalidades de esa acción.

Señor presidente: esta modificación que estamos por aprobar se ajusta a las circunstancias en que suceden los hechos, en la realidad de todos los días en nuestro país, tal como fue mencionado en este recinto. En muchos casos llevados a la Justicia, los tratantes consiguen, con amenazas, que la víctima declare que hubo un consentimiento inicial que es usado por los delincuentes para defenderse y quedar libres, resultando impune el delito y desprotegida la víctima.

Esto ha pasado en mi provincia. Se conocen públicamente los casos de Romina Gamarra y

María Cristina Ojeda. Romina, con dieciocho años, fue secuestrada en enero de 2006 por un vecino, para explotarla, obligándola a prostituirse bajo amenaza de matar a su hermano. La hicieron pasar por burdeles de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, y terminó esclavizada en un burdel en La Banda, donde encontró una vecina suya de Barranquitas, María Cristina Ojeda. De ahí lograron escapar, a partir de una comunicación con su padre, el que concurrió con su niño para que lo pudiera llevar por las rutas —porque el padre era analfabeto— a buscar a su hija. Ambas, a partir del patrocinio de la Pastoral Penitenciaria de Rosario, hicieron la denuncia en la Justicia. El juez pidió la captura del vecino que había secuestrado a Romina. A partir de allí, las familias recibieron continuas amenazas y las capturas nunca se concretaron. Este calvario se había iniciado en enero. En noviembre, María Cristina Ojeda desapareció de su casa, a pesar de la custodia. Luego apareció en el juzgado diciendo que todo lo que había declarado no era válido y, después, desapareció definitivamente de su casa, hasta el día de hoy.

Estas son las cuestiones de todos los días...

Sr. Presidente (Basualdo). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: he solicitado esta interrupción porque agrega al caso, al ejemplo tan dramático que está contándonos el senador Giustiniani. Me acaban de informar que Candela ha aparecido muerta en Morón, que el cadáver ha sido reconocido por su madre.

Se suma una víctima más a esta lista de trata, de abusadores, y a una cultura que —como dijo la senadora Morandini—, noche a noche, en la televisión, exagera. Esta televisión que se ha convertido en un burdel porno y que millones de argentinos creen que es normal y saludable, y que promueve este tipo de relación con las mujeres y este tipo de modelo de mujer.

Sr. Presidente (Basualdo). — Continúa en uso de la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Por último, señor presidente, creo que no es suficiente la enunciación de los derechos de las víctimas sino que hay que proveer las herramientas para proteger esos derechos humanos.

Por eso, también quería rescatar el segundo aspecto de la importancia de la sanción del día de hoy, que es la creación por ley de un organismo federal: el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Creo que, de esta manera, estamos convirtiendo en política de Estado una herramienta que no queda a la discreción del gobierno de turno sino que significa una política permanente de asistencia a los derechos de las víctimas. Muchas leyes proclaman ese derecho pero no generan las herramientas para que ese derecho se ponga en práctica, como lo estamos haciendo a partir de la creación de este consejo federal.

Con esta noticia terrible que nos está dando la senadora Estenssoro –sólo los padres saben el drama y la angustia que es tener una hija desaparecida–, creo que leyes como las que estamos aprobando abren un camino de esperanza para combatir uno de los delitos más deleznable en pleno siglo XXI.

Sr. Presidente (Basualdo). – Estamos en el cierre.

Tiene la palabra el senador Juez.

Sr. Juez. – Le agradezco, presidente, había tenido que salir un segundo.

Dos minutos no más, simplemente para corroborar lo que he venido escuchando. No iba a hacer uso de la palabra, simplemente lo hago en mi condición de presidente de la bancada del Frente Cívico de Córdoba.

Recién, el senador Giustiniani hablaba con claridad: este tema de la eliminación del consentimiento es una construcción jurídica que parece una verdad de Perogrullo. ¿Sabe lo que costó esta construcción jurídica de la eliminación del consentimiento? Si fuera tan sencillo, ¿por qué el legislador no lo planificó? ¿Sabe la cantidad de personas sometidas durante una cantidad increíble de años?

Mi experiencia como especialista en derecho penal me llevó en mi provincia, después de casi 26 años ejerciendo esta profesión, a afrontar en los estrados judiciales –lo decía la senadora Morandini con mucha simpleza– todo un proceso judicial hasta que llega la pregunta clave: “¿Usted prestó consentimiento?” Y si respondían afirmativamente, se acababa todo. ¿Qué consentimiento puede prestar una mujer

a ser sometida, maltratada y vejada? ¿Qué consentimiento puede prestar un trabajador rural para ser expoliado? ¿Cuál es el valor de ese consentimiento? ¿Dónde está el discernimiento, la intención y la libertad?

Por eso, lo que acaba de decir el senador Giustiniani es lo más importante de este proyecto de ley. Pero no nos engañemos, quiero coincidir con el senador Fuentes. No seamos hipócritas, si esta sociedad no se pone las pilas, más allá de que contemos con una ley, el combate no será efectivo. Lo mío no es un discurso moralista, no tengo que ser una legisladora femenina para opinar en igual sintonía que la senadora Morandini; todos tenemos hijas mujeres y tenemos o tuvimos madre. Ésta es una herramienta maravillosa que va a tener el Estado, pero si la sociedad no contribuye a eliminar esa terrible cuota de hipocresía, vamos a tener una de las tantas leyes que no se cumplen o que no se reglamentan.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César C. Cobos.

Sr. Juez. – Coincido con lo que planteaban algunos senadores preopinantes, aquí hay connivencia de parte del poder. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque este proyecto de ley es producto del sostenimiento permanente de cientos de organizaciones no gubernamentales que han venido sosteniendo casi en soledad una pelea contra el Estado, contra los grupos poderosos y contra los factores de poder para poder llegar a este proyecto de ley.

Iba a hablar del tipo penal, de la calificación del hecho delictivo y de cómo el proyecto de ley avanza en dos calificaciones distintas, pero sería una verdad de Perogrullo. Simplemente, quiero decir que la eliminación de la palabra “consentimiento” es lo más novedoso y lo más importante pero, también, es lo que más nos ha demorado.

Hemos tenido discusiones y vamos a tener muchas más en los próximos años. Más allá de eso, hay que destacar el esfuerzo y la coincidencia lograda por este Senado. De ahí mi felicitación a los titulares de las comisiones y a los que han “laburado”. Hoy estamos rompiendo una barrera que ha permitido impunidad durante años en la República Argentina. La eliminación de la palabra “consentimiento” es

verdaderamente un muro que va a permitir, si el Estado se pone las pilas y la sociedad deja de ser hipócrita, un verdadero combate a este flagelo que es el tema de la trata.

Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá no está, entonces cierra como miembro informante la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a ser breve, porque el debate muestra las aristas complejas de este tema y lo difícil que fue ir construyendo los consensos. Obviamente, será un tema sobre el que volveremos a medida que la sociedad vaya elevando su nivel de conciencia. Aquí lo han planteado varios senadores y senadoras.

Refiriéndome a lo que planteó el senador López, en la comisión, tuvimos la precaución de convocar a organizaciones que representan a personas que ejercen la prostitución, justamente porque lo que no queremos, y sabemos que siempre sucede, es que terminemos perjudicando a quienes representan el hilo más delgado. Entonces, éste no es un proyecto de ley para penalizar a las personas que libremente deciden ejercer la prostitución.

También encontramos dos posiciones; hay quienes quieren que se regule el trabajo sexual y hay quienes dicen: “No, esto no es un trabajo, no tuve otra opción y lo que quiero es que el Estado me abra otras opciones”. Por lo tanto, es un debate muy interesante para seguir adelante.

Otro de los puntos que surgió fue la demanda para que se penalizara al usuario. Claro, si no hay usuario, no hay trata, o sea, no hay prostitución.

Quiero que quede claro que con la actual legislación argentina quien tiene una relación sexual pagada con una persona sometida a explotación o víctima de trata y sabe de esa situación está alcanzado por el Código Penal. Ahora bien, no quiero que se penalice a quien no sabía de esa situación porque muchas veces es la única vía de contacto que tiene la víctima para contar lo que le está pasando y eso pueda denunciarse. Entonces, quiero que esa persona que no sabía que se trataba de una víctima de trata tenga la libertad de denunciar el delito, a partir del relato de la víctima, de manera que se pueda desarticular a la red o a la banda de trata.

Son temas difíciles. Vamos a tener que seguir trabajando. De todas formas, los consensos de hoy son importantes y marcan un cambio cultural en nuestra sociedad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: no es la primera vez que este Congreso aborda el tema de la trata de personas. Por eso quiero reivindicar la oportunidad de tratamiento de estos asuntos por parte del Congreso de la Nación; primero, con la sanción de la ley 26.364, vigente, y ahora con los avances introducidos con esta norma en cuanto a técnica legislativa, derecho penal y la incorporación de algunos instrumentos institucionales operativos concretos. De esta forma estamos avanzando en un marco de debate que tiene como actor central al Senado de la Nación pero también a la Cámara de Diputados. Este debate ha llevado más de cinco meses y de él también participaron legisladores de la Cámara de Diputados, particularmente las diputadas nacionales María Luisa Storani, Marcela Rodríguez y Gil Lozano, entre otros, y también organizaciones de derechos humanos, que tienen conexión con la temática. Esperamos que luego del tratamiento y sanción del proyecto por este cuerpo, la Cámara de Diputados aborde esta cuestión rápidamente.

Se trata del tercer negocio ilícito que más ganancias deja a nivel mundial después de la venta de drogas y de armas. Como acá se ha dicho, se estima que 2.500.000 personas por año son víctimas de este delito, siendo la mitad de ellos niños. Las víctimas son obligadas a realizar desde trabajos forzados hasta la prostitución, pasando por la explotación laboral, particularmente en la industria textil y el servicio doméstico. Este delito afecta fundamentalmente a las mujeres, por lo que tiene que ver también con la cuestión de género.

Considero que el aporte que estamos haciendo desde el Senado tiene dos aspectos centrales. Primero, las modificaciones al Código Penal sobre la base de la reconceptualización de la cuestión del consentimiento, como acaba de decir el senador Juez. Llegamos a la eliminación del consentimiento como una causa para justificar la trata, después de un avance cultural importante que creo que en la sociedad argentina se tiene que seguir dando.

Entonces, el abordaje de este tema es un avance cualitativo cultural. Lo es también con relación a los medios comisivos, que han sido explicados por la miembro informante. También consideramos un avance la diferenciación entre mayores y menores de edad y la reforma de algunos artículos del Código Penal, específicamente lo relativo a las penas.

Se ha planteado que a veces hay normas que no logran cumplir los objetivos. En ese sentido, aparte de los cambios en el Código Penal, esta ley introduce una mejora en la institucionalidad para la prevención y lucha contra la trata de personas específicamente. Es decir, hay un mejor establecimiento del capítulo referente a las garantías de derechos. También es importante la fijación de obligaciones a las representaciones diplomáticas del Estado nacional a fin de que efectúen las presentaciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad de la víctima.

Es para destacar la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y del Comité Ejecutivo, organismos que van a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Son instrumentos concretos que van a mejorar la lucha contra el delito de trata, así como la prevención y asistencia a la víctima.

Otro aspecto interesante es la creación del registro de ONG vinculadas a los derechos humanos, así como el camino que se abre para una mejor sistematización de las denuncias y de la información.

Hasta el presente, nos hallamos frente a un Estado que tiene información dispersa, no concentrada ni con una lógica que permita un mejor abordaje para la lucha y prevención contra el delito de trata de personas.

Los organismos mencionados son aportes concretos, así como también lo son las obligaciones para que se instituyan programas de prevención y lucha contra la trata de personas y asistencia a la víctima.

Entiendo que las reformas del Código Penal y los aportes concretos a la institucionalidad constituyen un paso adelante en este tema.

Lo atinente a los mensajes de texto y el establecimiento de una única línea telefónica específica y, como acaba de plantear la señora

senadora Escudero, la preservación del anonimato o la identidad del denunciante cuando decida darse a conocer y el establecimiento de previsiones presupuestarias en el presupuesto general de la Nación son aportes concretos operativos para luchar contra la trata de personas.

En este contexto, señor presidente, es que dejamos sentado nuestro voto favorable al asunto en consideración.

Finalmente, reivindicamos el paso que hoy da el Congreso de la Nación, con la expectativa de que otras iniciativas aprobadas por el Senado de la Nación sean tratadas lo antes posible por la Cámara de Diputados a fin de que sean convertidas en ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.

Sra. Riofrío. – Señor presidente: estamos ante una iniciativa frente a la cual, por suerte, todos tienen deseos de intervenir y donde, realmente, son más las coincidencias que las diferencias.

He notado mucho compromiso desde la temática y desde lo emocional ya que todo tiene que ver con todo.

Por otra parte, quiero hacer mío el agradecimiento que hizo la señora presidenta de la comisión a todas las personas que han luchado para que hoy se alcance una mejor ley.

No recuerdo quién hizo referencia a la cuestión, pero como soy muy optimista, me parece que es muy bueno que las leyes se modifiquen todas las veces que sean necesarias. Creo que las leyes tienen la necesidad de seguir las dinámicas de la sociedad, una sociedad que se encuentra globalizada y que sufre cambios constantes; mucho más en el delito. Hay quienes piensan todos los días de qué manera se pueden alcanzar mejores resultados en lo que hace al delito. En consecuencia, las leyes deben seguir este proceso dinámico y urgente.

Por eso, más que hacer una crítica porque hace tan sólo tres años se sancionó esta ley que hoy estamos modificando, quiero decir que esto es una clara respuesta de que hay una fuerte voluntad política en corregir lo que no funciona. Es bueno que así sea, y realmente me alegro por ello.

La trata de personas es, como se ha dicho, la forma extrema de explotación del ser huma-

no. Es un negocio sumamente lucrativo y, en realidad, de muy escaso riesgo para quienes lo organizan.

No podemos dejar de hacer notar que, si bien se puede incluir a las personas en general –y también a los hombres–, en la mayoría de los casos se trata de niñas y de mujeres. Este negocio, que –como se ha dicho– tiene características transnacionales, crece también porque, a diferencia del tráfico de drogas, a una mujer –dependiendo de su edad y de su condición de salud– se la puede vender muchas veces; es decir, se puede reiterar el negocio muchas veces.

En los últimos años organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos incorporaron esta problemática como una agenda a tratar por parte de los Estados.

En el año 2008 este Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364, que tuvo dentro de sus antecedentes a muchos anteproyectos de senadoras y senadores.

En ese contexto temporal creo que esta ley, en realidad muy criticada, vino a cubrir una falencia muy grande al federalizar la aplicación de la norma para combatir este delito.

Todos sabemos que usualmente las investigaciones se inician en whiskerías, prostíbulos y lugares de citas de las provincias; por lo tanto, las investigaciones se iniciaban en la Justicia ordinaria y no se alcanzaba a ver el problema en su dimensión nacional y mucho menos internacional.

Desde la sanción de la ley, en el 2008, el Estado nacional centró sus esfuerzos en crear una arquitectura institucional y en adoptar distintas medidas para hacer operativa la nueva normativa. Es bueno que destaquemos esto, porque no se trata de que lo que se hizo en el año 2008 fue una cuestión aislada y que nada se hizo después. Entre otras medidas se destacan la creación de la oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de la trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; la instrucción a fuerzas de seguridad para la prevención, investigación del delito por resolución 1.679 –también del año 2008– del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; el Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación –la Oficina de la Mujer– y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –en el 2011–; el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad –también en 2011–, la aprobación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de la Trata de Personas, también del Ministerio de Seguridad en el año 2011. Esto es parte de esta arquitectura institucional.

A partir del impulso que generan la ley 26.364 y estas otras medidas podemos citar algunos datos que fueron recabados a julio de este año.

Se pudieron rescatar 2.320 víctimas. Se hicieron 995 allanamientos que terminaron con la detención de 849 personas. Pero también tenemos que decir, y no tenemos que avergonzarnos porque por eso estamos tratando esto, que hubo muy pocas sentencias. Éste es un dato que nos estaba mostrando que en algunos aspectos no estaba funcionando la normativa.

Con respecto a la reforma que hoy estamos tratando, creo que estamos dando un paso vital en la destrucción de los parámetros que definen a la explotación sexual al poner en jaque a la figura del consentimiento como eximente. Porque si uno hace una lectura muy liviana se da cuenta de que había una trata legal y una trata ilegal, y que la trata legal tenía que ver simplemente con un consentimiento que –como dijo el senador Juez– no tiene ninguna posibilidad de tener sustento. Una persona no autoriza a que se la explote ni a que se la veje. Si esto sucede es porque hay un vicio y una vulnerabilidad manifiesta.

Esta modificación del consentimiento pasa a ser irrelevante para la configuración del delito, no porque las mujeres no tengan capacidad para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, sino porque realmente no pueden jamás autorizar su propia explotación.

Como dijimos, la ley vigente tiene el carácter de federal; o sea, cumple la función de federalizar la lucha contra este delito. Pero creo que hay que hacer énfasis en la explotación porque se había descuidado la etapa del ofrecimiento. Realmente celebro esto como medio comisivo de la figura de la trata, porque en realidad el ofrecimiento sólo estaba considerado en la figura de niñas y niños y no en la del adulto.

Entonces, me parece que eso es, realmente, un avance sustancial.

No debemos agotar este esfuerzo en la tipificación del delito ni en promover la eficacia de los resortes jurídicos y judiciales para la resolución. Creo que el esfuerzo grande tenemos que hacerlo en la prevención de estos delitos. En este sentido, es muy importante que hoy destaquemos el decreto 936 de 2011 que firmó la señora presidenta, a través del cual se establece la prohibición de la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual.

Coincido absolutamente con la apreciación de la senadora Morandini con respecto a esta promoción de la prostitución encubierta con el éxito, con la glorificación del éxito que vemos todos los días en los programas de mayor rating en los medios, que pareciera que es algo que nadie se anima a decir claramente.

No voy a hacer el análisis pormenorizado del articulado, porque lo ha hecho de manera excelente la miembro informante y en el transcurso de la tarde hemos escuchado distintos puntos de vista. Pero no quiero dejar terminar esta exposición sin mencionar la profunda congoja que tenemos todos los senadores al enterarnos hace muy pocos minutos de la resolución trágica del caso de la búsqueda de Candela. Creo que no podemos decir más que esta situación tan tremenda nos compromete desde el lugar que nos toca. No es poco estar sentados en estas bancas y poder modificar las posibilidades de resolución de los casos. Y también nos compromete desde lo humano para seguir luchando contra este flagelo de todos los días, que es matar y matar todos los días.

Alguien mencionó el delito continuado, que es una realidad: es una tragedia que hoy está viviendo nuestro país.

Sé que todos comparten esta sensación.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: a los efectos de poder realizar una sola votación en general y en particular quiero proponer algunas reformas.

En primer lugar, una propuesta de modificación que ya adelanté y que se debe a un error de tipeo: en el artículo 23 del dictamen de comisión, que sustituye el artículo 127 del

Código Penal, la pena básica mínima debe ser 4 y no 3, como dice en el dictamen. Esto es para ser congruente con las otras penas. Entonces, quedaría así: “Será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotare...”, etcétera.

Después, el artículo 26, que sustituye el 145 ter del Código Penal, trata de los supuestos agravados del delito de trata. Aquí, me hace llegar el jefe de la bancada del Frente para la Victoria una propuesta del Ministerio de Seguridad coincidente con otra que había acercado ayer el senador Sanz, de la Unión Cívica Radical, a la comisión y que ya habíamos conversado. Entonces, tenemos los distintos incisos de agravamiento. De cinco a diez años: 1) con engaño; 2) si la víctima está embarazada; 3) si es una persona discapacitada; 4) si las víctimas son tres o más; 5) si del delito participan tres o más personas; 6) si el autor es ascendiente, descendiente, etcétera; 7) si el autor es funcionario público o miembro de fuerza de seguridad. Y, a continuación, agregamos un párrafo que dice que cuando se lograra consumir la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de ocho a doce años de prisión. Luego, al final, el último párrafo sigue tal como estaba: es decir, cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

Nosotros explicamos que se trata de dos delitos: trata y explotación. Pero, cuando la trata termina en explotación, sin perjuicio del concurso de delitos, tiene una pena agravada.

Con estas aclaraciones, solicito que se vote en general y en particular mediante una única votación.

Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.¹

Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero pedir algunos cambios en distintos artículos específicos. Si no, en estos casos voy a votar en contra.

En el artículo 4º, inciso n), dice que si la víctima es menor se evitará el careo con su

¹ Ver el Apéndice.

victimario. Me gustaría que fuera así en todos los casos, no solamente si se trata de una menor. Ésa es la redacción que estamos proponiendo. Porque aunque sea mayor de edad el careo con el victimario, el tratante, su explotador, muchas veces hace, como contó el senador Giustiniani, que cambie su testimonio.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Entiendo que eso está previsto en el artículo 27, cuando incorporamos el artículo 250 quáter del Código Procesal Penal con toda la protección de la víctima. Esto es, siempre que fuere posible, en cuanto a las declaraciones de los delitos, las víctimas siempre serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes. Es decir, no solamente está prohibido el careo, sino la presencia de las partes en el interrogatorio. Con eso estaríamos saneando perfectamente lo que se acaba de plantear.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Si es así, senadora Escudero, entonces eliminémoslo. Porque, al hacerse esa diferenciación, parece que el careo es posible cuando se trata de alguien mayor de edad y lleva a confusión, por más que esté en otro artículo.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. – A veces, hay careos. ¡Claro!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. – ¿Por qué se pone si la víctima es menor? ¿Y si es mayor de edad? ¿Por qué no se pone también acá?

Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿por qué no ordenamos el debate? La senadora Estenssoro tuvo el tiempo y la oportunidad de plantear esto cuando habló. Ahora, resulta que estamos por votar y vamos a revisar toda la ley. Yo quiero un funcionamiento lógico, racional y eficiente del Senado. Porque, si no, ahora tenemos que escuchar artículo por artículo, cuando tenemos un acuerdo de votar por unanimidad esta ley.

Sr. Presidente. – Hay una moción de votar en general y en particular.

Sr. Pichetto. – Sí y yo la ratifico. No quiero disgustarme con la senadora...

Sr. Presidente. – No se disguste. (*Risas.*)

Sr. Pichetto. – ... pero –repito– me parece que ha habido una oportunidad para plantear los temas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que sin ningún problema podemos eliminar ese párrafo, dado que la víctima nunca puede ser sometida a careo. Entonces, eliminamos eso del inciso n), porque realmente la víctima nunca puede ser sometida a un careo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Le pido al senador Pichetto, a quien le tengo un gran aprecio, que no crea que cuando uno hace una observación es irracional, porque ésa es una descalificación a una colega y me parece que no tenemos por qué soportar descalificaciones entre nosotros. Así que le pido más respeto.

Por lo tanto, le pido al señor senador Pichetto más respeto. No es la primera vez que sucede, y él sabe que le tengo cariño.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido disculpas a la senadora Estenssoro; ella sabe que yo también la aprecio.

De ninguna manera quise ofenderla. Simplemente planteé una cuestión de tiempo y de oportunidad; nada más que eso.

Sr. Presidente. – Finalizado el debate, pasamos a votar el proyecto en general y en particular en una sola votación.

Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo respecto de los artículos 11 y 12 –es decir, la totalidad del título V–, siguiendo la opinión manifestada por el señor senador Giustiniani.

Sr. Presidente. – Se deja constancia, señora senadora.

Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 58 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Morandini. — Señor presidente: por un error involuntario me equivoqué en la votación.

Sr. Presidente. — Entonces, sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Morandini. — Afirmativo.

Sr. Castillo. — Señor presidente: no me tomé el voto.

Sr. Presidente. — En consecuencia, manifiéstelo usted también a viva voz.

Sr. Castillo. — Afirmativo.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.²

23

MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: considero justo hacerle un reconocimiento al Departamento de Automotores del Senado y, en particular, a sus trabajadores y choferes, quienes, como consecuencia de los problemas que trajeron aparejados las cenizas del volcán, anduvieron del Norte al Sur del país e hicieron más de un millón de kilómetros.

Reitero: creo que es justo hacerle un reconocimiento al Departamento de Automotores y a sus trabajadores y choferes, quienes colaboraron con los senadores trasladándonos desde nuestros domicilios al Senado, y viceversa.

Me parecía que valía la pena que usted, como presidente de esta casa, lo supiera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.

Sra. Bongiorno. — Señor presidente: adhiero al reconocimiento del señor senador Pichetto. Pertenece a una de las provincias más afectadas por la cancelación de los vuelos a causa de las cenizas —doy fe de que en una semana hicimos, entre ida y vuelta a Río Negro, 5 mil kilómetros—, pero tuvimos la total disponibilidad del Departamento de Automotores y de su director. Por lo tanto, vaya también mi agradecimiento hacia ellos.

24

S.-3.267/10

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Bongiorno. — Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión respecto del expediente S.-3.267/10 del 23 de septiembre de 2010, relacionado con el *grooming*.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión formulada por la señora senadora Bongiorno.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobada.

25

S.-3370/10 y otros

REGISTRO DE DATOS GENÉTICOS VINCULADOS CON LA INTEGRIDAD SEXUAL

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en los siguientes proyectos de ley: del señor senador Mestre, por el que se modifica la ley 22.117 respecto de la creación del Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual; del señor senador Pichetto, por el que se crea un Registro Especial para los Delitos de Abuso Sexual; de la señora senadora Escudero, por el que se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; del señor senador

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Videla, quien justificó la represión, la matanza, corrupción y robo de bebés impuesto por el proceso de reorganización nacional como una “guerra interna”; que el mencionado proceso fue auspiciado por el dirigente radical Ricardo Balbín, que el desprestigio de dicho régimen fue obra de la propaganda, y que los enemigos del proceso están ahora “en el gobierno”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil once.

JULIO C. C. COBOS.

Juan H. Estrada.

74

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el proyecto de ley de los señores senadores Rojkes de Alperovich y Mansilla, creando la Unidad de Enlace para el Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados a la Trata y Tráfico de Personas (S.-706/10); el proyecto de ley del señor senador Nikisch, modificando la ley 26.364 de prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas (S.-2.447/10); el proyecto de ley de la señora senadora Bortolozzi, modificando la ley 26.364 –trata de personas– por el cual se excluye el consentimiento de la víctima como causa eximente de responsabilidad penal, civil o administrativa, para el que cometiere el delito (S.-2.711/10); el proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso, modificando la ley 26.364 –Trata de Personas– respecto a capacitar a las azafatas, pilotos y personal afín para reconocer a víctimas del delito (S.-728/11); y el proyecto de ley del señor senador Romero, modificando la ley 26.364 – Trata de Personas– y creando programas nacionales de capacitación y de prevención y asistencia a las víctimas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (S.-1.514/11), y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

- a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
- b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
- c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;
- d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;
- e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;
- f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

Art. 2º – Deróganse los artículos 3º y 4º de la ley 26.364.

Art. 3º – Sustitúyese la denominación del título II de la ley 26.364 por la siguiente:

TÍTULO II

Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 6º: El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes:

- a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan;
- b) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social;
- c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal;

- d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;
- e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias;
- f) Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la ley 25.764;
- g) Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165;
- h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo;
- i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
- j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
- k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
- l) A la protección de su identidad e intimidad;
- m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;
- n) En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrá ser sometida a careos. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 9°: Cuando la víctima del delito de trata o explotación de personas en el exterior del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante las autoridades locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y acompañarla en todas

las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos representantes arbitrarán los medios necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación.

Art. 6° – Sustitúyese el título IV de la ley 26.364 por el siguiente:

TÍTULO IV

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 18: Créase el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que contará con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2. Un representante del Ministerio de Seguridad.
3. Un representante del Ministerio del Interior.
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del pleno.
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del pleno.
9. Un representante del Poder Judicial de la Nación, a ser designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
10. Un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. Un representante del Ministerio Público Fiscal.
12. Un representante del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
13. Un representante del Consejo Nacional de las Mujeres.

14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley.

El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 19: Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con actividad específica en el tema, que acrediten personería jurídica vigente y una existencia no menor a tres años.

La reglamentación dispondrá el modo en que, de manera rotativa y por períodos iguales no superiores a un año, las organizaciones inscritas integrarán el Consejo Federal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 20: El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene las siguientes funciones:

- a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes;
- b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; y, en general, participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas;
- c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
- d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al comité ejecutivo creado en el título V de la presente ley;
- e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el comité ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área

solicitándole toda información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

- f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;
- g) Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
- h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo de sus autores y asistir a las víctimas;
- i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscrito la República, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia;
- j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia en el tema;
- k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el comité ejecutivo;
- l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros.

La Defensoría del Pueblo de la Nación será el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos por el Consejo Federal.

Art. 10. – Incorpórase como título V de ley 26.634, el siguiente:

TÍTULO V

Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Art. 11. – Incorpórase como artículo 21 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 21: Créase el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Seguridad.
2. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 22 de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 22: El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene a su cargo la ejecución de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas:

- a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias;
- b) Desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación;
- c) Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios de atención integral gratuita (médica, psicológica, social, jurídica, entre otros);
- d) Generar actividades que coadyuven en la capacitación y asistencia para la búsqueda y obtención de oportunidades laborales, juntamente con los organismos pertinentes;
- e) Prever e impedir cualquier forma de revictimización de las víctimas de trata y explotación de personas y sus familias;
- f) Llevar adelante un registro nacional de datos vinculados con los delitos de trata y explotación de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. A tal fin se deberá relevar periódicamente toda la información que pueda ser útil para combatir estos delitos y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la re-

misión de los datos requeridos a los fines de su incorporación en el registro;

- g) Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de los delitos de trata y explotación de personas, desde las directrices impuestas por el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y las cuestiones específicas de la niñez y adolescencia;
- h) Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y explotación de personas y desarrollar materiales para la formación docente inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología;
- i) Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para la prevención y asistencia a las víctimas, aportando o garantizando la vivienda indispensable para asistirles conforme lo normado en la presente ley;
- j) Capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr la mayor profesionalización;
- k) Coordinar con las instituciones, públicas o privadas, que brinden formación o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación de cabina de aeronaves o de medios de transporte terrestre, internacional o de cabotaje, un programa de entrenamiento obligatorio específicamente orientado a advertir entre los pasajeros posibles víctimas del delito de trata de personas;
- l) Coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Realizar en todo el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del sistema y el número para realizar denuncias.

El comité ejecutivo elaborará cada dos años un plan de trabajo que deberá ser presentado ante el Consejo Federal para su aprobación. Deberá también elaborar y presentar anualmente ante el Consejo Federal informes sobre su actuación a los fines de que éste pueda ejercer

sus facultades de supervisión. Estos informes serán públicos.

A los fines de hacer efectiva la ejecución del programa, el comité ejecutivo coordinará su accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales e internacionales.

Art. 13. – Incorpórase como título VI de la ley 26.364 el siguiente:

TÍTULO VI

Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas

Art. 14. – Incorpórase como artículo 23 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 23: Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.

Art. 15. – Incorpórase como artículo 24 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 24: A fin de implementar el sistema mencionado en el artículo anterior, asignasele el número telefónico ciento cuarenta y cinco (145), uniforme en todo el territorio nacional, que funcionará en forma permanente durante las veinticuatro horas del día a fin de receptor denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. Las llamadas telefónicas entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.

Asimismo, se garantizará el soporte técnico para desarrollar e implementar el servicio de mensajes de texto o SMS (Short Message Service) al número indicado, para receptor las denuncias, los que serán sin cargo.

Art. 16. – Incorpórase como artículo 25 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 25: El Ministerio Público Fiscal conservará un archivo con los registros de las llamadas telefónicas y de los mensajes de texto o SMS (Short Message Service) identificados electrónicamente, los que serán mantenidos por un término no menor a diez (diez) años, a fin de contar con una base de consulta de datos para facilitar la investigación de los delitos de trata y explotación de personas.

Art. 17. – Incorpórase como artículo 26 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 26: Las denuncias podrán ser anónimas. En caso de que el denunciante se identifique, la identidad de esta persona será

reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.

Art. 18. – Incorpórase como título VII de la ley 26.364 el siguiente:

TÍTULO VII

Disposiciones finales

Art. 19. – Incorpórase como artículo 27 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Art. 20. – Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 23 del Código Penal por el siguiente:

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendida entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 125 bis: El que promoviére o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

Art. 22. – Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco a diez años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afin en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

Art. 23. – Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 127: Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediar el consentimiento de la víctima.

La pena será de cinco a diez años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afin en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

Art. 24. – Sustitúyese el artículo 140 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro a quince años el que reducir a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una

persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.

Art. 25. – Sustitúyese el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediar el consentimiento de la víctima.

Art. 26. – Sustitúyese el artículo 145 ter del Código Penal por el siguiente:

Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco a diez años de prisión, cuando:

1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta años.
3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.
4. Las víctimas fueren tres o más.
5. En la comisión del delito participaren tres o más personas.
6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afin en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

Art. 27. – Incorpórase como artículo 250 quáter del Código Procesal Penal el siguiente:

Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una “sala

Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado los actos serán desarrollados con control judicial, previa notificación al defensor público oficial.

Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que designe el tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

Art. 28. – Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de su promulgación.

Art. 29. – El Poder Ejecutivo dictará el texto ordenado de la ley 26.364, de conformidad a lo previsto en la ley 20.004.

Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 30 de agosto de 2011.

*Sonia M. Escudero. – José M. Cano. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Marina R. Riofrio. – Nanci M. A. Parrilli.
– César A. Gioja. – Ernesto R. Sanz.
– Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Blanca M. Monllau. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Emilio Rached. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini.*

ANTECEDENTES

I

S.-706/10

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace para el Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados a la Trata y Tráfico de Personas.

Art. 2º – *Objetivos:*

- a) Concentrar toda la información proveniente de las diferentes áreas que intervienen en todo lo relativo con la trata y el tráfico de personas;
- b) Realizar el seguimiento del tema y contar con estadísticas actualizadas, sobre la cantidad de víctimas y sobre el modus operandi de los delincuentes;
- c) Intercambiar información y coordinar las acciones para el combate de este flagelo, con todos los gobiernos provinciales, así como también con todos los países, especialmente los limítrofes;
- d) Solicitar información sobre los resultados obtenidos por las diferentes fuerzas de seguridad, que intervienen en los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas;
- e) Requerir a los juzgados que han recibido causas sobre desaparición de personas, informen acerca de estas denuncias y sobre el estado de las causas;
- f) Aportar a las causas que están siendo investigadas, todo lo que pueda servir para el esclarecimiento de las mismas;
- g) Mejorar las formas de contención y ayuda a las víctimas y a los familiares de éstas;
- h) Coordinar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a búsqueda de personas desaparecidas y a la atención y contención tanto de las víctimas como de los familiares de las mismas.

Art. 3º – *Integrantes de la unidad de enlace.* La Unidad de Enlace se integrará de la siguiente manera:

- a) Un representante de cada una de las áreas del Estado nacional, en las que se denuncia la desaparición de personas o están dedicadas al seguimiento del tema tráfico y trata de personas;
- b) Un representante de las fuerzas de seguridad, que intervienen en la búsqueda de personas desaparecidas;
- c) Un representante de cada una de las áreas del gobierno nacional dedicadas a la contención de víctimas y familiares de las mismas;
- d) Un representante del Consejo Asesor, el que estará integrado por las organizaciones civiles cuya razón social sea la trata y tráfico de personas, la contención de las víctimas y de los familiares de las mismas.

Art. 4º – Se solicitará a los gobiernos provinciales que designen un representante especializado en el tema, para que se integre a dicha unidad de enlace.

Art. 5º – Se solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de las representaciones diplomáticas, se facilite la coordinación de esta unidad de enlace con otras similares u otros organismos dedicados

al tema, en todos los demás países, especialmente los limítrofes.

Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional determinará el área en la que deberá funcionar dicha unidad de enlace.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La acción coordinada, la información compartida y la rapidez en la acción, constituyen componentes claves para el combate a la trata de personas, en particular la de menores y mujeres.

El tráfico y trata de personas es un delito transnacional, que los países deben combatir en unidad de acción aceptando que quienes tienen la responsabilidad de detener este flagelo, requieren de la ayuda decidida de todos los sectores de los gobiernos, especialmente de quienes tienen a su cargo la seguridad dentro de cada uno de los países, pero también en coordinación permanente con todos los demás, especialmente los países limítrofes.

Para ello es necesario el intercambio de todo el apoyo que surge cotidianamente en materia de este delito, ya que en este esfuerzo de luchar tanto sea en la búsqueda de víctimas de trata, en el descubrimiento de las redes delictivas o en la contención de víctimas y familiares, se podrá ser más certero, si tenemos mejor información.

En esta difícil tarea, necesitamos tener estadísticas actualizadas sobre el comportamiento de los delincuentes; saber dónde desaparecen los niños/as y las mujeres de nuestros pueblos; cuál es el lugar de destino de los mismos y cuáles son las fronteras más vulnerables en cada uno de nuestros países.

El combate de la trata de personas debe apoyarse sobre una premisa básica, y es que estamos frente a un crimen organizado internacional, tal como lo son el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

Si no unimos esfuerzos, entre las diferentes áreas del gobierno nacional y a su vez coordinamos este esfuerzo tanto con los gobiernos provinciales como con los de países limítrofes, difícilmente vamos a poder enfrentar esta enorme tarea.

El objetivo de esta unidad de enlace que estoy proponiendo es generar un espacio de seguimiento, de coordinación y de cooperación entre todos los organismos que están tras el mismo cometido, porque entiendo que esto potenciaría la tarea realizada, lográndose la mayor eficiencia y rapidez que en estos casos es necesaria.

Es sumamente importante que comencemos a actuar como una sola red, en la que se articulen las acciones de protección, rescate y atención a las víctimas así como también de sanción y castigo a los delincuentes.

Por otro lado si bien es cierto que son los gobiernos nacionales y provinciales los encargados de resolver estos casos, es también cierto que nada se puede hacer, sin una estrecha coordinación entre los diferentes estamentos gubernamentales y también entre éstos y la sociedad civil.

Sin lugar a dudas lo más importante es que comencemos a tomar conciencia de la magnitud y alcance que este delito tiene y por otro lado que se trata de un crimen organizado de carácter internacional y que si bien es cierto que cada país busca la mejor manera para combatirlo, es fundamental que se tiendan lazos de comunicación y cooperación entre todos, sobre todo los limítrofes, que es generalmente por donde se trafican las víctimas de este delito.

En síntesis, lo que estoy proponiendo es que desde esta Unidad de Enlace se trabaje de manera coordinada fronteras adentro de nuestro territorio nacional con los gobiernos provinciales y fronteras afuera con todos los demás países.

Como parlamentaria del Mercosur, presenté ante aquel Parlamento un proyecto pidiendo se conforme una comisión especial para el tratamiento de este tema, sobre todo para avanzar en la armonización legislativa entre los países que integran la comunidad mercosuriana, y en un futuro entre toda la comunidad internacional. El proyecto fue aprobado el año pasado, sólo falta que este año quede conformada y se comience a trabajar en la legislación comparada de los cuatro países.

Mucho se ha dicho y también hay que reconocer que mucho es lo que se ha hecho sobre este tema, pero es necesario mejorar aún más, darle a este tema una vuelta más, para no sentir ese sabor amargo de que los delincuentes van por ascensor y la Justicia por las escaleras.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación de este proyecto.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F. Mansilla.

II

(S.-2.447/10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley 26.364, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2°: *Trata de personas*: se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación económica o cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros, de una persona que tenga autoridad sobre otra, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza

u otras formas de coacción, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, aun cuando mediere el consentimiento de la víctima.

Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 26.364.

Art. 3º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.364, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 10: Incorpórese como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 bis: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años. El consentimiento dado por la víctima no constituirá causal de eximición de la responsabilidad penal.

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando:

El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público.

El hecho fuere cometido por tres o más personas en forma organizada.

Las víctimas fueran tres o más.

Art. 4º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.364, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Incorpórese como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 ter: En cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo 145 bis, la pena será prisión de diez (10) a quince (15) años cuando se configure además:

1. Engaño, fraude, violencia, amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

Art. 5º – Créase el Programa para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, el que deberá incluir los siguientes objetivos:

- Establecer acciones fundamentales en la protección y ayuda a las personas víctimas de trata respetando plenamente los derechos humanos.
- Trabajar sobre los factores que generan situaciones de vulnerabilidad en las víctimas de dicha trata prestando especial atención a las mujeres y niños.

- Atender la diversidad social, cultural y étnica de las víctimas.
- Conformación y capacitación de equipos interdisciplinarios para la recuperación, asistencia, protección y reinserción social de las víctimas.

El programa deberá contemplar tantos enfoques diferenciados en el abordaje de la problemática, como diversidad en las características de las víctimas, como niñas y niños, mujeres, personas con discapacidades, u otra particularidad, las que deberán ser observadas y tenidas en cuenta al momento de asistirlos.

El Estado argentino al ratificar los instrumentos internacionales se compromete en crear un sistema de asistencia integral a las víctimas, de conformidad con el Protocolo de Palermo y los principios y directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Art. 6º – Corresponde al Poder Ejecutivo nacional diseñar el Programa de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, será a su vez la autoridad de aplicación del programa y en tal carácter podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con otros organismos, para implementar así las acciones previstas en la presente norma.

Art. 7º – Dicho programa se financiará con las partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Se busca con estas modificaciones actuar con el rigor necesario para hacer cumplir la ley, aplicando políticas y programas de lucha contra la trata de personas.

Para alcanzar este objetivo se deben reforzar y utilizar las siguientes estrategias:

- Hacer cumplir la ley y aplicar políticas y programas de lucha contra la trata de personas.
- Revisar el marco normativo de conformidad con las normas y convenios internacionales ratificados por nuestro país.
- Aumentar las actividades de sensibilización, claves en las campañas para la prevención de trata de personas y en las acciones para prestar cuidados a las víctimas de la trata.

La ley 26.364 constituyó en parte una adecuación de nuestra legislación interna a la Convención de Naciones Unidas ratificada por la Argentina contra la delincuencia organizada transnacional y su Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, llamado Protocolo de Palermo, pero resulta perfectible, y es por ello que proponemos la

modificación a la definición de trata en el artículo segundo, estableciendo criterios claros para entender qué constituye trata, ofreciendo cuatro elementos para su determinación: acto, medios, resultado final y tipo de víctima.

Con respecto a esto último, la ley debió especificar explícitamente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, o asentimiento cualquiera sea su edad, en concordancia con los requisitos del Protocolo de Palermo.

Que no se tenga en cuenta el consentimiento de la víctima y que la ley no establezca diferencias entre mayores y menores de 18 años constituye un hecho fundamental para estar en consonancia con los compromisos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito.

El consentimiento es irrelevante o debe serlo para la configuración del delito, ya que es claro que las personas sometidas a cualquier explotación llegan a esta instancia en un estado de vulnerabilidad personal, familiar y social en el cual sus decisiones se encuentran condicionadas.

Es claro que la víctima del delito de trata en la mayoría de los casos fue antes una víctima social, motivo por el cual las políticas deben contemplar programas de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas. Estos programas, sumados a intensas campañas de lucha contra la trata de personas, requieren de una política de Estado perdurable en el tiempo y con alto grado de compromiso por parte del gobierno y la sociedad.

Si la trata es una de las actividades de la delincuencia transnacional organizada, ello es posible, entre otras cosas, porque la pobreza resultante de la escasez de recursos, la falta de oportunidades y la exclusión social crecen en lugar de disminuir; porque la prostitución no decrece, sino que perfecciona sus modos de gerenciamiento; porque la corrupción permite ojos cerrados y oídos sordos ante la criminalidad organizada.

La trata internacional en la Argentina es menor que la interna, es por ello que resulta fundamental emprender fuertes campañas de sensibilización y capacitación y difundir las “buenas prácticas” de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales encargados de la persecución penal de este delito.

La trata no se agota en las explotaciones sexual y laboral, sino que también es una forma de esclavitud y una violación a los derechos humanos.

La mayor cantidad de víctimas de trata son mujeres, niñas, niños y adolescentes, mayoritariamente menores de edad, poco escolarizados y muy pobres, con limitadas posibilidades de inserción laboral.

La captación mediante engaño fue detectada como la principal forma de reclutamiento. Se estima que, a nivel mundial, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 4.000.000 de personas son víctimas de trata anualmente.

El Informe sobre Trata de Personas de 2010 marca el 10° aniversario, fecha clave en la lucha contra la esclavitud moderna. En el año 2000, los Estados Unidos promulgaron la Ley de Protección de las Víctimas de Trata de Personas, y las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo de Palermo, que centró la atención de la comunidad mundial en la lucha contra la trata de personas. Por primera vez se logró consenso en todo el mundo acerca de que se deben penalizar todas las acciones de trata de personas y que la respuesta de los gobiernos debe incluir el paradigma de “las 3 P”: prevención, procesamiento judicial del delito y protección de las víctimas. Este paradigma está interrelacionado; no es suficiente enjuiciar a los tratantes si no proporcionamos asistencia a los sobrevivientes ni garantizamos que no haya más víctimas.

El Informe sobre Trata de Personas es un instrumento de diagnóstico que muestra la labor que se lleva a cabo actualmente. No es una condena ni un indulto. Tampoco garantiza la clasificación del próximo año. Nuestro país ha subido su nota en lo referido a políticas de lucha contra la trata de personas. En la décima edición del Informe “Trafficking In Persons” (TIP) la administración que conduce el presidente Obama reconoció el esfuerzo significativo del Estado argentino para combatir este flagelo. Este año nuestro país ascendió al nivel 2 en lo referido a la lucha contra esta modalidad delictiva.

Así, el país se ubica ahora entre el nivel 1, de países que tienen una legislación en vigencia desde hace varios años y obtienen condenas firmes, y el nivel 3, de aquellos que no realizan esfuerzos para sancionar el delito. De todas formas la situación está lejos de ser la ideal en la Argentina.

Es por ello fundamental que se implemente el programa nacional, con una visión federal de la prevención de la trata y de protección y asistencia a las víctimas de trata que interactúe con los que hubiere en Latinoamérica, dado que la trata no reconoce fronteras, y que tenga previsto ese plan la reparación del daño a las víctimas, tal el caso del secuestro e incautación de los bienes de los tratantes.

Resulta así importante rescatar la importancia de los acuerdos de cooperación entre los organismos estatales y ONG, asociaciones civiles en la prevención y asistencia a las víctimas recuperadas, así como el trabajo en red, mejorar la política de asistencia a las víctimas, hacer un seguimiento de casos, en definitiva asumir que sin una acción adecuada y progresiva la democracia se erosiona y la dignidad intrínsecamente protegida en los derechos humanos se lesiona sensiblemente.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Roy A. Nikisch.

III

(S.-2.711/10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley 26.364, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2º: Trata de personas es la captación, traslado, transporte, recepción o guarda de personas, realizada para su explotación dentro de la República Argentina o desde y hacia el exterior.

En ningún caso, el consentimiento prestado por la víctima de la trata de personas para someterse a esa situación tendrá efecto alguno. En consecuencia, no podrá ser considerado causa eximente de responsabilidad penal, civil o administrativa.

Art. 2º – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto propicia la modificación del artículo 2º y derogación del artículo 3º de la ley 26.364 a los fines de lograr una mayor eficacia en la protección de los derechos de las víctimas de trata de personas.

Teniendo en cuenta que las víctimas de trata de personas no tienen libertad para elegir, toda vez que su voluntad se encuentra fuertemente condicionada por la violencia física o moral ejercida en su contra, en ningún caso el eventual consentimiento a someterse a esa aberrante situación tendrá efectos jurídicos.

Las víctimas de la trata de personas no tienen posibilidad de elegir ni de liberarse de esa situación de servidumbre por estar en un plano de franca desigualdad y desprotección social frente al victimario.

Las víctimas no pueden disponer del bien jurídico protegido por la ley mediante su consentimiento, ya que este tipo de delitos no es de instancia privada.

Nuestro proyecto tiene por finalidad establecer que en ningún caso podrá considerarse el consentimiento brindado por la víctima de la trata de persona como causal eximente de la responsabilidad penal, civil o administrativa en favor de los victimarios.

A esos efectos, frente a la responsabilidad delictiva de los autores de la trata de personas debe ser indiferente e irrelevante la circunstancia de que la víctima de tal execrable delito mayor de dieciocho años haya prestado su consentimiento.

Sabido es que el Estado tiene por finalidad alcanzar el bienestar general de la población. No vemos de qué manera el Estado pueda cumplir con esa finalidad en tanto su legislación permita a los autores de la trata de personas eximir su responsabilidad penal mediante el consentimiento de la víctima mayor de dieciocho años, quien además de sufrir ese grave delito se encuentra en un verdadero estado de indefensión por la violencia física y moral sufrida.

Finalmente, el proyecto deja sin efecto la carga de la víctima de trata de personas de demostrar que fue engañada o víctima de fraude, violencia física o moral, intimidación o recibió pagos.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la votación del presente proyecto.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

IV

(S.-728/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Agréguese como título IV de la ley 26.364, el correspondiente a “Formación de azafatas, pilotos y personal aéreo y terrestre”, el siguiente:

TÍTULO IV

De la formación de azafatas, pilotos y personal aéreo y terrestre

Art. 18. – Todas las instituciones, públicas o privadas, que entrenen, formen o capaciten a personas tendientes a desempeñarse como azafatas, pilotos o a formar parte de la tripulación de cabina de aviones o de transporte terrestre interurbano e internacional deberán contar con un entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento de víctimas del delito de trata de personas.

Art. 19. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, para que a través del órgano que corresponda, confeccione el plan de entrenamiento especial para los sujetos mencionados en el artículo anterior, y determine el procedimiento que éstos deberán seguir cuando hayan reconocido a una víctima del delito de trata de personas.

Art. 2º – Adécuese la numeración del título correspondiente a disposiciones finales, el cual quedará como título V, y la de sus artículos correspondientes, los cuales pasarán a ser artículo 20, artículo 21 y artículo 22 de la ley 26.364.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto que todas las instituciones del país que capaciten y formen a azafatas, pilotos o personas que pretendan formar parte de la tripulación de cabina de aviones, cuenten con un entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento de víctimas del delito de trata de personas.

En efecto, cabe recordar que el artículo 2º de la ley 26.364 define como trata de personas "...la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediere engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta".

Asimismo, el artículo 3º de la mencionada normativa define a la trata de menores de edad como "...el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación. Existe trata de menores aun cuando no mediere engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de dieciocho (18) años no tendrá efecto alguno".

Como bien es sabido, el delito de trata de personas (que en su gran mayoría son mujeres y niños) ocurre cada vez más en Latinoamérica, situación que no le es ajena a nuestro país: hoy la Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado.

Un caso sin dudas aberrante ocurrió en la provincia de Santa Fe en febrero de este año, cuando autoridades policiales locales encontraron a tres personas, dos de ellas menores de edad, que eran obligadas a ejercer la prostitución en la casa de la abusadora.

La Justicia no se hizo tardar y la mujer de 55 años fue condenada por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe a 10 años de prisión por cometer el delito de trata de menores, constituyendo el primer juicio oral del país que se ocupó del tema que aquí nos convoca.

El modus operandi de esta mujer consistía en prometer dar trabajo como empleadas domésticas con el fin de convencer a chicas jóvenes y que sus familiares se las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red prostibularia que operaba en la localidad de América, ciudad de Buenos Aires.

Otro caso que se vincula con la trata de personas, según cuenta el comisario Jorge Fernández, jefe de la División Trata de Personas de la Policía Federal en una entrevista otorgada al diario *La Nación* el día 28 de marzo de 2010, es el ocurrido en Olmos, ciudad donde un proxeneta obligó a abortar a una de las mujeres que trabajaba en su prostíbulo, y el bebé fue enterrado en el patio trasero del local.

Como los episodios relatados anteriormente hay cerca de 600 casos más de trata de personas en la Argentina, según surge de diferentes organismos no gubernamentales tales como Fundación María de los Angeles, La Casa del Encuentro, Fundación Mujeres en Igualdad y Alto a la Trata.

Frente a la penosa situación por la que se encuentra atravesando nuestro país, es menester adoptar políticas que no sean únicamente sancionadoras o protectoras, sino, principalmente, preventivas.

En este sentido, en Estados Unidos se ha implementado el sistema de reconocimiento de víctimas de trata de personas en diversas líneas aéreas. Así, las azafatas están capacitadas para reconocer situaciones anómalas que presentan rasgos típicos de trata de personas. Detectada esta situación, se comunica al piloto y luego se transmite a las fuerzas de seguridad en el lugar de destino.

En términos monetarios, luego del tráfico de drogas, la trata de personas representa el comercio ilegal más lucrativo del mundo, generando alrededor de 32 billones de dólares anuales. Se trafican más de 2 millones de mujeres y niños por año.

Según las estadísticas que maneja la ONG La Casa del Encuentro, una mujer adulta deja mil dólares por mes a cada proxeneta; si la mujer es menor, la cantidad se duplica, y si es virgen, la cantidad se multiplica por cinco. Las cifras son aberrantes y grotescas, mostrándonos sin duda el carácter de urgente que revisten las políticas gubernamentales para combatir y principalmente, prevenir, esta forma moderna de esclavitud.

Cabe recordar que la Argentina se ha comprometido a nivel internacional mediante el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas a: "...prevenir y combatir eficazmente la trata de personas...", y a "...proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre los Estados partes para lograr esos fines...".

Concretamente, la sección (III) sobre "Medidas de prevención, cooperación y otras medidas" del Protocolo mencionado establece que los Estados signatarios "...establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a: prevenir y combatir la trata de personas". Así, "...los Estados partes procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas".

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares aprobar el presente proyecto de ley.

Liliana T. Negre de Alonso.

V

(S.-1.514/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.364, por el siguiente:

Artículo 2º: Se entiende por trata de personas, el ofrecimiento, la captación, el transporte, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, tanto si son realizadas dentro del país, en una o varias jurisdicciones, o desde o hacia otros países.

El consentimiento dado por la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa.

La captación, el transporte, el traslado o la recepción de un niño con fines de explotación será considerado “trata de personas”. Por niño se entiende toda persona menor de 18 años.

Art. 2º – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.

Art. 3º – Incorpórase como artículo 3º de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 3º: En la aplicación e interpretación de esta ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:

1. *Gratuidad de los procedimientos.* No se abonarán tasas ni contribuciones en la interposición de las acciones previstas en esta ley.
2. *Celeridad.* Los órganos receptores de denuncias y los juzgados y/o tribunales competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta ley.
3. *Inmediación.* Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su convencimiento.
4. *Confidencialidad.* Los órganos receptores de denuncias y los funcionarios de los tribunales competentes deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de la víctima de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Art. 4º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 26.364, por el siguiente:

Tampoco le serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria.

Art. 5º – Derógase el artículo 8º de la ley 26.364.

Art. 6º – Modifícase el inciso f) del artículo 6º de la ley 26.364, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

f): La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física, psicológica y su atención médica integral.

Art. 7º – Incorpórese el inciso 5 al artículo 145 ter del Código Penal, según el siguiente texto:

5. El funcionario público que facilitare la comisión del delito de trata de personas cuando dejare de hacer algo relativo a sus funciones.

Art. 8º – Incorpórense a continuación del artículo 17 de la ley 26.364, y como título IV, V y VI, los siguientes:

TÍTULO IV

Programa Nacional de Capacitación y Especialización de los Funcionarios y Agentes Públicos para la Detección y Lucha contra la Trata de Personas

Artículo ...: Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Programa Nacional de Capacitación y Especialización de los Funcionarios y Agentes Públicos para la Detección y Lucha contra la Trata de Personas protegidas por esta ley.

Artículo ...: *Fines.* Serán los fines de este programa.

- a) Formular, ejecutar e instrumentar los programas de capacitación y especialización para la detección y lucha contra la trata de personas a ser implementados por los diferentes órganos del Poder Ejecutivo nacional;
- b) Coordinar en el ámbito estatal el programa mencionado en el inciso a);
- c) Diseñar juntamente con el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Trabajo y las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que adhieran a la presente –, los planes de capacitación de los funcionarios y agentes pertenecientes a sus áreas competentes;
- d) Establecer las pautas de los mensajes y programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva destinados a la toma de conciencia sobre la problemática

de la trata de personas teniendo como principios informar, sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género y de los derechos humanos, sobre los conceptos fundamentales de la trata de personas y los acuerdos e instrumentos internacionales relacionados con ella;

- e) Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación entre organismos e instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la detección y protección de las víctimas de la trata de personas;
- f) Promover la participación activa de las organizaciones educativas públicas o privadas en la difusión de las políticas y programas de capacitación en la materia.

Incorpórase como título V de la ley 26.364, el siguiente;

TÍTULO V

Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Artículo...: Créase –en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas.

Artículo...: *Objetivos*. Son objetivos del programa.

- a) Prevenir y combatir la trata de personas;
- b) Formular las políticas públicas para asegurar la protección y el cuidado a las víctimas; garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de la trata de personas;
- c) Asegurar la protección a las víctimas a través de la implementación de servicios integrales, accesibles y gratuitos para la asistencia médica, psicológica, social y jurídica;
- d) Elaborar protocolos de trabajos interinstitucionales y federales con el objetivo de brindar una asistencia adecuada a las víctimas de la trata de personas, mejorar la detección y persecución de las redes de tráfico y optimizar los recursos disponibles;
- e) Promover la coordinación intersectorial para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la reinserción social de las personas que sufren sus efectos;
- f) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades

migratorias y policías de otros países. Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para asistir a las víctimas, prever la trata, enjuiciar a los traficantes y asistir en la repatriación y reubicación de las víctimas de la trata de personas.

Los objetivos mencionados en los incisos a), b), c), d), e) y f) se implementarán mediante el suministro:

- 1. Alojamiento adecuado.
- 2. Asesoramiento e información con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma en que las víctimas de la trata de personas puedan comprender.
- 3. Asistencia médica, psicológica.
- 4. Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
- 5. Toda otra asistencia formal y material necesaria según la complejidad del caso.

TÍTULO VI

De las organizaciones no gubernamentales

Artículo...: *Objeto*. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no gubernamentales para la lucha contra la trata de personas, su protección y asistencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las víctimas de la trata de personas.

Artículo...: *Obligaciones*. Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley deberán observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las víctimas protegidas por esta ley;
- b) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
- c) Mantener constantemente informadas a las víctimas sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca;
- d) Brindar a las víctimas atención personalizada;
- e) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación;
- f) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación de los gastos realizados, clasificados según su naturaleza;

de las actividades desarrolladas descritas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que serán cubiertos. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Artículo Registro de las organizaciones no gubernamentales. Crease en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Registro Nacional de organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las víctimas de la trata de personas.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar un sistema de registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la autoridad de aplicación.

Art. 9º – Incorpórase como inciso g) del artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) el siguiente:

g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los tribunales colegiados, de casación de segunda instancia, de instancia única y ante los jueces de primera instancia.

Art. 10. – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.946, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º: El procurador general de la Nación y el Defensor General de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) y g) de los artículos 3º y los incisos a), b), c), d) y f) 4º, el procurador general de la Nación o el Defensor General de la Nación, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Art. 11. – Incorpórase el artículo 7º de la ley 24.946, como último párrafo, el siguiente texto:

Para presentarse a concurso para fiscal en causas sobre secuestros extorsivos o trata de personas, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener cinco (5) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento por igual término de funciones en

el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias con por lo menos cinco (5) años de antigüedad en el título de abogado con especialidad en derecho internacional público en general y derechos humanos en particular.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 42 bis de la ley 24.946, el siguiente texto:

Artículo 42 bis: Los fiscales de causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los tribunales colegiados, de casación de segunda instancia, de instancia única y ante los jueces de primera instancia nacionales tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales de secuestros extorsivos o trata de personas, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación general y especial en la materia;
- b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
- c) Intervenir en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios relacionados con la legislación sobre secuestros extorsivos o trata de personas y sustituir a todo fiscal sin competencia en la materia.

Art. 13. – Modifíquese el artículo 18 de la ley 26.364, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 18: El presupuesto general de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Además los programas creados por esta ley se podrán cofinanciar con los recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios de organismos nacionales o internacionales, de asistencia técnica y cooperación.

Los decomisos ordenados y efectuados por aplicación de esta ley tendrán como destino único el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas.

Art. 14. – Autorízase a la reenumeración del articulado de la ley 26.364.

Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 16. – Invítase a las provincias a adherir a la presente norma.

Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La realidad cotidiana demuestra que, por mucho que se empeñe la legislación en frenar el aumento de las actividades criminales de los grupos organizados, en particular en cuanto al tráfico de personas con fines de explotación, lleva a difíciles enfrentamientos y retos no siempre con los resultados buscados.

De ello da cuenta explícita y clara la cantidad de mujeres secuestradas en la Argentina por redes de trata de personas, llegando a 600 durante el transcurso de 2009.

También es claro y contundente el duro informe sobre el tema, presentado en Ginebra por la doctora Joy Ezeilo, relatora especial de ONU sobre tráfico y trata de personas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el cual remarca 10 señalamientos a destacar sobre la situación de nuestro país:

- Que aumentó la trata laboral y sexual.
- Que la Argentina claramente se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.
- Que es alarmante la impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y horribles los abusos a las víctimas.
- Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales del Estado y que se destinan “pocos recursos” a esa labor.
- Que hay una inadecuada protección tanto para las víctimas como las personas e instituciones involucradas en ofrecerles asistencia y apoyo.
- Que aumentó la trata de niños, especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa.
- Que las inspecciones laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también aumentó, pero está “mucho más oculta” que la sexual.
- Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas con este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes”.

–Le aconsejó al gobierno aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en la Argentina, en especial Bolivia, Paraguay y República Dominicana.

–También le aconsejó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que aplique una política de “tolerancia cero” a la corrupción, para asegurar que cualquier agente involucrado en el crimen de la trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigado.

De este duro informe se desprende con meridiana claridad que debemos dirigir nuestras acciones a:

1. Capacitar y especializar a los funcionarios y agentes públicos para la detección y lucha contra la trata de personas.

Por ello proponemos, por esta norma, la creación –en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– de un programa nacional de capacitación y especialización en la materia que nos ocupa. Tendrá como fines formular, ejecutar, instrumentar y coordinar en el ámbito estatal los planes de capacitación de los funcionarios y agentes pertenecientes a sus áreas competentes, juntamente con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo y las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la presente norma.

Así también, establecerá las pautas de los mensajes y programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva; promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación entre organismos, instituciones, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la detección y protección de las víctimas de trata de personas y promoverá la participación activa de la sociedad civil en la difusión de las políticas y programas de capacitación en la materia.

2. Prevenir y asistir a las víctimas de la trata de personas.

Para lograr este objetivo proponemos la creación –en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, para prevenir y combatir la trata de personas a través de la formulación de políticas públicas; asegurar la protección de las víctimas; elaborar protocolos interinstitucionales y federales para una mejor asistencia; promover la coordinación intersectorial para implementar acciones destinadas a la prevención, asistencia y reinserción social de las personas que sufren los efectos de la trata de personas y promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades migratorias y policiales de otros países.

3. Incorporar a las organizaciones no gubernamentales para que pueda supervisar la acción del Estado en la materia y se les brinde información oportuna y completa que permita asistir a las víctimas rescatadas, antes que sean devueltas a sus lugares de origen. Para ello incluimos el título IV donde definimos qué consideramos organización no gubernamental a los efectos de esta norma; determinamos sus obligaciones y creamos el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia, Promoción, Tratamiento, Protección y Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Trata de Personas –en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –, invitando a las provincias a seguir el mismo camino.

4. Conformar un cuerpo de fiscales especiales, capacitados y formados para la investigación, seguimiento y pedido de condena para los culpables, para lo cual incorporamos como inciso g) del artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946, el siguiente:

“g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única y ante los jueces de primera instancia.” Se determina, asimismo su competencia, condiciones de idoneidad y elección.

5. Agravar las penas de los funcionarios y servidores públicos que por negligencia u omisión permitan la comisión de los delitos penados por la ley 26.364.

6. Disponer la creación de un fondo especial contra la trata de personas que administre los bienes incautados y los destine exclusivamente a la asistencia y reinserción social de las víctimas de acuerdo con lo expuesto en nuestro artículo 14.

Estos objetivos va acompañados de una redefinición de lo que entendemos por trata de personas a efectos de no efectuar diferencias entre menores y mayores de edad, adaptándola a las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por la Argentina, especialmente las referidas a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y la explotación de la prostitución ajena. Todo ello para evitar distinciones artificiales que terminan generando problemas de competencia, dilaciones y obstaculizando las investigaciones.

Porque la trata de personas ha puesto en evidencia la dificultad que tienen las instituciones para visibilizar esta problemática y porque esta lucha demanda el desarrollo de nuevas destrezas de investigación, organización y capacitación especializada en este tipo de delitos, es que ponemos, este proyecto, a consideración de nuestros pares y solicitamos que nos acompañen con su voto.

Juan C. Romero.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

- a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
- b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
- c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;
- d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;
- e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;
- f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

Art. 2º – Deróganse los artículos 3º y 4º de la ley 26.364.

Art. 3º – Sustitúyese la denominación del título II de la ley 26.364 por la siguiente:

TÍTULO II

Garantías Mínimas para el Ejercicio de los Derechos de las Víctimas

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 6º: El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes:

- a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan;

- b) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social;
- c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal;
- d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;
- e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias;
- f) Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la ley 25.764;
- g) Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165;
- h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo;
- i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
- j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
- k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
- l) A la protección de su identidad e intimidad;
- m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;
- n) En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrá ser sometida a careos. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 9°: Cuando la víctima del delito de trata o explotación de personas en el exterior

del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante las autoridades locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos representantes arbitrarán los medios necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación.

Art. 6° – Sustitúyese el Título IV de la ley 26.364 por el siguiente:

TÍTULO IV

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.364 por el siguiente:

“Artículo 18: Créase el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que contará con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
2. Un representante del Ministerio de Seguridad;
3. Un representante del Ministerio del Interior;
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social;
6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del pleno;
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del pleno;
9. Un representante del Poder Judicial de la Nación, a ser designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

10. Un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
11. Un representante del Ministerio Público Fiscal;
12. Un representante del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
13. Un representante del Consejo Nacional de las Mujeres;
14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley;

El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 19: Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con actividad específica en el tema, que acrediten personería jurídica vigente y una existencia no menor a tres años.

La reglamentación dispondrá el modo en que, de manera rotativa y por períodos iguales no superiores a un año, las organizaciones inscriptas integrarán el Consejo Federal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 20: El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene las siguientes funciones:

- a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes;
- b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; y, en general, participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas;
- c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las

víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

- d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo creado en el título V de la presente ley;
- e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el Comité Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área solicitándole toda información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
- f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;
- g) Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
- h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo de sus autores y asistir a las víctimas;
- i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscripto la República, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia;
- j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia en el tema;
- k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el Comité Ejecutivo;
- l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros.

La Defensoría del Pueblo de la Nación será el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos por el Consejo Federal.

Art. 10. – Incorpórase como título V de ley 26.634, el siguiente:

TÍTULO V

Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Art. 11. – Incorpórase como artículo 21 de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 21: Créase el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Seguridad;
2. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social;
4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 22 de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 22: El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene a su cargo la ejecución de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas:

- a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias;
- b) Desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación;
- c) Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios de atención integral gratuita (médica, psicológica, social, jurídica, entre otros);
- d) Generar actividades que coadyuven en la capacitación y asistencia para la búsqueda y obtención de oportunidades laborales, juntamente con los organismos pertinentes;

- e) Prever e impedir cualquier forma de revictimización de las víctimas de trata y explotación de personas y sus familias;
- f) Llevar adelante un registro nacional de datos vinculados con los delitos de trata y explotación de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. A tal fin se deberá relevar periódicamente toda la información que pueda ser útil para combatir estos delitos y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la remisión de los datos requeridos a los fines de su incorporación en el registro;
- g) Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de los delitos de trata y explotación de personas, desde las directrices impuestas por el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y las cuestiones específicas de la niñez y adolescencia;
- h) Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y explotación de personas y desarrollar materiales para la formación docente inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación;
- i) Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para la prevención y asistencia a las víctimas, aportando o garantizando la vivienda indispensable para asistirlas conforme lo normado en la presente ley;
- j) Capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr la mayor profesionalización;
- k) Coordinar con las instituciones, públicas o privadas, que brinden formación o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación de cabina de aeronaves o de medios de transporte terrestre, internacional o de cabotaje, un programa de entrenamiento obligatorio específicamente orientado a advertir entre los pasajeros posibles víctimas del delito de trata de personas;
- l) Coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de

Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Realizar en todo el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del sistema y el número para realizar denuncias.

El Comité Ejecutivo elaborará cada dos (2) años un plan de trabajo que deberá ser presentado ante el Consejo Federal para su aprobación. Deberá también elaborar y presentar anualmente ante el Consejo Federal informes sobre su actuación a los fines de que éste pueda ejercer sus facultades de supervisión. Estos informes serán públicos.

A los fines de hacer efectiva la ejecución del Programa, el Comité Ejecutivo coordinará su accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales e internacionales.

Art. 13. – Incorpórase como título VI de la ley 26.364 el siguiente:

TÍTULO VI

Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas

Art. 14. – Incorpórase como artículo 23 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 23: Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.

Art. 15. – Incorpórase como artículo 24 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 24: A fin de implementar el sistema mencionado en el artículo anterior, asígnasele el número telefónico ciento cuarenta y cinco (145), uniforme en todo el territorio nacional, que funcionará en forma permanente durante las veinticuatro horas del día a fin de receptor denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. Las llamadas telefónicas entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.

Asimismo, se garantizará el soporte técnico para desarrollar e implementar el servicio de mensajes de texto o SMS (Short Message Service) al número indicado, para receptor las denuncias, los que serán sin cargo.

Art. 16. – Incorpórase como artículo 25 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 25: El Ministerio Público Fiscal conservará un archivo con los registros de las llamadas telefónicas y de los mensajes de texto

o SMS (Short Message Service) identificados electrónicamente, los que serán mantenidos por un término no menor a diez (10) años, a fin de contar con una base de consulta de datos para facilitar la investigación de los delitos de trata y explotación de personas.

Art. 17. – Incorpórase como artículo 26 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 26: Las denuncias podrán ser anónimas. En caso de que el denunciante se identifique, la identidad de esta persona será reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.

Art. 18. – Incorpórase como título VII de la ley 26.364 el siguiente:

TÍTULO VII

Disposiciones finales

Art. 19. – Incorpórase como artículo 27 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Art. 20. – Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 23 del Código Penal por el siguiente:

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 125 bis: El que promoviére o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

Art. 22. – Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal por el siguiente:

“Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima;
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.

Art. 23. – Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 127: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediar el consentimiento de la víctima.

La pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima;
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.

Art. 24. – Sustitúyese el artículo 140 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.

Art. 25. – Sustitúyese el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediar el consentimiento de la víctima.

Art. 26. – Sustitúyese el artículo 145 ter del Código Penal por el siguiente:

Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando:

1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta años;
3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma;
4. Las víctimas fueren tres o más;
5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas;
6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima;
7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando se lograra consumir la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.

Art. 27. – Incorpórase como artículo 250 quáter del Código Procesal Penal el siguiente:

Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una Sala Gesell, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado los actos serán desarrollados con control judicial, previa notificación al defensor público oficial.

Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

Art. 28. – Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de su promulgación.

Art. 29. – El Poder Ejecutivo dictará el texto ordenado de la ley 26.364, de conformidad a lo previsto en la ley 20.004.

Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

75

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley del señor senador Mestre (S.-3.370/10), modificando la ley 22.117 respecto

de la creación del Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual; el proyecto de ley del señor senador Pichetto (S.-3.465/10), creando un Registro Especial para Delitos de Abuso Sexual y otras cuestiones conexas; y el proyecto de ley de la señora senadora Escudero (S.-362/11), creando el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual; el proyecto de ley del señor senador Pichetto (S.-1.315/11), creando el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales; y, teniendo a la vista el proyecto de ley del señor senador Romero (S.-1.867/11), creando el Registro Nacional de Identificación de Abusadores Sexuales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el artículo 2º de la presente ley.

Asimismo, respecto de toda persona condenada se consignará:

- a) Nombres y apellidos, en caso de poseerlos se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres;
- b) Fotografía actualizada;
- c) Fecha y lugar de nacimiento;
- d) Nacionalidad;
- e) Número de documento de identidad y autoridad que lo expidió;
- f) Domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.

Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporte sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

Art. 5° – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el registro.

Art. 6° – El registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los delitos previstos en el artículo 2°, en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de su investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.

Art. 7° – Las constancias obrantes en el registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley.

Art. 8° – Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.

Art. 9° – El registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas.

Art. 10. – La información obrante en el registro sólo será dada de baja transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial. No rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el artículo 51 del Código Penal.

Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley.

Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código Penal.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.

*Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Marina R. Riofrío. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli. – César A. Gioja. – Ernesto R.
Sanz. – Adriana R. Bortolozzi de Bogado.*

ANTECEDENTES

I

(S.-3.370/10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Créase el Registro Especial de delitos contra la Integridad Sexual, el que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y funcionará en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia.

Art. 2° – Modificase el artículo 1° de la ley 22.117, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1°: El Registro Nacional de Reincidencia Criminal creado por ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme al régimen que regula esta ley.

La información respecto de los procesos penales por delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal se consignará además en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual.

Los datos contenidos en el registro especial una vez ingresados serán comunicados inmediatamente a la Policía Federal y a las jefaturas de las policías provinciales; y a los organismos judiciales nacionales y provinciales juntamente con la información prevista en el artículo 6° de esta ley y en los términos y condiciones que prevé dicha norma.

Art. 3° – Modificase el artículo 6° de la ley 22.117, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°: Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante y en los casos de los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV la fotografía de frente y perfil, y el registro de ADN, si existiere, indicándose en todos los casos las siguientes circunstancias:

- a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
- b) Tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y números de causas correspondientes;
- c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos o sobrenombres;
- d) Lugar y fecha de nacimiento;
- e) Nacionalidad;
- f) Estado civil, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge;

- g) Domicilio o residencia;
- h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
- i) Números de documentos de identidad y autoridades que lo expidieron;
- j) Nombres y apellidos de los padres;
- k) Números de prontuarios;
- l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
- m) Fecha y lugar en que se cometió el hecho, nombre del damnificado, y fecha de iniciación del proceso;
- n) Calificación legal del hecho.

Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 22.117, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 7º: Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas y cuando correspondiere las fotografías y el registro de ADN, recibidas de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y 11, integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del registro.

Los legajos sólo serán dados de baja en los siguientes casos:

- a) Por fallecimiento del causante;
- b) Por haber transcurrido cien (100) años desde la fecha de nacimiento del mismo.

Art. 5º – Los datos contenidos en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual estarán sometidos a las mismas condiciones de información previstas en el artículo 8º de la ley 22.117. No obstante ello, cuando el pedido de informe sea efectuado por cualquier persona mayor de edad, sea por derecho propio acreditando interés legítimo, o en representación legal de institutos educativos públicos o privados; establecimientos relacionados con el cuidado de menores; establecimientos relacionados con el cuidado de personas con capacidades diferentes; establecimientos recreativos de menores o personas con capacidades diferentes; empresas unipersonales o sociedades dedicadas a la prestación de servicios vinculados con los menores; instituciones públicas o privadas dedicadas al cuidado de personas maltratadas; organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de menores, de personas con capacidades diferentes o personas maltratadas; y/o de entidades de derecho público o privado que acredite vinculación directa o indirecta con los sujetos antes mencionados, la Policía Federal, las policías provinciales o el propio registro especial estarán habilitados a evacuar el pedido, sólo cuando la información se refiera a personas con condena firme, en la forma y bajo el procedimiento que determine la reglamentación, previa actualización a la fecha del informe de los datos obrantes en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual.

Art. 6º – Las personas autorizadas por el artículo precedente para solicitar información al Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual deberán hacerlo en la forma y bajo el procedimiento que establezca la reglamentación, sin perjuicio de lo cual, siempre deberá ser por escrito y garantizando que la información sólo podrá ser utilizada para preservar su seguridad y protección, la de su familia, o las de las personas que están bajo su custodia o cuidado; imponiéndoles expresamente de la responsabilidad penal prevista en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 7º – El Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual contará además con un sitio web en el que se podrá acceder a las fotografías únicamente de los procesados o condenados por delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV. En el sitio no se podrá incluir ningún otro dato personal de los encausados.

La configuración del sitio web y su acceso serán materia de reglamentación, la que determinará los requisitos y condiciones, debiendo regular los siguientes aspectos:

- a) El sistema o procedimiento para acceder al sitio deberá garantizar de manera fidedigna la identidad completa del usuario a través de un mecanismo de validación de datos y autorización de acceso;
- b) Que la información sea brindada a los fines preventivos contemplados en la presente ley;
- c) El sistema no permitirá la impresión de la pantalla con la fotografía del encausado;
- d) El acceso al “sitio” deberá autorizarse por un tiempo limitado por cada usuario;
- e) Todo otro aspecto que tienda a preservar el correcto uso del “sitio” y evitar perjuicios a terceros.

Art. 8º – La presente ley se considerará complementaria de la ley 22.117 y del Código Penal Argentino.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón J. Mestre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto de ley que propongo no regula una cuestión novedosa y menos aún extraña a las discusiones y debates que en el seno de este Honorable Senado se suscitaron con motivo de iniciativas similares a ésta. Para el caso vale citar los proyectos presentados por el senador Pichetto (4.836-D.-98, 1.341-D.-00, 185-S.-02, 645-S.-03 y 4.081/05), o por el senador Rodríguez Saá (4.040/06), o el proyecto elevado a este Senado por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 16 de marzo de 2009, todos relacionados con la materia que nos ocupa y cuyos fundamentos en general comparto,

solicitando que se los considere reproducidos en esta propuesta en orden a evitar reiteraciones innecesarias.

En efecto, el avance en todos los estratos sociales de los delitos contra la integridad sexual, como bien lo señaló el senador Pichetto en los fundamentos de los proyectos precitados: “El abuso sexual no es, necesariamente, producto de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades fundamentales”, y en particular la repercusión que produce en toda la comunidad cuando la víctima resulta ser un menor o persona con capacidades diferentes; a lo que suma el epílogo fatal en el que terminan muchas veces los hechos precedidos por la consumación de los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal, han movilizado a los legisladores e inclusive a organización no gubernamentales (ONG) a imaginar nuevas respuestas por parte del Estado a estas conductas ilícitas a través de una legislación que efectivamente pueda convertirse en un instrumento disuasivo de tales acciones. Estas razones fueron, en parte, fundamento de la reforma del Código Penal en lo que a delitos sexuales se refiere, de cuyo debate surgió el actual esquema típico penal de las figuras ilícitas vinculadas con la integridad sexual de las personas, como bien jurídico protegido.

En esta ocasión, mi propuesta apunta fundamentalmente a legislar un instrumento legal que fortalezca la instancia de prevención de estos delitos, a partir de una adecuada sistematización de la información relacionada con los hechos y las personas vinculadas a su consumación, y me refiero con ello a la información relacionada con los autores de los delitos contra la integridad sexual, a partir del acceso a ella, de modo controlado y regulado, por parte de la sociedad en general y, en concreto, de los responsables de la integridad física y moral de los sujetos mencionados en el artículo 5° del proyecto que elevo a vuestra consideración.

Justamente por ello de la vocación preventiva que impregna esta iniciativa no he introducido en el proyecto modificaciones a las leyes de fondo, en especial a las normas del Código Penal, como sí lo han hecho los proyectos oportunamente elevados por mis pares y a los que me referí precedentemente.

El objetivo de la ley que propugno es brindar a los ciudadanos, previa la acreditación de la legitimidad en el pedido, la posibilidad de acceder a la información vinculada a los autores de los delitos catalogados como delitos contra la integridad sexual, y de ese modo tomar, en su caso, las prevenciones que estimen prudentes para evitar hechos esta naturaleza. La información en cuestión es vital para aquellos que deben velar por la salud e integridad física de los menores, pues a partir de ella es posible arbitrar medios de prevención y en particular escenarios que faciliten la comisión de estos repudiables crímenes.

Es cierto que el acceso al público de información sensible de las personas, como puede ser el de revestir la calidad de procesado o condenado por delitos contra

la integridad sexual, puede malentenderse como lesiva a garantías constitucionales como la del principio de inocencia o el debido (artículo 18 CN). En este entendimiento el artículo 8° de la ley 22.117, que regula el Registro Nacional de Reincidencia, establece: “El registro será reservado...”. Es por ello, que tal como se legisla en el proyecto, el acceso a la información deberá concretarse bajo determinadas condiciones y requisitos que garanticen la correcta utilización preventiva de la información obrante en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual, advirtiendo inclusive de las penalidades para aquellos que mal utilicen o desvíen dicha información.

Al respecto, no podemos dejar de mencionar que los derechos y garantías constitucionales no sólo garantizan a la persona sometida al proceso la efectiva vigencia de reglas de actuación en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado que permitan el oportuno y tempestivo ejercicio del derecho de defensa, sino que además, a partir de la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional en la reforma de la Carta Magna del año 1994 (artículo 75, inciso 22), la víctima también debe ser entendida como un verdadero sujeto protegido por las disposiciones constitucionales y de modo primordial cuando se trata de menores, para lo cual la Convención sobre los Derechos del Niño impone de modo claro la necesidad de adoptar normas que protejan a éstos de cualquier forma de actividad delictiva.

Entiendo, por otro lado, que, por vía legal y siempre dando los fundamentos y garantías del caso, la publicidad de determinada información personal de orden procesal, siempre que obedezca a fin superior no refracta con norma constitucional alguna; de hecho, en la actualidad normas como el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario, 11.683, autorizan la publicidad de los datos personales de aquellas personas que se encuentren imputados en procesos penales por alguno de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, 24.769. Me pregunto, entonces, si, tal como se ha hecho en materia de legislación impositiva, se autoriza la publicidad de los datos de las personas vinculadas con los delitos tributarios, aun cuando revisten la simple calidad de imputados, que reparo puede merecer una norma como la propuesta que, inclusive, restringe la información para los casos de condena en la modalidad prevista en el artículo 5° del proyecto, y de procesamiento y condena en la modalidad de información prevista en el artículo 7° del proyecto.

La necesidad de articular instrumentos legales que pongan el acento en la prevención de los delitos, y en particular de los denominados delitos contra la integridad sexual, justifica suficientemente la iniciativa que pongo a consideración de mis pares, y por ello les solicito que acompañen el presente proyecto de ley.

Ramón J. Mestre.

II

(S.-3.465/10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar la debida protección de la vida, la integridad personal, los derechos del niño y las garantías judiciales que, como derechos humanos, son consagrados por la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.

Art. 2º – Modificase el artículo 1º de la ley 22.117, como sigue:

Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia creado por ley 11.752, funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción conforme al régimen de la presente ley.

En forma independiente, el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro especial que, con la naturaleza de una medida de seguridad destinada a la protección de las personas, se integrará con los datos personales de los condenados por los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal, a cuyo efecto, las previsiones contenidas en el artículo 6º de la presente ley, se complementarán, además, con las correspondientes fotografías, registros de ADN, y constancia de niveles de riesgo en la reincidencia del delito.

Los datos obrantes en dicho registro especial serán comunicados a la Policía Federal y/o a las policías provinciales, y/o a las instituciones que correspondan, conforme las siguientes pautas:

–Nivel I. Bajo riesgo de reincidencia en el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada.

–Nivel II. Riesgo moderado de reincidencia en el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada. A las escuelas y asociaciones de carácter civil, legalmente conformadas, encargadas del cuidado de niños y mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada.

–Nivel III. Alto riesgo de reincidencia en el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada. A las escuelas y asociaciones de carácter civil, legalmente conformadas, encargadas del cuidado de niños y mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada, y a las autoridades policiales, escuelas y asociaciones civiles de tal naturaleza, en una zona cercana a la

ciudad donde vive, trabaja y lo estudia la persona registrada.

Art. 3º – No obstante, la sola presentación de cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente, o de los representantes legales de escuelas y/o instituciones o establecimientos relacionados con el cuidado de niños y/o personas maltratadas; establecimientos recreativos, o aquellos a los que por su naturaleza pueda resultarles de interés, habilitará a cualquier seccional de la Policía Federal Argentina o de las policías provinciales, para solicitar a dicho registro especial, en forma directa y por el procedimiento que determine la reglamentación, información acerca de si determinada persona se encuentra o no incluida en el mismo y el delito por el que ha sido condenado, debiendo salvaguardarse la identidad de la víctima.

El interesado solicitará la información por escrito y bajo declaración jurada que la misma estará sólo destinada a su protección y la de su familia, o a la protección de las personas a su cargo o bajo su cuidado, debiendo imponérselo en forma fehaciente, de la prohibición de divulgación del dato, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en el artículo 239 del Código Penal.

El informe deberá ser evacuado, por escrito, en el término de veinticuatro (24) horas.

Art. 4º – Complementariamente, las fotografías a las que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 2º, se destinarán a un sitio creado especialmente en Internet por el Registro Nacional de Reincidencia, para su consulta por parte de la ciudadanía, sitio que será considerado de interés público, a tenor de su función preventiva. El sitio no hará alusión a dato personal alguno.

Art. 5º – Modificase el artículo 3º de la ley 22.117, al que se agregará el siguiente párrafo:

Artículo 3º: El plazo será de dos (2) días cuando se trate de un condenado por delito sexual contra menores de edad.

Art. 6º – En aquellos hechos en que la naturaleza del delito sexual o las circunstancias violentas con que se hubiere cometido así lo justifiquen, los jueces y tribunales de todo el país, previo informe de una junta especializada en la materia, integrada por peritos médicos y abogados y por los representantes del Ministerio Público, podrán declarar al condenado “agresor sexualmente violento”, y ordenar que esta circunstancia, junto a aquellas de su historial delictivo que los magistrados estimen conveniente, sean también inscriptas en dicho registro especial.

La circunstancia de tratarse de un “agresor sexualmente violento”, en caso de existir, deberá también informarse conforme lo previsto en el artículo 2º y en el acto de evacuarse la consulta y formando parte del resultado de la misma, en el caso del artículo 3º.

Art. 7º – Incorpórase como artículo 13 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las reglas de la ejecución condicional, el condenado por los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá cumplir, por un plazo que nunca podrá exceder de diez (10) años, a contar desde el día de su libertad, con aquellas reglas de conducta establecidas en los artículos 13 y 27 bis que le sean impuestas y notificadas fehacientemente en ocasión de obtener la misma. El liberado deberá asumir, además, el compromiso de notificar cada cambio de domicilio al tribunal interviniente y a las autoridades policiales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido dicho cambio, así como también el de registrarse mensualmente ante las autoridades policiales del lugar de su nueva residencia, todo bajo apercibimiento de considerársele incurso en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del presente código.

Art. 8º – Agrégase como inciso 6 del artículo 13 del Código Penal, el siguiente:

6. Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

Art. 9º – Incorpórase como artículo 147 bis de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad, el siguiente:

Artículo 147 bis: A los efectos del artículo anterior, en aquellos supuestos de delitos contra la integridad sexual, el interno podrá acceder a programas de rehabilitación y tratamiento, especializados y adecuados en tiempo y forma a la evolución de su trayectoria penitenciaria, que estarán siempre a disposición del mismo y que deberán prever su intensificación, en los momentos de cercanía a las excarcelaciones.

Dichos programas contemplarán diferentes niveles, acordes con el riesgo de reincidencia en el delito del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control, valoración de los aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos, métodos de control de potenciales conductas agresivas y estrategias para evitar aquel riesgo de reincidencia, y en técnicas de modificación de conductas, evaluándose en cada caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos.

La no participación del interno, en forma voluntaria, en dichos programas, será tenida en cuenta por los jueces para el otorgamiento de cualquiera de los beneficios de morigeración de la pena previstos en esta ley, otorgamiento que, conforme

las reglas del presente artículo, deberá sustentarse en el concepto de que gozará el interno, sin que pueda recurrirse en forma exclusiva a criterios de buena conducta.

Art. 10. – Modifícase el artículo 11, inciso p), de la Ley Nacional de Educación, 26.206, el que quedará redactado como sigue:

- p) Brindar conocimiento y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable. En especial, y en función de la protección y cuidados que derivan del interés superior a que alude la Convención sobre los Derechos del Niño, los planes de enseñanza en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial, sean de gestión pública o privada, deberán contener en forma obligatoria y específica, toda aquella información y criterios que conduzcan a niños, niñas y adolescentes a evitar ser víctimas de abuso sexual.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel Á. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente es reproducción de mi iniciativa S.-4.159/08, cuyos fundamentos paso a transcribir, constituyéndose en otro planteamiento más de esta problemática: “Esta iniciativa es reproducción de los siguientes proyectos de mi autoría: 4.836-D.-98; 1.341-D.-00; 185-S.-02; 645-S.-03, y 4.081-S.-05.

Este último proyecto ha receptado la letra de aquello que, como momento más cercano en el tiempo, se constituyó en casi un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este Senado, fruto de un principio de acuerdo sobre esta materia.

No obstante, es dable aclarar, que la evolución de la problemática del abuso sexual en nuestro país viene siendo de tal magnitud y relevancia, que he debido reconsiderar si su solución es sólo del ámbito del derecho penal, o tiene una esencia más profunda, como lo es la protección de los derechos humanos y de las garantías de víctimas y victimarios, reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

En esa inteligencia, vuelvo sobre esta temática, para que pueda seguir profundizándose su estudio a nivel legislativo, en relación a todos y cada uno de los aspectos que ella involucra.

Por lo demás, paso a reproducir aquellos fundamentos que hacen a la esencia de todos esos proyectos, y que contienen mi posición, incluso, artículos periodísticos mediante.

“Esta presentación es reproducción del proyecto [...] de mi autoría, con algunas modificaciones que permiten

un agregado que viene a enriquecer la iniciativa: la posibilidad de que la ciudadanía pueda estar debidamente informada acerca de aquellos que han sido condenados por delitos de carácter sexual, a través de la publicación de sus fotografías en un sitio, creado especialmente al efecto por el Registro Nacional de Reincidencia, en Internet, como complemento del registro especial por delitos contra la integridad sexual, que deberá llevar adelante.

La medida ya está siendo implementada en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que su más alto tribunal ha decidido que la difusión de esas fotografías no significa una doble condena para los abusadores; no es una medida punitiva, ni tiene como propósito su humillación, tendiendo, en cambio, a informar al público por su seguridad, en función del interés de la ciudadanía en tener bajo vigilancia a quienes pueden cometer otros delitos de estas características.

El matutino *Clarín* se ha hecho eco de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a través del artículo periodístico aparecido en fecha 9 de marzo del corriente año.

En consecuencia, y con este importante agregado, transcribo a continuación los fundamentos originales del proyecto, que indican su esencia, en forma acabada:

“Una madre desconsolada luego de que violaran y asesinaran a su hija, dijo: ‘Si hubiera sabido que en la vereda de enfrente vivía un violador hubiera tomado medidas de seguridad’.

El caso es real y sucedió en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 29 de julio de 1994. En esa oportunidad Jesse Timmendequas asesinó a Megan Kanka, de siete años de edad, luego de violarla. Después de estrangularla, tiró su ropa a la basura y su cuerpo fue hallado en un bosque solitario de la localidad.

El violador y asesino fue condenado a muerte. Nadie había advertido que el nuevo vecino de Megan era un convicto por delitos sexuales contra menores, reincidente, además, en dos oportunidades.

Nosotros no somos ajenos a este tipo de hechos. Baste con citar el caso de Micaela Ávila, quien desapareció de la puerta de su casa, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el 14 de febrero de 1998. Wenceslao Escudero, un hombre de 53 años, había pasado veinticinco de ellos en la cárcel, por delitos sexuales cometidos contra menores.

Me encuentro desde ese mismo año, señor presidente, luchando sin pausa, por la sanción de una ley como la que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este Senado de la Nación.

Y actuó en el convencimiento que estas tragedias pueden ser evitadas.

En esa inteligencia, mi responsabilidad como legislador me indica que debo continuar en el esfuerzo, legislando para prevenir.

Numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,

aquellos que cometen delitos sexuales contra menores de edad, se conviertan en reincidentes.

El aumento de las penas no alcanza, en la medida en que las psicopatías de las que hablamos, difícilmente puedan ser objeto de un accionar persuasivo.

Y ello es así, porque según los estudiosos en la materia, “el psicópata no aprende, en el sentido absoluto de la palabra”.

El abuso sexual no es, necesariamente, producto de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades elementales.

En países como Estados Unidos o Inglaterra, estas conductas son objeto de un riguroso tratamiento legislativo.

Señor presidente: creo que el espíritu de esta iniciativa, que estoy presentando por tercera vez y respecto de la que —como la misma indica— he consensuado en la Cámara de Diputados tanto como me lo ha permitido el no desvirtuar su naturaleza, surge acabadamente del artículo de opinión que me pertenece, aparecido en el diario *Río Negro*, provincia a la que represento, en fecha 8 de marzo de 2001, y que paso a transcribir: “...Hacia un control social de violadores de menores [...] Parecería ser que ni el Congreso Nacional ni los principales actores de la vida argentina en materia de seguridad, aciertan en dar una solución definitiva respecto de crímenes tan aberrantes como la violación de menores y la violación de menores seguida de muerte. No ha sido suficiente, hasta el momento, la discusión mediática; menos aún la legislativa, que no encuentra el rumbo de una enérgica política en esta materia.

La pregunta es: ¿cuántos crímenes más necesita la sociedad argentina para despertar del eterno letargo en que, en este aspecto, está sumida?

Se debate entre “duros” y “garantistas”. Y el tiempo transcurre, no entendiéndose bien qué privilegiar primero: si los derechos de las víctimas o los del victimario, como si fueran situaciones excluyentes.

Es bien sabido que en nuestro ordenamiento, todas las normas penales, comenzando por las contenidas en nuestra Constitución, garantizan debidamente los derechos de aquellos últimos, al proclamar la inviolabilidad de la defensa en juicio de su persona y de sus derechos, precepto del que derivan infinidad de normas de fondo y procesales. Pero, advertimos, que en el otro extremo se posiciona el ciudadano común, quien constantemente hace pública su decepción por la falta de amparo del hombre honesto frente a la desbordada delincuencia de nuestros días, a la que, aparentemente, estaría dirigida toda la protección estatal.

En materia de abuso sexual de menores, he venido proponiendo, desde 1998 y hasta ahora, sin la posibilidad de un resultado concreto, la sanción de una ley que otorgue a la comunidad el derecho a saber que en el lugar donde residen se encuentra afincado un violador. Casos como el de Graciela Mendoza, de esta provincia; Micaela Ávila, de Río Cuarto, Córdoba, o el de Jennifer

Falcón, recientemente ocurrido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, hubieran podido evitarse.

La información que estoy proponiendo es relevante para proteger al público de este tipo de agresiones. Debemos reconocer en los niños a la parte más vulnerable de nuestra sociedad; y en este sentido, estamos también obligados a reconocer que sus derechos deben ubicarse por sobre los derechos de los condenados por abuso sexual.

Es imperativo otorgarle a la comunidad esta facultad de llevar adelante un control social que, junto con el control policial, permita un concreto seguimiento de estos asociales.

Esta medida, de hacerse efectiva, vendría a poner un freno a los convictos por violación de menores, con miras al derecho a la seguridad pública.

Concretamente, a la posibilidad de consultar un registro especial de condenados por este tipo de delitos por parte de los vecinos de un lugar, se sumarían reglas específicas tendientes a cercenarles la posibilidad de concurrir a determinados lugares, por ejemplo donde hay menores, o a abstenerse de relacionarse con determinada calidad de personas; a impedirles el uso de alcohol y estupefacientes; a continuar, como medida de contención, con el tratamiento psicológico, y a notificar fehacientemente al tribunal todo cambio de domicilio, con una antelación de cuarenta y ocho horas.

Ahora bien, este control del que hablamos, se verá complementado con la publicación de edictos en las sedes policiales, y con la necesaria intervención de las juntas vecinales y los consejos de seguridad, lo que contribuirá al conocimiento, por parte de los vecinos, acerca de la existencia de un convicto por violación en el lugar donde viven.

El esfuerzo estaría destinado a la prevención; destinado a salvar vidas indefensas.

La propuesta, en un todo de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, tiene el carácter de medida simple y básica para “alertar” a la comunidad.

Es notable como en Estados Unidos, un país donde prevalecen y se respetan a ultranza los derechos de los individuos, se ha implementado un fuerte control social sobre estos convictos, posibilidad que les brinda la denominada Ley Megan y que importa al vecino la oportunidad “de estar atento” y de servirse de dicho entorno vigilante a favor de sus niños.

En esta problemática, la preocupación de las autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo que conlleva el abuso sexual, ciclo en el que la reincidencia es inevitable por la superficial comprensión de las exigencias del medio que tienen estos individuos, a quienes, en muchos países adelantados, se los denomina “predadores”; con una muy escasa tolerancia a la frustración, poseen una manifiesta incapacidad de manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a una “incontenible compulsión a la repetición”. Es así como reinciden en un 95 % de los casos.

Finalmente, el Congreso Nacional tendrá que encarar una urgente modificación de la legislación de fondo. Habida cuenta de que en nuestro país, en la práctica, no existe la prisión ni la reclusión perpetua en aquellos casos de violación de un menor seguida de muerte; la reforma deberá consistir, obligatoriamente, en la aplicación de dichas penas, con accesoria por tiempo indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación, libertad condicional ni ninguno de los beneficios liberatorios que otorguen las leyes de ejecución de las penas privativas de libertad.

Es imprescindible entender que la naturaleza de estos actos cae como constante amenaza sobre el segmento más vulnerable de la población. Y en este sentido ¿qué gobernante, en uso de sus legítimas atribuciones de mantener la salud y la seguridad de la población, no proveería medidas de seguridad frente a este riesgo?

Hasta ahora, seguimos eligiendo de los males, el mayor”.

Resultado de esta incansable lucha en la Cámara de Diputados, es haber podido llegar a la conclusión de que existen dos clases de frenos para esta iniciativa: primero, aquellos que hacen al constante debate ideológico acerca de la institución policial y, en segundo lugar, aquellos que tienen que ver con factores culturales ligados a la aceptación de ciertas conductas sexuales en el seno familiar.

Señor presidente: creo que es hora de superar el primero, lo que ya ha venido haciendo este Congreso en materia de facultades policiales, y de adoptar una posición coherente respecto del segundo; pues de otra manera, nos hallaríamos frente a un país anclado en el pasado y privado de instituciones vitales para su subsistencia, y donde se permite, por ejemplo, la existencia de un registro de deudores alimentarios para padres que no cumplen con su obligación, y no es viable la creación de un registro como el que aquí impulso, donde también estarían incluidos, por supuesto, no ya los padres que no pagan, sino los padres que violan a sus hijos.

Pues, el mismo espíritu que impulsa a hacer pública la conducta de los padres transgresores que no cumplen sus obligaciones alimentarias anima este proyecto: el primordial bienestar de los menores; no sólo el material, sino también el psicológico, y la protección de su vida.

No quiero creer, señor presidente, que en la Argentina de hoy sea más grave no pagar, que violar.

Este proyecto representa, con algunas variantes, el consenso alcanzado en el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados el cual, lamentablemente y a pesar de sus numerosas firmas, no ha podido llegar a la media sanción en el curso del último período ordinario.

A consecuencia de todo lo expuesto, solicito, nuevamente, el urgente tratamiento y sanción del presente proyecto.”

Miguel Á. Pichetto.

III

(S.-362/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el artículo 2º de la presente ley.

Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aportes sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.

Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los delitos previstos en el artículo 2º, en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de su investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.

Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2º de la presente ley.

Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o

por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.

Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos, de información genética y de las muestras obtenidas.

Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo será dada de baja transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial. No rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el artículo 51 del Código Penal.

Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley.

Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código Penal.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que proponemos a través del presente proyecto tiene por manifiesta finalidad facilitar, sin agravio alguno a derechos y garantías constitucionales, las investigaciones judiciales originadas en la comisión de delitos contra la integridad sexual.

Esta iniciativa no es nueva: nace del Orden del Día N° 1.113, dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en los proyectos de ley que presentaron los senadores Rodríguez Saá, Bortolozzi de Bogado, Fellner, Giri, Saadi y Quintela.

En aquella oportunidad, y luego de largos debates, después de escuchar a todos los sectores interesados y principalmente a los expertos, los senadores miembros de la comisión arribamos a un consenso que derivó en la confección de este dictamen, el que luego fuera aprobado por unanimidad de la Cámara el 26 de noviembre de 2008.

Sin embargo, lamentable e inexplicablemente, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares características el 11 de marzo de 2009, sin tener a la vista siquiera la media sanción que habíamos consensuado en el Senado.

De esta manera, por esta irregularidad –que fue un verdadero sinsentido– sendas medias sanciones fueron destinadas a caducar en el medio de un debate reglamentario estéril, pues si bien era claro que la media sanción de Senado precedía en el tiempo a la sanción de Diputados, la clara omisión a su consideración frustró cualquier tipo de saneamiento ulterior.

Es por eso que hoy, habiendo caducado ambas sanciones de acuerdo a la ley 13.640 y sus modificatorias, volvemos a presentar este importantísimo proyecto que debería ser considerado prioritario y aprobado a la brevedad.

Todavía recuerdo el relato desesperado pero contundente de la madre de Lucila Yaconis, Isabel, quien fuera asesinada en un intento de violación en 2003.

Ella nos contaba que cuando le dijeron que habían quedado muestras de semen en la escena del crimen, creyó que eso iba a desembocar en el descubrimiento del autor del delito. Sin embargo, eso no fue así porque posteriormente le informaron que como no existía en la Argentina un banco de datos de este tipo, solamente la casualidad o la comisión de un futuro delito permitirían cruzar información para poder, eventualmente, identificar al autor del hecho.

La omisión legislativa es clara en esta materia. Y la responsabilidad es de quienes tenemos el poder de legislar.

En este sentido, no podemos dejar de advertir dos aspectos con relación a los delitos contra la integridad sexual: un alto grado de reincidencia y la dificultad en la prueba, pues generalmente los delincuentes buscan un ámbito aislado donde no haya testigos, y en el que la víctima sienta una gran debilidad.

Por lo tanto, esta decisión de avanzar en la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos es de suma trascendencia, y marcará un antes y un después en la investigación judicial de este tipo de delitos.

Esa finalidad se alcanza a través de la posibilidad de cotejar, sin mayores demoras, muestras de material genético obtenidas en el ámbito de tales investigaciones, con material genético almacenado, proveniente de individuos respecto de los cuales haya recaído sentencia condenatoria firme como autores de alguno de los delitos correspondientes al género mencionado en el párrafo anterior.

Tenemos la convicción de que no existe derecho o garantía constitucional que reconozca a tales individuos la potestad de exigir la destrucción de dicho material, en la medida en que el mismo haya sido obtenido de manera conforme a derecho.

Ni la Constitución Nacional ni el Código Procesal Penal de la Nación se oponen a una decisión de sentido común como la que implica el cotejo habilitado por la existencia del mencionado Registro; según sean las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que se esté investigando, resulta sobradamente justificado permitir el avance de la investigación en función de información pasada referida a hechos debidamente comprobados en sede judicial, para orientar la pesquisa en una dirección fundamentada, en lugar de padecer la pérdida de tiempo precioso que implica una mera búsqueda a tientas.

Va de suyo que ese cotejo servirá, también, para descartar posibles hipótesis investigativas, extremo que demuestra claramente que no estamos frente a una herramienta enderezada, únicamente, a sostener imputa-

ciones: servirá, sí, eventualmente, para consolidar una acusación, pero también, en su caso, para desestimarla.

A la luz de los avances científicos registrados en los últimos años, constituiría una inaceptable omisión, de cara al mandato constitucional de afianzar la justicia, privar al Poder Judicial de la posibilidad de contar con un medio que, como el propuesto, estará enderezado a agilizar la investigación y eventuales juicio y castigo de quienes resulten autores de delitos tan especialmente deleznable como los que comprometen la integridad sexual de las personas.

Repasemos el articulado del proyecto.

En el artículo 1° establecimos que el Registro iba a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Recuerdo que de las reuniones de comisión surgió en principio la idea que fuera el Poder Judicial de la Nación, porque rápidamente llegamos al consenso de que el banco de datos tenía que ser utilizado únicamente en el ámbito de las investigaciones judiciales, y que sólo debían tener acceso a él miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, recibimos una carta de adhesión del Ministerio y el pedido específico de que el banco dependiera de él. En consecuencia, consideramos que podíamos aceptar esa sugerencia, sobre todo porque se trata de un registro nuevo cuya instalación requerirá de una fuerte decisión política y del presupuesto necesario.

En el artículo 2° el punto a debatir era a qué delitos aplicábamos la obligación de registrar los datos genéticos. Si bien es muy fácil entusiasmarse y pretender que sea una base para todos los delitos, la idea es comenzar con los delitos contra la integridad sexual de las personas, especialmente por las características de estos aberrantes hechos.

En el artículo 3° establecemos dos clases de muestras que va a contener este banco de datos. En primer lugar, datos recogidos en la escena del crimen. Y por otro lado, datos genéticos de los condenados por delitos previstos en el Código Penal en ese título y en ese capítulo, con condenas firmes.

En este sentido podemos ir adelantando que se trata de una ley de fondo, no es una norma procesal. Es una norma que va a ser obligatoria para todo el país.

El artículo 4° es bastante técnico y establece cuál es la información genética que tiene que estar registrada. Aquí tuvimos el aporte de la doctora Salas, miembro del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

El artículo 5° establece que en el caso de personas condenadas, el juez, de oficio –y como parte de la sentencia–, ordena tomar estas muestras genéticas. En caso de que se trate de pruebas recogidas de la escena del crimen, esto puede ser solicitado tanto por el juez de oficio o a requerimiento de parte.

En el artículo 7° establecemos que las constancias son de carácter reservado y sensible, y que solamente serán suministradas a miembros del Ministerio Público

y a jueces y tribunales de todo el país, pero exclusivamente en el marco de la investigación de una causa.

El artículo 9º establece que el Registro dispondrá lo necesario para la conservación de modo que el material genético no sea alterado.

El artículo 10 contiene otro de los temas que fue de discusión y de debate en el ámbito de la comisión, que es por cuánto tiempo debe guardar este banco los datos genéticos. De acuerdo a los expertos y a las experiencias internacionales, optamos por un plazo de 100 años para hacerlo efectivo, de acuerdo al alto nivel de reincidencia que mencionáramos.

En el artículo 11 establecemos la prohibición expresa de utilizar estos datos para cualquier otro fin que no sea la identificación de personas en el marco de investigaciones judiciales y, finalmente, ratificamos la naturaleza jurídica de este registro como un accesorio de la pena en el caso de las condenas judiciales por este tipo de delitos.

Por todo lo manifestado, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.

Sonia M. Escudero.

IV

(S.-1.315/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el artículo 2º de la presente ley.

Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la

comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.

Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los delitos previstos en el artículo 2º, en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de su investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.

Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro serán de carácter reservado y sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y tribunales de todo el país en el marco de una causa, en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2º de la presente ley.

Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese Ministerio.

Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas.

Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo será dada de baja transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial.

Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley.

Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código Penal.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel Á. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

No obstante haber presentado en siete (7) oportunidades mi iniciativa sobre la creación de un registro especial destinado a la protección de las personas en vista a los delitos previstos en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal –“Delitos contra la integridad sexual”– (4.836-D.-98; 1.341-D.-00; 185-S.-02; 645-S.-03; 4.081-S.-05; 4.159-S.-08, y 3.465-S.-10), voy a insistir en esta temática con la reproducción de la media sanción lograda por este Senado de la Nación en fecha 26 de noviembre de 2008, cuya caducidad ha obrado en fecha 11 de marzo del corriente año.

Dicha media sanción trata sobre la creación específica de un registro nacional de identificación genética

de abusadores sexuales, cuyo objetivo primordial será facilitar el esclarecimiento de los hechos penales investigados judicialmente en orden a los mencionados delitos, y la individualización de quienes los cometieren.

Se propicia, asimismo, la inclusión en dicho Registro de una sección especial destinada a personas condenadas por sentencia firme por los referidos delitos contra la integridad sexual, y otra destinada a autores no individualizados, cuyo principal objetivo será recabar toda información biológica obtenida en el curso de la investigación penal.

Si bien este Registro abarca sólo una faceta del por mí hasta ahora propuesto, entiendo que la identificación genética en el marco de las respectivas causas judiciales, no sólo contribuirá al esclarecimiento de los hechos, sino también a formar la convicción en los condenados por estos delitos y ya liberados, acerca de que no podrán insistir en su conducta sin ser descubiertos rápidamente, lográndose el efecto disuasivo derivado de figurar en el Registro.

Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente un nuevo tratamiento de esta problemática.

Miguel Á. Pichetto.

V

(S.-1.867/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – *Objeto.* La presente ley tiene por objeto la protección de la vida e integridad de las personas, la facilitación del esclarecimiento de los hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual que sean objeto de una investigación judicial, la prevención de la reincidencia en este tipo de delitos y una adecuada reinserción social de los condenados.

Art. 2° – *Creación.* Créase el Registro Nacional de Identificación de Abusadores Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 3° – El objeto del registro será receptar, almacenar y sistematizar la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y los datos personales y genéticos de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos tipificados en el libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal.

El Registro tendrá dos secciones:

- a) Una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme en la que constarán datos personales, fotográficos e información genética;
- b) Una sección destinada a autores no individualizados, en la que constará la información genética del perpetrador del abuso obtenida a

través de los exámenes a los que fueran sometidas las víctimas.

Art. 4° – *Registro de datos personales.* En el caso de la sección destinada a los condenados, una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme por la comisión de los delitos mencionados en el artículo precedente, el juez o tribunal ordenará la inscripción de los siguientes datos personales del condenado:

- a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos, se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres;
- b) Fotografía actualizada del condenado;
- c) Fecha y lugar de nacimiento;
- d) Nacionalidad. En caso de ser extranjero se asentará la fecha de su último ingreso al país;
- e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
- f) Número de CUIL o CUIT;
- g) Grado de instrucción;
- h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
- i) Condenas anteriores y tribunales intervinientes. Si el juez competente lo considera necesario, en caso de ser el condenado extranjero, se requerirán informes a los órganos jurisdiccionales de su país de origen;
- j) Fecha y lugar de comisión del delito y de iniciación del proceso, número de causa, sentencia condenatoria, tribunal y secretaría interviniente, tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y número de causas correspondientes;
- k) Huellas dactiloscópicas;
- l) Identificación del ADN no codificante del condenado en los términos del artículo 5° de la presente ley.

Art. 5° – *Identificación genética.* La información genética registrada, tanto en el caso de los condenados como en el de los autores no individualizados, consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

La identificación genética será ordenada judicialmente por el órgano interviniente, y siempre deberá obtenerse a través del medio menos lesivo. En el caso de los autores no individualizados, constarán todos los datos genéticos obtenidos a través de los exámenes a los que fueran sometidas las víctimas.

Asimismo, queda absolutamente prohibido utilizar las muestras de ADN existentes para una finalidad diferente que la de identificar a una persona.

Art. 6° – Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Minis-

terio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.

Para el caso de los delitos contra la integridad sexual que no hayan podido ser identificados y en el que se obtendrán de los exámenes a los que fueran sometidas las víctimas, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, o a quien en su lugar se designe, realizará las comunicaciones pertinentes a los servicios de ginecología de todo centro de salud, sea público o privado y a las fuerzas de seguridad, sobre la obligación de conservar el registro de material genético obtenido.

Art. 7º – *Convenios*. Facúltase al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a celebrar convenios con el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por ley 23.511, con el objeto de solicitar la correspondiente instrucción especializada tendiente a asegurar la veracidad de los datos obtenidos a través del análisis de ADN no codificante, con fines exclusivamente de identificación.

Asimismo, para el éxito de la implementación del mencionado registro, se autoriza a celebrar acuerdos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 8º – La información de los datos personales del condenado será de acceso público, debiendo publicarse:

- a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos, se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres;
- b) Fotografía actualizada del condenado;
- c) Fecha y lugar de nacimiento;
- d) Nacionalidad;
- e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
- f) Domicilio actual; para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad de aplicación los cambios de domicilio que efectúe.

La autoridad de aplicación habilitará una página web donde dicha información pueda ser consultada.

Toda la demás información existente en el registro será reservada, pudiendo ser sólo requerida por el Ministerio Público Fiscal, los jueces, fiscales y tribunales de todo el país que intervengan en causas por delitos contra la integridad sexual o causas conexas a los mismos.

El registro dispondrá de los medios técnicos necesarios para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas.

Art. 9º – *Acceso a la información*. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá poner a disposición de quienes están habilitados a requerir la información incluida en el registro, un sistema informático de acceso a los datos por intermedio de un usuario y una contraseña o clave de identificación.

La reglamentación determinará, en su caso, la forma en la que este servicio estará disponible, privilegiando un rápido acceso a la información y garantizando la confidencialidad.

Art. 10. – *Caducidad*. La información pública mencionada en el artículo 8º obrará en el Registro para su consulta pública hasta quince (15) años después de haberse cumplido el máximo de la condena impuesta.

Sin embargo dicha información permanecerá para su consulta por los organismos y funcionarios habilitados, junto con el resto de la información asentada en el registro, y será dada de baja cuando hubieren transcurrido cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial o después de producirse el fallecimiento del condenado.

Art. 11. – *Validez de la información*. Los datos contenidos en el Registro Nacional de Identificación de Abusadores Sexuales serán preservados de modo inalterable harán plena fe, y se considerarán datos personales sensibles sujetos a contraprueba, con los alcances prescriptos en la ley 25.236.

Art. 12. – *Reinserción social y evaluación de riesgos de reincidencia*. Todo condenado que ingrese al registro, a pedido del juez de ejecución de pena deberá ser evaluado por un equipo profesional especializado que determinará el tratamiento médico y psicológico necesario para su inserción social. Los profesionales tratantes deberán pertenecer al sistema público de salud y el mismo deberá ser brindado en forma gratuita y efectiva. El tratamiento psíquico y médico deberá realizarse durante toda la condena con la periodicidad que los profesionales determinen. Corresponderá al juez de ejecución la supervisión trimestral del condenado.

En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en su tratamiento diagnosticarán las posibilidades de su reinserción social o la continuidad de sus tratamientos en institutos especializados, evaluándose en cada caso y según el riesgo de reincidencia, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos de castración química.

De corresponderle la libertad, el Patronato de Liberados, o la dependencia que cumpla con sus funciones en las provincias, supervisará la efectiva reinserción social de la persona registrada y la continuación del tratamiento profesional especializado, el que deberá efectuarse durante 10 años posteriores al cese de la condena, pudiendo ser prorrogado si los profesionales intervinientes así lo aconsejasen.

Art. 13. – *Vigencia*. La presente ley se tendrá como complementaria del Código Penal, y comenzará a regir a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación.

Art. 14. – *Presupuesto*. El presupuesto general de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los delitos contra la integridad sexual son fuente de profunda preocupación para la población, dado que vulneran derechos fundamentales del individuo y menoscaban la dignidad humana.

Por esta razón este tipo de delitos vienen siendo tipificados y penados de distintas formas desde la antigüedad.

Hoy en día el tema suscita profundos debates, lo que no debe alejarnos de un sano equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales de los condenados y los derechos que asisten a la población en general.

En nuestro país la población carcelaria alcanza aproximadamente las 60.000 personas, en ese universo tan grande, los violadores son un problema de riesgo. Si bien es dificultoso encontrar datos consolidados, se estima que el 5 % de la población penitenciaria está condenada por un delito contra la integridad sexual.

El principal problema en estos casos es que según los especialistas, si no se los trata es muy probable que vuelvan a violar. Así, varios psiquiatras sostienen que el índice de reincidencia es del 95 % al 98 %.

En esta situación, es necesario buscar alguna manera de evitar que se repita el delito y proteger así a la posible víctima y al victimario.

Un informe que se encuentra en la página web de la Asociación Argentina de Psiquiatría, elaborado por el doctor Juan Carlos Romi y titulado "Reflexiones sobre la conducta sexual delictiva" realiza un perfil del delincuente sexual:

"En la observación de delincuentes sexuales vemos que el 80 al 90 % no presentan signos de alienación, es decir son jurídicamente imputables. De ellos, a un 30 % no se le detectan groseros trastornos psicopatológicos de la personalidad y su conducta sexual social aparente presenta visos de adecuación. El resto de este grupo (el otro 70 %) está compuesto por individuos con trastornos de la personalidad (con o sin perturbaciones sexuales manifestas –disfunciones y/o parafilias o desviaciones–), psicópatas antisociales y/o sexópatas.

"El grupo minoritario (10 al 20 %) está compuesto por individuos que presentan graves problemas de personalidad de características psicóticas alienantes, en su gran mayoría jurídicamente inimputables.

"Por lo tanto la asociación tradicional de correlacionar necesariamente delito sexual y psicopatía debe ser desacreditada. La psicopatía exige impulsividad, falta de remordimiento por lo realizado, incapacidad de vínculos afectivos reales, agresividad, dificultad para aprender con la experiencia, etcétera, y muchos de los delincuentes sexuales no pueden ser descriptos de este modo.

"La creencia por ejemplo de que el violador actúa impelido por fuertes deseos sexuales se ha visto desa-

creditada en la actualidad, al menos como explicación genérica.

"Otro tanto ocurre con la aseveración consistente en calificar a los agresores sexuales como enfermos mentales. La ausencia de enfermedad mental, sobre todo en los violadores, es habitual, y por lo general lo que se observa son individuos con conductas aprendidas en el marco de una socialización deficiente."

Por su parte, en relación a los grados de peligrosidad, el informe señala que:

"La tarea de predicción de la peligrosidad de un delincuente sexual ha de tener en consideración la gravedad y la frecuencia de las agresiones sexuales mostradas en la carrera delictiva. La presencia de los siguientes indicadores está asociada a un riesgo elevado de reincidencia:

"a) Si el delito incluyó la violencia y puso en riesgo físico a la víctima.

"b) Si hubo acciones excéntricas y/o la presencia de rituales.

"c) Si es reincidente (no cambia su comportamiento ni aprende con la experiencia).

"d) Si ha existido evidencia de alteraciones psicopatológicas graves.

"e) Si el sujeto no reconoce el delito o lo racionaliza y no concientiza la idea de ser ayudado terapéuticamente.

"f) Si no le interesa controlar su conducta sexual y se mueve con impulsión sexual gratificante.

"g) Si vive en un medio sociocultural adverso y

"h) Si su comportamiento es vivido en forma ego-sintónica.

"En cuanto a los perfiles de personas que cometen violación sexual, aproximadamente de entre un 80 % a 90 % tienen pleno uso de sus facultades y no presentan signos de alienación. Aproximadamente un 70 % presenta trastornos de personalidad, mientras que el 30 % de las personas no presentan ningún trastorno visible. Sólo un porcentaje pequeño de entre los casos en los que el sujeto activo padece algún trastorno de la personalidad existen características psicóticas alienantes, estos casos en su gran mayoría son imputables jurídicamente."

En este contexto, es importante cuestionarnos sobre cuales son las medidas que el Estado debe tomar para que el condenado pueda reinserirse en la sociedad con posibilidades ciertas de éxito y no reincida en el delito y cuáles son las medidas que pueden ofrecerse a la sociedad como reaseguro frente a posibles reincidencias –que como hemos visto son bastante frecuentes–.

La psiquiatra Esther Romano, experta en el tratamiento de abusadores, considera en un artículo publicado en el diario *Página/12* que es hora de iniciar un debate sobre "la importancia de atender la extensión del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo de enfermos sociales". Romano propició "un control

permanente” y anticipó que no conoce casos de “recuperación total”.

En el año 2008, el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires empezó a implementar un programa de tratamiento para detenidos violadores. El programa comenzó con unos 50 internos en la Unidad Penitenciaria 25 de Lisandro Olmos y se extenderá a todos los penales de la provincia, para cubrir a los casi 1.600 detenidos que presentan causas relacionadas a la comisión de delitos contra la integridad sexual.

Según detalla la página web del Ministerio de Seguridad bonaerense, los ejes del programa se basan en el abordaje multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales, así como también la evaluación psiquiátrica y clínica del paciente y la participación en terapias individuales y grupales.

El objetivo central es lograr el cambio del impulso sexual del agresor hacia un impulso que no sea peligroso hacia sí mismo y hacia los demás. Este tratamiento implica un cambio sustancial en la modalidad de abordaje de esta problemática, ya que posibilita el aumento del conocimiento de sus características patológicas.

La metodología, que en la actualidad se viene aplicando en la Unidad 25 Olmos en donde están alojados cerca de 50 internos procesados o condenados por delitos sexuales, consiste en terapias psicológicas individuales y grupales, psiquiátricas, con participación de distintas técnicas de talleres, y con la modalidad arteterapia (terapéutica psicológica que utiliza las expresiones artísticas como técnicas de comunicación). Se incorporará también actividades físicas y de promoción de la educación escolar con sus distintos niveles para lograr la integración del hombre en todo su potencial.

En los Estados Unidos, algunos estados tienen registros públicos de violadores, que brindan difusión acerca de las características y rasgos personales de agresores sexuales, a fin de evitar su reincidencia en otras jurisdicciones del país. Cada estado decide la información que se pondrá a disposición del ciudadano (normalmente fotografía, nombre, dirección y naturaleza del delito cometido) y cómo debe ser difundida.

En otros países como Australia, Canadá, Gran Bretaña, existen registros de abusadores sexuales pero no son públicos sino que se usan como herramienta de control del Estado luego de que sean dejados en libertad.

El presente proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Identificación de Abusadores Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Este registro tendrá una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme en la que constarán datos personales, fotográficos e información genética y una sección destinada a autores no individualizados, en la que constará la información genética del perpetrador del abuso obtenida a través de los exámenes a los que

fueran sometidas las víctimas. Esta última sección tendrá como finalidad la investigación judicial de los casos no resueltos y el entrecruzamiento de datos. Asimismo, algunos datos de los condenados por un delito contra la integridad sexual tendrán carácter público, para consulta del público en general.

Por otra parte se establece que los condenados deberán ser evaluados por un equipo profesional especializado que determinará el tratamiento médico y psicológico necesario para su inserción social que deberá realizarse durante toda la condena.

En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en su tratamiento diagnosticaran las posibilidades de su reinserción social o la continuidad de sus tratamientos en institutos especializados, evaluándose en cada caso y según el riesgo de reincidencia, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos de castración química.

Atento a lo expuesto y a la necesidad de encontrar una solución para esta problemática, presento el presente proyecto para su discusión en comisión, y solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.

Juan C. Romero.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el artículo 2º de la presente ley.

Asimismo, respecto de toda persona condenada se consignará:

- a) Nombres y apellidos en caso de poseerlos se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres;
- b) Fotografía actualizada;

- c) Fecha y lugar de nacimiento;
- d) Nacionalidad;
- e) Número de documento de identidad y autoridad que lo expidió;
- f) Domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.

Art. 4° – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aportes sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

Art. 5° – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el registro.

Art. 6° – El registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los delitos previstos en el artículo 2°, en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de su investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.

Art. 7° – Las constancias obrantes en el registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley.

Art. 8° – Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.

Art. 9° – El registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos, de información genética y de las muestras obtenidas.

Art. 10. – La información obrante en el registro sólo será dada de baja transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial. No rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el artículo 51 del Código Penal.

Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley.

Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código Penal.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

76

(P.E.-293/11)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-293/11), autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1° de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 31 de agosto de 2011.

César A. Gioja. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores. – Eric Calcagno y Maillmann. – Blanca I. Osuna. – María de los Angeles Higonet. – Luis A. Juez. – Sonia M. Escudero. – Ada R. del Valle Iñiguez de Cappellini. – Oscar A. Castillo. – Ada M. Maza. – Roberto G. Basualdo. – Arturo Vera. – Emilio A. Rached.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1° de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012, de acuerdo a la información detallada en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII que forman parte integrante de la presente ley.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. – Arturo A. Puricelli.

IV

ACTAS DE VOTACIÓN



Senado de la Nación

volver

Votación Nominal

129º Período Legislativo - Ordinario - 8ª Sesión

DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY MODIFICANDO LA LEY 26364, SOBRE DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

S-706/10, S-2447/10, S-2711/10, S-728/11 Y S-1514/11

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas. Con modificaciones

Acta N°: 1 Fecha: 31-08-11 Hora: 18:44

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.C. Desempeño: NO

Presentes Identificados:	59	Votos afirmativos:	58
Presentes No Identificados:		Votos Negativos:	1
Total Presentes:	59	Abstenciones:	-
Ausentes:	13		
Votos Afirmativos Necesarios:	30	RESULTADO de la VOTACIÓN:	AFIRMATIVA

Informe de auditoría de modificaciones

	Versión Original	Actual
MORANDINI, Norma Elena	NEGATIVO	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La senadora Morandini manifiesta un error en la emisión de su voto y deja constancia que el mismo es afirmativo y el senador Castillo manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

La senadora Estenssoro deja constancia de su voto negativo en los artículos 10º, 11º y 12º referidos a la incorporación del nuevo TÍTULO V.

Modificaciones realizadas el 31/08/11

Presentes Identificados:	59	Votos afirmativos:	60
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN:	AFIRMATIVA



JUAN HECTOR ESTRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN



Senado de la Nación

Votación Nominal

129º Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión

DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY MODIFICANDO LA LEY 26364, SOBRE DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

S-706/10, S-2447/10, S-2711/10, S-728/11 Y S-1514/11

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas. Con modificaciones

Acta Nº: 1 Fecha: 31-08-11 Hora: 18:44

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.C. Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BANICEVICH, Jorge Esteban	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AUSENTE
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Raúl	AUSENTE
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MESTRE, Ramón Javier	AUSENTE
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CORPACCI de MERCADO, Lucía B.	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AUSENTE	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AUSENTE
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO

V

INSERCIONES

Las inserciones remitidas por las señoras y los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

2

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE

**Registro de datos genéticos vinculados
con la integridad sexual
(S.-3.370/10 y otros)**

Señor presidente:

Es dable destacar que el problema que enfrentamos en materia de delitos contra la integridad sexual reviste cada día más importancia y merece de nuestra parte su atención, a fin de encontrar soluciones a través de la normativa que de nuestro seno emane.

No se nos escapa que el tema de la inseguridad aqueja a los habitantes y que los avances científicos y tecnológicos deben dar respuesta a los problemas comunes, es decir, que éstos deben ser herramientas en pos del bien común y favorecer así el bienestar general.

En este sentido es que la instauración de un Registro de datos genéticos viene a dar respuesta a la pretensión de lograr un mayor número de esclarecimientos de los casos delictivos vinculados a la materia.

Asimismo, es menester recordar que la individualización de los responsables de los delitos contra la integridad sexual, es de difícil resolución, entre otras cuestiones, por la dificultad de la producción de prueba.

En particular, este tipo de delitos referidos a las agresiones sexuales, resultan definitivamente repudiables y esto se agudiza cuando afectan a víctimas menores de edad, generando el consiguiente rechazo social.

Esta ley posibilitará el almacenamiento de información genética asociada a una muestra o evidencia biológica, proveniente de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos que nos ocupan.

Por todo lo expuesto, este tema debe ser de atención prioritaria y permanente desde el Poder Legislativo, a través de una normativa conteste con su importancia y eficiente en su cometido.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE

**Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)**

Señor presidente:

En primer término, me gustaría recordar un dato de suma relevancia en este tema. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el delito de trata de personas genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares aproximadamente al año.

Actualmente, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas.

Señor presidente, quiero enfatizar aquí que la trata de personas es la forma moderna de la esclavitud.

A pesar de que la esclavitud fue abolida desde hace siglos, ahora somos testigos de su forma moderna: la trata de personas, con formas y mecanismos diversos, con finalidades diferentes, pero que finalmente coinciden en la aberrante e ilícita explotación y uso de las personas.

Sus efectos, tanto en las personas que son víctimas de la trata como en las sociedades, son terribles.

Y no se trata solamente de un delito. Se trata de una flagrante violación a los derechos humanos y una manifestación clara de las inequidades de género, toda vez que la mayoría de las personas sometidas a la trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas de baja condición económica.

Además, el hecho de que las principales corrientes de la trata de mujeres y niñas fluyen desde los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, denota la existencia de una demanda de mujeres y niñas para realizar ocupaciones o empleos en condiciones de esclavitud, alimentada por una oferta de ellas, a quienes se les niegan sus derechos, tanto en sus lugares de origen como en los lugares donde son explotadas.

El círculo diabólico se cierra con la impunidad, de modo tal que se crean así las condiciones elementales para el aumento de la trata de personas, especialmente con las personas más débiles, es decir, mujeres y niñas.

Reitero, señor presidente. Como consecuencia de su situación, las personas víctimas de la trata son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones

semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores.

No cabe duda de que el aumento de este tipo de delitos es pluricausal y tiene que ver principalmente con la pobreza, la insuficiencia de empleos, la ubicación geoestratégica de nuestro país, las inequidades entre los géneros, entre otros.

Por ello, este tema debe ser de atención prioritaria y permanente desde el Poder Legislativo, a través de una normativa que cumpla con los compromisos internacionales en la materia, aunque diste de ser la solución definitiva al problema.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO

**Homenaje a la labor científica del perito Francisco
P. Moreno
(O.D. N° 116)**

Señor presidente:

En Francisco Pascasio Moreno recordamos a un talento argentino, a un apasionado por el estudio de la geología, la historia natural, la flora y la fauna de nuestro Sur.

En su andar incesante y contando con tan sólo 23 años de edad, es el primer hombre blanco en llegar al lago Nahuel Huapi, izando la bandera argentina.

Meses más tarde regresa a la Patagonia en compañía de Luis Piedrabuena y remontando el río Santa Cruz descubre el gran lago que bautiza como "Argentino" y el imponente glaciar que lleva su nombre.

Durante el año 1879 estudia con particular detenimiento la zona conflictiva de límites entre Chile y Argentina. Por sus estudios y relevamientos recibe de la Sociedad Geográfica de Francia la Medalla de Oro.

Y en 1902 es designado Perito de la Comisión de Límites entre nuestro país y Chile. Su tarea de arbitraje le permite a la Argentina retener 1.800 leguas cuadradas de territorio, como consecuencia de sus descubrimientos geográficos y de estudios de trascendencia del suelo austral argentino.

Los valiosos datos que aportaran posibilitaron nuevos horizontes en el campo de la antropología sudamericana y un renovado brío en el estudio de las razas originarias de América del Sur.

4

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO

**Registro de datos genéticos vinculados
con la integridad sexual
(S.-3.370/10 y otros)**

Señor presidente:

La provincia de Mendoza fue la primera provincia del país en implementar un registro de este tipo.

El registro de abusadores sexuales se creó por ley 7.222 publicada en el Boletín Oficial del 21 de julio de 2004 (Cobos promulgó la ley)

En un intento por mejorar el esclarecimiento de delitos de abuso sexual la Legislatura dio sanción a una ley, la número 7.222 "Registro Contra la Integridad Sexual" (RECIS), por la ley 7.296 del 3 de noviembre de 2004 se le dio la nueva denominación "Registro de Defensa de la Integridad Sexual" (REDIS).

En rigor la ley dio origen a dos registros, REDIS (Registro de Defensa de la Integridad Sexual) y el Reprigas (Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales) en el ámbito de la Justicia Provincial dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

El diputado provincial Miguel Serralta (PJ Mendoza), autor del proyecto, aseguró que el registro «no viola derechos individuales porque sólo se les hará el estudio de ADN a personas que tengan sentencia firme». Se trata de información reservada sólo para jueces de todo el país y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Además, tiene un apartado para «autores ignorados», con huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales.

Ahora, haciendo mención al derecho comparado, si bien es motivo de otro análisis y consecuentemente de otra discusión, en Francia Nicolás Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química después de la violación reincidente de un pederasta, y actualmente ya funciona un programa piloto de castración química. Además, desde 1998, la ley obliga al seguimiento de delincuentes sexuales reincidentes, y la Policía está autorizada a almacenar ADN incluso de sospechosos no condenados.

En España, una comisión de estudio catalana propuso la supresión hormonal reversible para los violadores reincidentes, pero la legislación de ese país no permite aplicar un tratamiento si no es aceptado por el preso. También se incorporará la creación de un registro de pederastas durante el primer trimestre de 2009.

En Chile hubo un caso emblemático: un pedófilo confesó no poder dominarse al ver niñas y niños; le pidió a su abogado que solicite a la Justicia la autorización para que lo castren. Este hecho motivó la creación de un proyecto de Ley que propone la castración química para violadores.

Si bien en Estados Unidos cada Estado tiene sus propias normas, la mayoría de ellos ya tiene su registro, y es el FBI el encargado de recoger todos los datos y luego distribuirlos. En Florida, por ejemplo, existe la castración de delincuentes sexuales reincidentes que quieren acceder a la libertad condicional. Desde 1996, la llamada «Ley Megan» incluye un registro de condenados por delitos sexuales, norma que habilita a informar a los vecinos si un condenado vive en el barrio.

Gran Bretaña tiene un registro de violadores desde 1997, y aun los sospechosos sin condena la integran. Allí está la base de datos más grande del mundo: 38

millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. También tiene un sistema de seguimiento satelital de delincuentes sexuales.

Australia también tiene un registro de condenados reincidentes, a los que se puede privar de la libertad en forma indefinida, y ese país también contempla la castración química voluntaria.

Señor presidente, volviendo al tema que nos ocupa, no quería dejar de mencionar, aunque ya se ha dicho, la importancia del esfuerzo de las señoras y señores senadores en el trabajo de las comisiones que queda plasmado en la calidad de la norma que vamos aprobar y que crea el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, que funcionará en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tendrá como objetivo facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual, para proceder en cuanto a la individualización de las personas responsables.

Por lo tanto, voto afirmativamente.

5

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO

Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata de tráfico de personas

(S.-706/10 y otros)

Señor presidente:

Felicito a las distintas ONG que militaron por las modificaciones de esta ley (Alameda, Vínculos en red, Fundación el otro, Fundación María de los Angeles, Red No a la Trata, Casa del Encuentro, Mujeres en Igualdad, la RAD, Búsqueda de Verdades Infinitas, Instituto Lebensohn y otras muchas ONG provinciales), que mediante distintos voluntariados hicieron posible la mejora de esta ley, al igual que a los distintos senadores que presentaron proyectos sobre este tema.

La trata de personas es uno de los delitos más aborrecibles que amenaza a nuestra sociedad. Sus víctimas son sometidas a todo tipo de maltrato y sus derechos son violados con el objeto de ser usadas como mercancía de un negocio vil. Éste es un delito grave por su extensión, complejidad y gravedad debe ser abordado por el Estado en sus facetas de prevención, sanción y asistencia a la víctima, porque el horror no termina cuando rescatan a la misma: deben desarrollarse políticas integrales, de alcance nacional sostenidas en el tiempo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata de personas ocupa el segundo lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo después del tráfico de drogas.

Distintos informes internacionales señalan a nuestro país como un lugar de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de

personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso.

Dichos informes citan: “En la ciudad de Buenos Aires podrían llegar a existir víctimas de trata con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Es destacable que el gobierno argentino identificó una cantidad significativa de ciudadanos argentinos y bolivianos sometidos a trabajos forzados”.

El importante trabajo que debería realizar la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, el cual brinda asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas, se ve opacado por las pocas cantidades de condenas, las cuales siguen siendo muy bajas en comparación con la cantidad de víctimas identificadas.

Esperamos que con las modificaciones de esta ley, los jueces puedan actuar con mayor efectividad en este tema. Desde el Estado se debe prevenir, pero también garantizar a las víctimas que se condenará a sus agresores y verdugos. Debemos terminar con la Impunidad del crimen organizado, que encuentra eco en algunos funcionarios.

Es imperioso destacar la condescendencia que hay sobre el tema. En la provincia de Tucumán, mientras es estricta en el horario de cierre de los locales bailables, los prostíbulos siguen funcionando con la mirada cómplice de los funcionarios, ya sea por ineficiencia en el control, por omisión maliciosa o por intereses propios.

La Relatora Especial de la ONU sobre Trata de Personas, citando a las ONG y a los medios como fuente, informa sobre los niveles significativos de complicidad oficial en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales.

Es necesario que se actúe con mayor efectividad. La sociedad se ve conmovida por las desapariciones de personas las cuales están sin resolver. ¿Dónde están? Es la pregunta que se hacen sus familiares ¿Dónde están? Estamos ante un récord increíble: según informes de diversas ONG más de 680 familias no saben dónde están sus seres queridos.

Lamentablemente este tema lo padecemos en todo el territorio nacional, donde no se excluye a ninguna provincia; es así como los casos de esta aberración humana se dan en todas las provincias, es así como los casos más recientes los encontramos en:

Buenos Aires con Candela Sol Rodríguez de 11 años.

En Salta con María Cash.

En Tierra del Fuego Sofía Herrera.

En San Isidro Érica Soriano.

De Neuquén Florencia Penacchi.

En Villa Gesell, Agostina Sorich.

En Santa Rosa la Pampa, Andrea Noemí López.

En Mar del Plata, Silvana Caraballo.

En Entre Ríos, Fernanda Aguirre.

En Rosario Santa Fe, Bruno Gantiletti.

En Casilda Santa Fe, Maximiliano Storani.
En Río Negro, Antonio Uriarte.
En Santiago del Estero, Florencia Evangelina Paz.
En Tucumán, mi comprovinciana Marita Verón.
Y muchos otros más ¿Dónde están?

En tal sentido he presentado un proyecto para que a través de los medios de difusión y en especial en el espacio televisivo *Fútbol para todos* se difunda la fotografía y el nombre de los desaparecidos en los cortes publicitarios.

Aquí estamos todos reunidos para terminar con la esclavitud del siglo XXI y garantizar los derechos humanos tan básicos e incuestionables como el derecho a la libertad, dignidad e integridad, básicamente el derecho a la vida.

6

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED

**Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas**

(S.-706/10 y otros)

Señor presidente:

La libertad es uno de los derechos más preciados del ser humano. De allí que en cierto sentido, o en todo sentido, la historia de la humanidad haya sido la permanente lucha por conquistar esa libertad o por mantenerla. Nuestro país, desde los orígenes de la institucionalidad argentina, ha comprendido el valor que tiene la libertad de la persona, como uno de los pilares en que deben asentarse la república y la democracia. En ese sentido la República Argentina ha dado muestras acabadas con la sanción de diferentes normas de carácter constitucional, jerárquicamente el más elevado en la pirámide normativa que un Estado pueda tener; al respecto debemos recordar la célebre declaración de la “libertad de vientres”, en la histórica Asamblea del Año XIII.

Nuestra propia Constitución Nacional, desde la reforma de 1860, ha consagrado en su artículo 15 una maravillosa norma que vale la pena recordar: “Artículo 15. En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”.

Ésta es la importancia que desde siempre nuestro país le ha dado a la libertad de las personas. Hoy nos aprestamos a sancionar un proyecto de ley que

representa también un gran avance en esa lucha por conquistar y mantener la libertad del ser humano frente a las modernas y reprochables nuevas formas de esclavitud.

Hoy como ayer la esclavitud y la trata de personas son crímenes que deben ser prevenidos y, en caso de que se hayan cometido sus responsables severamente castigados; por ello esta ley es un instrumento fundamental en la búsqueda ese objetivo.

Las claras definiciones contenidas en el artículo 2 del proyecto, que sustituye el artículo 2 de la ley 26.364, sobre lo que debe entenderse por trata de personas, es una muestra del importante avance que se da en esta materia, al decir: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.

Lo mismo podemos decir de la enumeración contenida en los incisos de este mismo artículo 2 del proyecto en tratamiento, en relación a que se deberá considerar como trata de personas la reducción a condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad; la obligación a realizar trabajos o servicios forzados; promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; lo mismo con relación a la pornografía infantil o su exhibición o representación; forzar al matrimonio o a las uniones de hecho y la comercialización de órganos o fluidos y tejidos humanos.

Resulta importante destacar aquí también la cláusula que dispone que el “consentimiento” de la víctima no exime, bajo ningún punto de vista, de responsabilidad, penal, civil o administrativa a los autores, partícipes, cooperadores o encubridores.

También resulta necesario resaltar la consagración de las garantías mínimas que debe dar el Estado a las víctimas de estos delitos, que se encuentran contenidas en el artículo 6º del proyecto, al igual que la creación del Consejo Federal para la Lucha de la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctima y su integración adecuada y sus funciones, de conformidad con lo previsto y siguientes del proyecto, sustituyendo los artículos 18, 19 y 20 de la ley 26.364.

La creación del Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, conforme al artículo 14 del proyecto y el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata de Personas bajo la Órbita del Ministerio Público (conforme al artículo 16 del proyecto) son dos herramientas fundamentales para la erradicación de este flagelo.

En fin, creemos que este proyecto significa un importante avance en la búsqueda permanente de garantizar la libertad y dignidad de la persona humana y en la persecución y sanción de aquellas personas o bandas organizadas que cometen estos horribles

crímenes. Por ello acompaño con mi voto la sanción de este proyecto.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BONGIORNO

**Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)**

Señor presidente:

Antes de abordar el proyecto en consideración quiero referirme a lo que a mi entender es la trata de personas. La trata de personas no es un problema único, monolítico y cerrado, es un conjunto de muchas problemáticas cuya combinación hacen a la complejidad de este fenómeno.

Cuando me refiero a que son muchos problemas, hablo de un problema moral, de un problema de crimen organizado, un problema social, un problema laboral, un problema migratorio, un problema de seguridad y control; y fundamentalmente de derechos humanos. Es decir debemos considerar al delito de trata de personas como un problema estructural y no como una serie de episodios aislados.

Asimismo, la complejidad y magnitud de este fenómeno se ve agravada por el hecho de que éste representa un mercado de miles de millones de dólares, siendo así la trata de personas, la tercera actividad ilegal que más ganancias reditúa. Este dinero permite el acceso de bandas criminales a distintos recursos que exceden aquellos con los que cuenta el Estado nacional para la prevención y combate de la trata de personas.

Con respecto al problema moral me refiero a la hipocresía y al doble estándar utilizado por distintos sectores de la sociedad a la hora de hablar de prevención y lucha contra la trata de personas, el cual por un lado condena todas aquellas actividades ilícitas vinculadas y por el otro lado, las promueven, indirectamente tanto a través del consumo de los servicios que dichas actividades generan o por medio de la difusión de su oferta. En este sentido el Poder Ejecutivo ha hecho un gran avance con la firma del decreto 936/11, que prohíbe la publicación de la oferta sexual en los medios gráficos, la cual constituye un vehículo en la comisión del delito de trata de personas. Sin embargo es importante destacar que este aspecto de la problemática involucra a todos los ciudadanos y que sólo a través de un compromiso sincero podremos lograr un avance significativo desde el punto de vista de la demanda.

Por su obviedad, está de más explayarme sobre la naturaleza criminal de la trata de personas. Sin embargo, es importante entender el aspecto organizativo de dicha criminalidad, el cual responde a los mismos principios que rigen a cualquier empresa. Es decir, estas bandas,

cuentan con estructuras, roles, logísticas, recursos y, lo más importante, están motivadas por el lucro, es decir por la necesidad de obtener un beneficio económico.

Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadíos dinámicos que son propios de su ciclo de vida.

Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones, estafas o secuestros extorsivos, que permiten la generación de los recursos financieros ilícitos.

Segundo, el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de tráfico ilegal que, a su vez, van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tenía.

Tercero, la acumulación inicial de ganancias se “blanquea” en actividades ilegales o legales.

En este sentido también hemos avanzado con la sanción de la ley 26.683, que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal, la cual constituye una herramienta indispensable para combatir el crimen organizado.

El aspecto social y laboral de este fenómeno se remite a la situación de vulnerabilidad de sectores de la sociedad que produjeron las políticas económicas-sociales neoliberales de la década de los noventa, cuyo desenlace fue la crisis económica social política e institucional del año 2001. Dicha vulnerabilidad, que se vio agravada ante la ausencia de un Estado despojado de su rol como contenedor social, sirvió de caldo de cultivo para la generación de las condiciones que posibilitan la trata de personas.

Sólo a través de la recuperación y fortalecimiento de ese rol estatal, así como de las políticas y programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y Argentina Trabaja obtendremos avances significativos.

La recuperación y fortalecimiento del Estado debe abarcar también a su rol de controlador de los flujos migratorios nacionales e internacionales, que permita disminuir la permeabilidad de sus fronteras. Éste es el objeto de programas como el Operativo Escudo Norte, el cual redundará en un incremento de la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste. Asimismo, constituye una articulación inteligente de las fuerzas armadas y el Ministerio de Seguridad.

En resumen podemos decir que la Argentina está haciendo las cosas bien, ha sabido entender y abordar esta problemática como un fenómeno estructural y en consecuencia ha tomado las medidas integrales que posibilitaron un avance significativo.

Todavía hay un largo camino por recorrer, pero creo que con el proyecto que hoy estamos tratando, cuyos atributos han sido muy bien explicados por el miembro informante y referirme a ellos sería caer en la redundancia, contribuirá a perfeccionar las herramientas necesarias para erradicar este flagelo.